

DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

S U M A R I O

Ministerio de Industrias y Trabajo

1

Decreto. Se autoriza la contratación de técnicos especializados, dependientes de la F.A.O., para actuar como asesores en la ejecución de determinados planes de fomento agropecuario.

2

Decreto. Se integra la Comisión Nacional y el Comité Ejecutivo de la Exposición Nacional de la Producción con el Decano de la Facultad de Ingeniería y Ramas Anexas.

3

Resolución. Se acepta la renuncia del Representante de los Municipios del Litoral e Interior en el Directorio del Frigorífico Nacional y se dispone solicitar a las Intendencias la designación de un Delegado titular y un suplente.

Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social

4

Mensaje. Se presenta un proyecto de ley por el que se otorga suma para la organización del VI Congreso Latino-Americano de Neurocirugía, en Montevideo.

5

Resolución. Se designa Fiscal Letrado para el Departamento de Flores.

CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO

MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA

1

Decreto. Se autoriza la contratación de técnicos especializados, dependientes de la F.A.O., para actuar como asesores en la ejecución de determinados planes de fomento agropecuario.

Ministerio de Ganadería y Agricultura.

Montevideo, 30 de junio de 1954.

Vista la conveniencia de contratar servicios de técnicos especializados, dependientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el fin de asesorar a las autoridades nacionales en la ejecución de los planes de fomento agropecuario previstos para los próximos años;

Considerando, que la ejecución de los planes aludidos entre los cuales se contemplan varias recomendaciones formuladas por la Misión Conjunta del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la FAO que visitó nuestro país en 1950-51 exige la intervención de técnicos que aseguren con su experiencia los propósitos perseguidos.

Que, en tal sentido, se estima necesario contar como mínimo y por el término de un año, con los servicios de un experto en suelos y fertilizantes, que tendría a su cargo el asesoramiento en materia de levantamiento del mapa del suelo uruguayo y orientar sobre el uso de fertilizantes; un experto en selección de pastos y en producción de semillas; un experto en enfermedades contagiosas del ganado, con amplia experiencia de laboratorio; un experto en el establecimiento y manejo de pasturas, con miras al fomento de la producción lanar, y un experto también de esta última especialidad, pero con miras al fomento de la industria lechera;

Que la F.A.O., organizada con fines de cooperación técnica internacional, está en condiciones de proporcionar la colaboración de que se trata, habiendo suscripto el 16 de diciembre de 1953 el Poder Ejecutivo "ad referendum" del Poder Legislativo, un acuerdo básico sobre asistencia técnica en el cual se prevé la facilitación de los servicios de expertos al Uruguay;

Que estando a estudio del Parlamento dicho acuerdo, el mecanismo en él previsto no podrá ponerse en movimiento en esta oportunidad aunque es posible alcanzar el mismo fin, acudiendo a procedimientos ya empleados con anterioridad por el Poder Ejecutivo y dicha agencia internacional, con resultados altamente satisfactorios;

Que en tales oportunidades han sido contratados por el Poder Ejecutivo funcionarios de F.A.O. expertos en cuestiones agropecuarias, estando a cargo de ese organismo los sueldos del técnico y gastos del transporte hasta el país, quedando de cargo del Gobierno el viático del técnico durante su estadía en el Uruguay, como asimismo los gastos por transportes dentro del territorio nacional y, en el caso de sus labores en general, los servicios administrativos de oficina como postales y telecomunicaciones, y atención médica, en caso necesario;

Que, de acuerdo con lo expuesto, no hay inconveniente en facultar al Ministerio de Ganadería y Agricultura para que, de acuerdo con procedimientos usados con anterioridad, efectúe las gestiones pertinentes ante la F.A.O. para contratar —por el término de un año— hasta cinco técnicos, expertos en las disciplinas mencionadas, a los fines reseñados;

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Gobierno,

DECRETA:

Artículo 1º Facúltase al Ministerio de Ganadería y Agricultura para gestionar ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F.A.O.), la contratación —por el término de un año— de hasta cinco funcionarios dependientes de ese organismo, especialistas en las materias indicadas en la parte expositiva del presente decreto y a los fines que en el mismo se mencionan.

Art. 2º Las erogaciones que en caso de acordarse dichas contrataciones se ocasionen, por los conceptos anteriormente expresados, serán atendidas con cargo a los rubros pertinentes del Ministerio de Ganadería y Agricultura y/o sus dependencias, según corresponda.

Art. 3º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Art. 4º Comuníquese, etc.

Por el Consejo, MARTINEZ TRUEBA. — FRUCTUOSO PITTALUGA. — Julián F. Álvarez Cortés, Secretario Interino.

2

Decreto. Se integra la Comisión Nacional y el Comité Ejecutivo de la Exposición Nacional de la Producción con el Decano de la Facultad de Ingeniería y Ramas Anexas.

Ministerio de Industrias y Trabajo.

Montevideo, 13 de julio de 1954.

Visto el decreto del Poder Ejecutivo de fecha 22 de setiembre de 1952, por el cual se crea una Comisión Hono-

ria de la Exposición Nacional de la Producción, así como también un Comité Ejecutivo Honorario con el cometido de realizar la Exposición Nacional de la Producción;

Considerando: Que es de interés para los fines propuestos ampliar la nómina de los integrantes de la Comisión Nacional y del Comité Ejecutivo de la Exposición incluyendo en las mismas a personas de notoria versación en la materia;

Atento a la solicitud formuladas por el expresado Comité Ejecutivo, en el sentido de que se integre el mismo, con la persona del señor Decano de la Facultad de Ingeniería y Ramas Anexas, Ingeniero don Carlos E. Berta, teniendo en cuenta que tal designación implica el reconocimiento de las altas condiciones personales de dicho técnico, quien con extraordinaria dedicación y particular eficacia ha colaborado con patriótico empeño en el desarrollo de la organización de la Exposición Nacional de la Producción proyectada.

El Consejo Nacional de Gobierno

DECRETA:

Artículo 1.º Intégrese la Comisión Nacional y el Comité Ejecutivo Honorario a que se refieren los artículos 2.º y 3.º del decreto del Poder Ejecutivo de 22 de setiembre de 1952, con el señor Ingeniero don Carlos E. Berta, Decano de la Facultad de Ingeniería y Ramas Anexas.

Art. 2.º Comuníquese, etc.

Por el Consejo: FORTEZA. — HECTOR A. GRAUERT.
— Julián F. Álvarez Cortés, Secretario Interino.

4

Resolución. Se acepta la renuncia del Representante de los Municipios del Litoral e Interior en el Directorio del Frigorífico Nacional y se dispone solicitar a las Intendencias la designación de un Delegado titular y un suplente.

Ministerio de Ganadería y Agricultura.

Montevideo, 13 de julio de 1954.

Vista la renuncia presentada por el Sr. Juan A. Maldonado del cargo de miembro del Directorio del Frigorífico Nacional, para el que fuera convocado por decreto de fecha 30 de junio de 1953, en su carácter de suplente electo por las Intendencias Municipales del Litoral e Interior.

Atento a que la renuncia en vista se funda en la circunstancia de integrar el Sr. Maldonado el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado,

El Consejo Nacional de Gobierno

RESUELVE:

Primero. Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Juan A. Maldonado, del cargo de miembro del Directorio del Frigorífico Nacional, como representante de las Intendencias Municipales del Litoral e Interior.

Segundo. Por el Ministerio de Ganadería y Agricultura, procédase a convocar a las Intendencias Municipales del Litoral e Interior para que designen un Delegado titular y otro suplente, ante el Directorio del Frigorífico Nacional, de conformidad con la Ley 9.737 de 17 de diciembre de 1937.

Tercero. Comuníquese, etc.

Por el Consejo: FORTEZA. — JUAN T. QUILICI. —
Julián F. Álvarez Cortés, Secretario Interino.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y PREVISION SOCIAL

8

Mensaje. Se presenta un proyecto de ley por el que se otorga suma para la organización del VI Congreso Latino-Americano de Neurocirugía, en Montevideo.

Poder Ejecutivo.

Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social.

Ministerio de Hacienda.

Montevideo, 7 de julio de 1954.

Señor Presidente de la Asamblea General, doctor don Alfeo Brum,

Señor Presidente.

En el mes de marzo de 1955 se realizará en Montevideo el VI Congreso Latino-Americano de Neurocirugía, de acuerdo con lo resuelto en el V Congreso Sudamericano celebrado en Lima en abril de 1953.

El Comité Ejecutivo Uruguayo a cuyo cargo se ha puesto la organización del certamen, ha solicitado el apoyo económico del Estado, estimando en la suma de pesos 50.000.00 la cantidad necesaria para responder al objetivo que se le ha asignado.

La importancia científica y cultural de dicha reunión hace deseable que ella pueda efectuarse de acuerdo con lo previsto, dándosele la trascendencia que la misma debe tener por el prestigio de las personalidades que han de intervenir. El carácter de Latino-Americano que se da por primera vez a estos Congresos, señala su interés creciente y el deseo de sus organizadores de darle un alcance mayor, acorde con el éxito científico que han logrado las reuniones precedentes.

En vista de ello, el Poder Ejecutivo considera justificado que los Poderes Públicos presten el apoyo económico solicitado. En consecuencia, tiene el honor de someter a la consideración de la Asamblea General el adjunto proyecto de ley, por el cual se autoriza la suma de pesos 50.000.00 para los fines expresados.

Confirmando en que el proyecto referido contará con la aprobación legislativa, se complace en renovar a ese Alto Cuerpo las seguridades de su más distinguida consideración.

Por el Consejo: ANDRES MARTINEZ TRUEBA. — JUSTINO ZAVALA MUNIZ. — EDUARDO ACEVEDO ALVAREZ. — Julián F. Álvarez Cortés, Secretario Interino.

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General

DECRETAN:

Artículo 1.º Autorízase al Poder Ejecutivo para disponer de la suma de cincuenta mil pesos (\$ 50.000.00) con destino a atender los gastos que ocasione la realización del VI Congreso Latino-Americano de Neurocirugía, que tendrá lugar en Montevideo en marzo de 1955.

La suma referida se tomará del rubro 25|03|03, 8.03.13 del Presupuesto General de Sueldos y Gastos.

Art. 2.º Comuníquese, publíquese, etc.

Montevideo, 7 de julio de 1954.

JUSTINO ZAVALA MUNIZ. — EDUARDO ACEVEDO ALVAREZ.

5

Resolución. Se designa Fiscal Letrado para el Departamento de Flores

Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social.

Montevideo, 7 de julio de 1954.

Vacante el cargo de Fiscal Letrado Departamental del Flores,

El Consejo Nacional de Gobierno

RESUELVE:

1.º Nómbrase Fiscal Letrado Departamental del Departamento de Flores —por vía de traslado— al actual Fiscal Letrado Departamental de Paysandú, doctor Raúl Abraham.

2.º Comuníquese, publíquese y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.

Por el Consejo: MARTINEZ TRUEBA. — JUSTINO ZAVALA MUNIZ. — Julián F. Álvarez Cortés, Secretario Interino.

“Nueva batería de cohetes y petardos”, a Matías Abad y otro de Buenos Aires. — Acta Nº 9.078 “Mejoras en el horneado de pan” etc., de Samuel Harrison, de Africa. — Acta número 9.067 “Procedimiento mejorado par la confección de trabajos en fotocromo” etc., a Oscar E. Proietto y otro de Buenos Aires. — Acta Nº 9.441 “Nuevo sistema de envase”, a Wermer Winterhoff, de Montevideo.

—Se concede prórroga por 70 días a los siguientes expedientes: Acta Nº 9.946 “Una vigueta prefabricada para la construcción de losas de entre pisos, techos”, etc., de Firma S. A., de Construcciones y etc., de Buenos Aires. — Acta Nº 9.834 “Boquilla para fumadores”, a José M. Barnett, de Buenos Aires.

—Se concede prórroga por el término de 90 días a los siguientes expedientes: Acta Nº 6.862 “Un nuevo proceso aplicable en la agricultura para evitar la helada” a Musubi Aoki, de Brasil. — Acta Nº 10.060 “Mejoras en la formación y la fusión de lentes multifocales”, a Pittsburgh Plate Glass Company, de Estados Unidos de América. — Acta número 10.074 “Nuevos compuestos químicos de valor terapéutico” etc., a The Wellcome Foundation Ltd., de Inglaterra. — Acta Nº 9.854 “Una máquina para cortar duraznos o frutos similares” etc., a Pedro H. Guatelli y Luis A. Blanc, de Mendoza, República Argentina. — Acta Nº 9.752 “Nuevo termo protegido contra golpes y vibraciones”, a Salomón Weinreb, de Montevideo. — Acta Nº 9.697 “Nuevo atomizador para perfumes”, a Salomón Pintos, de Montevideo. — Acta Nº 10.097 “Mejoras en el relativo a elementos para filtros”, a Joseph Allen Pickard, de Inglaterra. — Acta Nº 9.080 “Procedimiento y dispositivos de aglomeración de mezclas” etc., a Societe Du Vacuum Concrete, de Marruecos.

—Se notifica del pago de la primera anualidad: Acta Nº 6.743 “Alcoholes polídricos poliméricos y sus esteres”, a Devoe y Reynolds Company Inc. de Estados Unidos de América.

—Por resolución superior se conceden las siguientes resoluciones de marcas: Nº 62.529 “A.E.G.” L’Alimentation Equilibree”, de L’alimentation Equilibree Community de Francia. — Nº 62.528 “Sharp’s Super Kreem Toffee”, de Edward Sharp y Sons Ltd. de Inglaterra. — Nº 62.567 “Jean Patou” de Jean Patou Perfumeur S. A., de Francia. — Número 62.569 “Saint James”, de Societé Anonyme Coloniales Ernest Lambert Et Cie., de Fort de France (Martinique).

—Por resolución superior se desestiman la siguiente marca: Acta Nº 49.357 “Priorato”, de Juan Ponce Serra, de Montevideo.

La Secretaría.

MINISTERIO DE I. PUBLICA Y PREVISION SOCIAL

Relación de los asuntos aprobados por el Consejo Nacional de Gobierno, en acuerdo con el señor Ministro de Instrucción Pública y Previsión Social, el 14 de julio de 1954.

Mensaje a la Asamblea General, reiterándole sanción del proyecto de ley que autoriza al Consejo del Niño para vender a la Universidad del Trabajo del Uruguay, el edificio y sus mejoras donde funciona actualmente el Hogar Rural de Flores.

—Mensaje a la Suprema Corte de Jus-

ticia remitiéndole para su conocimiento y fines pertinentes, copia autenticada de la nota elevada a esta Secretaría de Estado por la Dirección General de Institutos Penales, donde figuran cuentas pendientes de pago pertenecientes a diversas dependencias del Poder Judicial.

—Autorizar la convertibilidad en dólares, a cambio oficial, de la suma de pesos 4.000.00, a tomarse de la contribución efectuada por el Poder Ejecutivo para la realización de la Exposición de obras del maestro Joaquín Torres García, a realizarse en el Museo de Arte Moderno de París, con el fin de una mejor financiación para la misma.

—Autorizar a esta Secretaría de Estado para disponer de \$ 111.20, con el fin de adquirir en la firma Aliverti S. A., que presentara el presupuesto más conveniente de acuerdo al informe de la Comisión Asesora de Adquisiciones, 8 tónicas para las empleadas encargadas de la limpieza de su sede.

—Autorizar a la Comisión Nacional de Bellas Artes para disponer de \$ 950.00 con el fin de abonar a la Impresora Uruguaya S. A. los trabajos de confección del Catálogo de la Exposición de Pintura Moderna Holandesa.

—Declarar que la señorita C. Irene Rodríguez, Maestra de Instrucción Primaria del Consejo del Niño, ha llenado las exigencias establecidas por la ley de 5 de enero de 1948, para continuar en el desempeño de su cargo por el término y condiciones que la misma indica, teniendo asimismo derecho a percibir la bonificación por la misma establecida.

—Confirmar la designación del arquitecto Fernando García Esteban, para integrar el Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, en representación del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal y del Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria.

—Nombrar de acuerdo con el resultado del concurso respectivo, para el cargo de Radifonista de 1.ª del SODRE, al señor Jaime Francisco Bravo.

—Nombrar para el cargo de Portero de la Dirección General de Institutos Penales, al señor Jorge Helal Braide.

—Conceder prórroga de licencia para residir en el extranjero, por el término de seis meses, a los siguientes pensionistas: Lorenza S. de Saques, Federico Susviela, Josefa P. López, María Luisa Gómez de Domínguez, María Helena Frías Concepción Tort de Ruprecht, Carmez G. D. y Angela E. del Pino, María E. Torre de Toucón, Petrona y Emilia Velazco y Silva, Carmen San Vicente de Dax, Enriqueta N. y Juana E. Domínguez Oribe Isabel y María Magdalena Varsi de la Sierra, María Julia Anido de Turenne Antonia y Marisa García, Elina y Ester Vivas Costa, Elisa Lamas y Artigas.

—Aceptar la renuncia presentada por el señor Eduardo Garretano del cargo de Portero de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio (Para acogerse a los beneficios de la jubilación).

—Aceptar la renuncia presentada por el señor F. Valentín Echenique del cargo de Subagente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio (Para acogerse a los beneficios de la jubilación).

—Aceptar la renuncia presentada por el señor Luis A. Reyes del cargo de Peón del Instituto Nacional de Alimentación (Razones particulares).

—Aceptar la renuncia presentada por la señora Emilia Muñoz de Herrero del cargo de Oficial 5º del Archivo General de la Nación (Artículo 30).

—Aceptar la renuncia presentada por el señor Luis Geloso Alvarez, del cargo de Cocinero del Instituto Nacional de Alimentación. (Artículo 30).

—Aceptar la renuncia presentada por el General (R) D. Alfredo R. Campos, en su carácter de Miembro de la Comisión Asesora para la ampliación y construcción de las sedes de los Museos Histórico Nacional, Nacional de Bellas Artes y de Historia Natural, agradeciéndole los importantes servicios prestados.

—Nombrar para el cargo vacante de Peón, Categoría 4, Grado 2, Item 6.24, dependiente del Instituto Nacional de Alimentación, al señor Elbio Ramón Montaña.

—Autorizar a la Comisión Interventora del Consejo del Niño para contratar los servicios de los profesores especiales que en la respectiva resolución se detallan, por todo el corriente ejercicio y con las asignaciones que en cada caso se indican, con cargo al rubro 1.02 “Sueldos con cargo a Partidas Globales” del Item 6.23.

—Declarar que la misión de estudios encomendada por la Facultad de Medicina al doctor Julio R. Marcos, con motivo de su viaje al Brasil, tiene carácter oficial.

—Declarar que las misiones de estudios encomendadas por la Facultad de Medicina al doctor Antonio Stabile, con motivo de su viaje a los Estados Unidos de Norte América y Gran Bretaña, tienen carácter oficial.

—Designar para integrar la Comisión Nacional de Bellas Artes al señor Leonardo Cantú Sienra.

—Encomendar a la señora Norma Giacosa de Fontana, con motivo de su viaje a Europa, el cumplimiento de una misión de estudios de carácter oficial.

—Autorizar a esta Secretaría de Estado para realizar en su sede, obras de refacción por la suma de \$ 8.339.32, que se efectuarán por cuenta de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, bajo el régimen de administración directa.

—Declarar que la misión de estudios encomendada por la Universidad del Trabajo del Uruguay al señor Eduardo Schaffner, con motivo de su viaje a los Estados Unidos de Norte América, en usufructo de una beca acordada por A.P.I.C.U.E., tiene carácter oficial.

Asuntos fuera de relación:

—Tener por desistido el reclamo interpuesto por la funcionaria del Instituto Nacional de Alimentación doña María Rivadavia de Clavijo, a su solicitud.

—Desestimar el recurso interpuesto por la funcionaria de la Biblioteca Nacional doña María Platas de Ciaschetti, por haber sido presentado fuera de término.

—Tener presente la solicitud del señor Juan de Dios Mendoza, funcionario del Consejo del Niño, como postulante al cargo de Secretario de dicho organismo, para el momento en que la propuesta respectiva sea considerada.

—No hacer lugar a la solicitud de la funcionaria del Consejo del Niño doña Herminia Cavagnaro Vernengo, en el sentido de que se le incluya en el presupuesto de dicho organismo como Visitadora de 1.ª Categoría, por no existir cargos como el solicitado, sino cargos de Asistentes Sociales de 1.ª Categoría para los que se requiere diploma de capacitación que no posee la peticionaria.

La Secretaría.



CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XXXVI LEGISLATURA

7ª SESION ORDINARIA

(EXTRAORDINARIA)

Abril 8 de 1954

PRESIDE EL SEÑOR HECTOR BATLLE CORREA
(PRIMER VICE-PRESIDENTE)

SUMARIO

- 1—Asistencia.
- 2—Proyecto de ley sobre arrendamientos rurales o de estabilización agraria mínima.
 - En discusión general.
 - Manifestaciones del señor senador Chouhy Terra.
 - (8) Continúa la discusión.
 - Exposición del señor senador Bonino.
 - El señor senador Espalter plantea su posición personal frente al proyecto en debate.
 - Intervención de los señores senadores Chiarino y Raffo Frávega.
 - El señor senador Guichón mociona para que el Senado declare que pueden intervenir en la consideración y aprobación del proyecto de ley.
 - Intervenciones de los señores senadores Viña, Arrillaga Safons, Manini Ríos, Vignale, Batlle Pacheco, Pinto de Vidal, Barrios Amorín, Gamba, Amestoy de Mochó, Bayley y Cusano.
 - Se aprueba la moción del señor senador Guichón.
 - Constancia de los señores senadores Chiarino y Haedo.
 - Exposición del señor senador Bayley.
 - Intervención de los señores senadores Gamba y Chiarino.
- 3—Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de Su Majestad Británica.
 - Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al doctor José Antonio Quadros.
 - Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de Bolivia.
 - Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al señor Julio Antonio Lacarte Muró.
 - Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de Ecuador.

- Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al doctor Julio F. Casas Araújo.
- El señor senador Chouhy Terra solicita que las referidas solicitudes de venia, se consideren antes de entrar al orden del día.
- Intervención del señor senador Guichón.
- (5) Se aprueba la moción del señor senador Chouhy Terra.
- (7) Concedidas en sesión secreta.
- 4—Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir al Enfermero del Servicio de Asistencia Externa, señor Ricardo Egipcio.
 - El señor senador Bove Arteaga solicita se considere antes de entrar al orden del día.
 - (5) Así se resuelve.
 - (7) Concedidas en sesión secreta.
- 6—El Senado pasa a sesión secreta.
- 7—(Vueltos a sesión pública).
 - La Mesa informa que el Senado, en sesión secreta, concedió las venias solicitadas por el Poder Ejecutivo para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de Ecuador, al doctor Julio Antonio Lacarte Muró. (Carp. 1654);
 - Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de Ecuador, al doctor Julio F. Casas Araújo. (Carp. 1655);
 - y para destituir al Enfermero de Servicio de Asistencia Externa, señor Ricardo Egipcio. (Carpeta 1615. — Rep. 10).
- 9—Se levanta la sesión por falta de quórum, a la hora 20 y 30 minutos.

ORDEN DEL DIA DE LA CITACION

Primera discusión general y particular del proyecto de ley sobre arrendamientos rurales o de estabilización agraria mínima.

Carp. 919/1952. — Rep. Nº 11.

1

A la hora 18 y 19 minutos entran a la Sala de Sesiones los señores senadores Arrillaga Safons, Barrios Amorín, Batlle Pacheco, Bayley, Bonino, Bove Arteaga, Cusano, Chiarino, Chouhy Terra, Espalter, Fabini, Fernández Crespo, Gamba, Guichón, Haedo, Manini Ríos, Mochó (Amestoy de), Vidal (Pinto de), Vignale, Viña y Raffo Frávega.

Faltan:

Con licencia: el señor Presidente, doctor Brum.

2

Con aviso: los señores senadores Carballo, Cutinella, Charloche, Fernández Ríos, Ferrero, González Conzi, Rodríguez Larreta y Sancho Barceló.

SEÑOR PRESIDENTE. — Habiendo número, está abierta la sesión.

De acuerdo a lo resuelto en la última sesión, el Senado ha sido convocado a sesión extraordinaria y permanente a fin de considerar el proyecto de ley sobre arrendamientos rurales o estabilización agraria mínima.

Léase:

SEÑOR GUICHON. — Formulo moción para que se suprima la lectura.

(Apoyados).

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar si se suprime la lectura.

Los señores senadores por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Se vota: Afirmativa).

(Los antecedentes cuya lectura se suprime, son los siguientes): Carpeta N.º 919/52. — Reaprtido 11/54.

Cámara de Representantes.

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º Todo productor rural tiene derecho a una radicación mínima en la tierra que ocupe y a condiciones de trabajo que le permitan desenvolver económicamente la explotación agraria que realiza, obteniendo la razonable utilidad que sirva de estímulo a su actividad creadora.

En caso de que el propietario ceda el uso o el goce de un predio rural, los plazos de permanencia en la tierra de esos productores, deben regularse de acuerdo con esa finalidad de protección al trabajo rural, sin desmedro del principio general de que la explotación de la tierra está subordinada al interés nacional de su conservación y fertilidad futura, y sin perjuicio, asimismo, de las medidas previstas por esta ley, tendientes a asegurar que los precios de arriendo y los porcentajes de aparcerías mantengan equitativa relación para ambas partes contratantes en función de la rentabilidad normal del predio.

Art. 2.º Todo contrato por el que una de las partes se obliga a conceder a otra el uso y goce de un predio rural con destino a cualquier explotación agraria, y la segunda a pagar por ese uso o goce un precio en dinero o en frutos naturales o productos de la cosa, queda sujeto a las disposiciones de la presente ley.

Los derechos y obligaciones conferidos por esta ley al arrendatario, comprenderán igualmente al subarrendatario.

Art. 3.º No se consideran comprendidos en esta ley los convenios sobre pastoreo de hasta un año de plazo, salvo aquellos que se renueven o se prorroguen por un plazo, que exceda aquel límite, o cuando, previa notificación al propietario y sin oposición documentada de éste, ante el Juzgado de Paz, el tenedor del predio lo retenga por un plazo mayor de un año.

Sin la constancia de este consentimiento del propietario, el predio debe ser desalojado en el plazo de veinte días a contar del vencimiento del convenio.

CAPITULO I

De la inscripción de los contratos

Art. 4.º Desde la promulgación de la presente ley, todo contrato de arrendamiento, aparcería, subarrendamiento y subaparcería, debe ser extendido por escrito e inscripto en el Registro General de Arrendamiento y Anticresis, de acuerdo con el régimen y con los efectos establecidos por la Ley N.º 10.793, de 25 de setiembre de 1946.

Dentro de los veinte días de la inscripción del contrato, el Registro General de Arrendamientos y Anticresis enviará a la Oficina de Catastro del Departamento en que esté situado el predio, un formulario con los siguientes datos del contrato: nombre de los contratantes, fecha, plazo, precio, área y ubicación del predio. Este documento quedará registrado en la Oficina de Catastro Departamental a los efectos del artículo séptimo.

Art. 5.º Los contratos de subarrendamiento y subaparcería no podrán ser inscriptos sin la constancia de su autorización en el contrato originario, y cuando el precio o el porcentaje acordado sea superior al convenio en el contrato de arrendamiento o aparcería, salvo autorización del Jurado que por razones justificadas podrá permitir un aumento no mayor del 10 o/o.

Art. 6.º La presentación del contrato inscripto o en su defecto, del certificado de inscripción, o de un certificado notarial, es requisito indispensable para las partes contratantes en toda gestión ante organismos públicos relacionada con su condición de tales.

Art. 7.º La inscripción estará a cargo del arrendador, subarrendador o aparcerero dador, y deberá efectuarse dentro de los treinta días de celebrado el contrato, incurriendo, en caso de omisión, en una multa del 1 o/o de la renta anual por cada mes o fracción de mes. Sin perjuicio de ello, el arrendatario o aparcerero tendrá derecho de obtener por su parte dicha inscripción, con derecho a repetir contra el

arrendador o aparcerero dador por los gastos, derechos de inscripción y multas.

Art. 8.º Si el propietario de un predio arrendado lo enajenara sin haber inscripto el contrato de arrendamiento en su oportunidad o posteriormente a la venta se inscribirá el contrato por el propietario o el arrendatario y si por ello, según el caso, el arrendatario o el comprador resultase perjudicado por concepto de la disposición del artículo 52 de la Ley N.º 10.795, el vendedor podrá ser demandado por daños y perjuicios, que se estimarán en suma no inferior al 25 o/o del aforo íntegro del predio. El juicio se seguirá por el procedimiento ordinario.

CAPITULO II

De los plazos

Art. 9.º A partir de la promulgación de esta ley, en todo contrato de arrendamiento de bienes raíces para explotación agraria que no estipule plazo o que estipule uno menor de cinco años, el arrendatario buen cumplidor de sus obligaciones contractuales, tendrá derecho a que se considere realizado por el término mínimo de cinco años, sin perjuicio de su derecho de opción a la prórroga del mismo, de acuerdo con el régimen previsto por los artículos siguientes de esta Ley.

El arrendatario que renunciare al derecho de permanencia legal que exceda del contractual deberá, seis meses antes de vencerse la anualidad, notificar su renuncia al arrendador o a su representante legal por medio del Juez de Paz competente, en procedimiento verbal o por acta notarial. Si así no lo hiciera, el contrato subsistirá durante el año siguiente, y así sucesivamente, hasta completar los cinco años.

Art. 10. El arrendatario tendrá derecho a optar por una prórroga del contrato a partir del plazo legal de cinco años o del contractual, en caso de que fuere mayor, hasta completar ocho años de permanencia en el predio, previa autorización del Jurado de Arrendamiento y Aparcerías creado por el artículo 33 de esta Ley.

Para ejercer el derecho de prórroga del contrato se requiere:

A) Ser buen pagador y haber cuidado como "buen padre de familia", las mejoras y el predio, preservándolo de daños que esté en su poder evitar, como de la invasión de malezas y la producción de erosiones o cualquier otro elemento de degradación por el uso inadecuado de la tierra;

B) Denunciar al Jurado la intención de hacer uso de ese derecho con un año de anticipación al plazo legal de cinco años, o al contractual, si fuere mayor.

El Jurado podrá requerir el asesoramiento de la Dirección de Agronomía sobre los resultados que para la preservación de la tierra puede tener la forma de explotación a que se le somete, así como disponer la realización de ciertas mejoras y modificaciones de las formas de explotación de acuerdo con el arrendador o propietario aparcerero y siempre que guarden relación con las finalidades del contrato.

Art. 11. El Jurado de Arrendamientos y Aparcerías se opondrá a la opción de la prórroga, en los siguientes casos:

A) Cuando el arrendador propietario reclame la tierra para ocuparla y trabajarla directamente, por sí o por sus parientes, hasta de segundo grado de consanguinidad o afinidad, por un plazo no menor de tres años. Igual derecho corresponde cuando el arrendador sea una persona jurídica;

B) Cuando, previa aceptación del plan por el Instituto Nacional de Colonización y dentro de las condiciones establecidas en el artículo 22 de la Ley N.º 11.029, el arrendador propietario reclame la tierra para subdividirla y colonizarla; y

C) Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 54. La alteración posterior por el arrendador, del destino alegado para oponerse a la opción de prórroga del contrato, sin justa causa superviniente, hará que se tenga incurso en multa hasta el equivalente de cinco anualidades de renta como única lesión de derecho si el pago fuese en dinero; y/o si fuese en especie, se calculará sobre la base del rendimiento promedio de los cinco años de plazo legal y del precio de los productos de la última zafra. Esta multa se impondrá mediante los procedimientos previstos en el artículo 19 de esta ley y su producido beneficiará al arrendatario privado de su derecho de opción.

Art. 12. En el caso de enajenación del predio, posterior a la concesión de la prórroga, el adquirente que se hallare en una de las circunstancias previstas en el artículo anterior, podrá ampararse en el mismo derecho para obtener la disponibilidad del predio.

Art. 13. Vencido el plazo legal de cinco años, o el contractual si fuera mayor, así como el de la prórroga, si la hubiera, el arrendatario deberá hacer entrega inmediata del predio.

Si el arrendatario estuviese en goce de la prórroga, la invocación justificada de cualquiera de las causas previstas en el artículo 11, podrá interrumpirla, pero el arrendatario dispondrá del plazo de un año para hacer entrega del predio.

Art. 14. En los casos establecidos por el artículo anterior y previa presentación del certificado expedido por el respectivo Jurado Departamental o Nacional que acredite el vencimiento del plazo de ocupación del predio, el Juez decretará sin más trámite y a instancia de parte, el lanzamiento del ocupante, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 19 de la Ley N.º 8.153, de 16 de diciembre de 1927. Además de la causal de prórroga contemplada por el referido artículo el Juzgado, en las circunstancias previstas por el artículo 141 del Código Rural, deberá conceder al arrendatario el término estrictamente necesario para recoger el fruto de las sementeras que hubiesen sido plantadas antes de la conclusión del contrato. En este último caso, los gastos judiciales estarán a cargo de la parte obligada a conceder el plazo respectivo para las tareas agrícolas, sin perjuicio de su derecho de reiterar la petición de lanzamiento si en su oportunidad no se desocupa el predio.

CAPITULO III

De los precios

Artículo 15. Los precios de los contratos con dos años o más de vigencia, podrán ser revisados a pedido de cualquiera de las partes, por el Jurado de Arrendamientos y Aparcerías. Este examinará los casos que se someten a su resolución, al efecto de fijar el precio del arriendo que corresponde a la rentabilidad económica normal del predio. Con tal objeto, estudiará las circunstancias de cada contrato, calidad de los campos, mejoras y tipo de explotación de cada inmueble, los valores de venta de campos de la zona, el precio del arrendamiento anterior al vigente y las causas que pudieran haber dado mérito a su modificación. Los precios fijados por los Jurados tendrán efecto retroactivo a la fecha de la demanda, y podrán ser objeto de nuevas revisiones siempre que hayan transcurrido dos años de la revisión anterior.

Art. 16. Para la determinación de la rentabilidad del predio, las producciones que reciban subsidios del Estado o precios de estímulo al productor, sólo podrán ser consideradas por su valor económico normal, con prescindencia del estímulo o del subsidio, o del margen de precio que los represente.

También se considerarán incluidas las producciones cuyo costo de producción sea financiado en parte por el Estado o los Municipios, con cargo a fondos públicos. Para el caso de tales producciones, no se tomará en cuenta el margen que represente dicha contribución.

Art. 17. Las producciones subsidiarias o que no tengan precios de estímulo, pero cuyas cotizaciones hubieren sufrido variantes superiores al 25 o/o en los precios del último bienio, serán consideradas por su valor económico probable de comercialización en el país, sin que en ningún caso la producción que se estime pueda ser tomada en cuenta por un valor superior al precio del último bienio, menos un 20 o/o.

Si las variantes en los precios fueren inferiores al porcentaje referido, los Jurados procederán del mismo modo, pero con el límite del correspondiente promedio puro, sin reducción alguna.

Art. 18. Cuando el Juzgado modificare el precio del arrendamiento en más o en menos de un 30 o/o, siempre que no hubiese vencido el término del contrato, cualquiera de las partes tendrá el derecho a la rescisión del mismo.

Cuando la rescisión fuera solicitada por el arrendador, el arrendatario dispondrá de un año de plazo para desocupar el predio.

Art. 19. La violación comprobada ante el Juez competente del precio fijado por el Jurado, será sancionada con multa que no podrá ser superior a una anualidad del arrendamiento estipulado.

Para la aplicación de estas multas regirá el procedimiento de juicios ordinarios de menor cuantía ante el Juez competente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley N.º 8.153, de 16 de diciembre de 1927, con apelación ante el superior que corresponda y su producido beneficiará a la parte perjudicada.

CAPITULO IV

De la parcería asimilable al arrendamiento

Artículo 20. Los contratos de parcería en los cuales el porcentaje con que el dador del inmueble contribuye al capital de explotación o de los gastos de administración no llega al 40 o/o, excluyendo el valor de la tierra, se consideran contratos de arrendamiento a los efectos de las disposiciones de esta ley sobre plazos y derechos de prórroga.

Quedan exceptuados de estas disposiciones los contratos accidentales por una sola cosecha, y los casos de cesión de tierras al agricultor para trabajos de mejoramientos de pasturas, siembra de tréboles, raigrás y otros cultivos similares mejoradores del suelo.

No obstante, si se comprobare que no se cumple primordialmente esta finalidad o que se la invoca como medio habitual de ceder el uso y el goce del predio, eludiendo proporcionar al agricultor la garantía de estabilidad y demás beneficios que esta ley le acuerda, el dueño del predio quedará sometido al imperio de sus disposiciones.

Art. 21. Al término del plazo legal o contractual si fuera mayor, o en su caso, de la prórroga, el aparcerero debe abandonar el predio sin derecho a otro plazo suplementario que el necesario para levantar el fruto de las sementeras.

Art. 22. Son aplicables a los contratos de parcería a que se refiere el artículo 20, las disposiciones establecidas en el Capítulo III, cuando en función de la rentabilidad de la tierra, el porcentaje de los beneficios para cualquiera de las partes no guarde proporción con el aporte que cada cual hace en la explotación.

El Jurado juzgará la equidad de la proporción entre aportes y beneficios, estimando el aprecio de los frutos en su equivalente en dinero.

CAPITULO V

De las mejoras

Artículo 23. El propietario que de un predio en arrendamiento o aparecería, para agricultura, ganadería o granja queda obligado a dotarlo de las siguientes mejoras necesarias: alambrado divisorio, una casa higiénica de tres piezas, cocina, retrete, agua potable, y según la extensión del predio, una dependencia para peones.

Art. 24. Son también de cargo del propietario las mejoras útiles requeridas para la normal explotación del predio, como alambrados interiores, bretes, bañaderos, arboledas de protección, aguadas artificiales y toda adaptación del predio a los fines del contrato.

Art. 25. Dichas mejoras podrán realizarse por acuerdo del propietario y arrendatario, durante la vigencia del contrato, en los términos que ellos libremente determinen.

En el caso de que el propietario hiciera por sí mismo dichas mejoras, dispondrá del crédito que le acuerda el Decreto-Ley N.º 10.154 de 13 de mayo de 1942.

Art. 26. Si el propietario no realizare por sí mismo dichas mejoras útiles, el arrendatario cuyo contrato esté a más de dos años de su vencimiento, podrá dirigirse a la Oficina de Agronomía Regional, presentando un plan de mejoras cuyo monto no podrá exceder del 20 o/o del valor de aforo del predio para la contribución inmobiliaria. Dicha Oficina comunicará al propietario por carta certificada, el plan de mejoras propuesto por el arrendatario y, si no mediare oposición dentro de los treinta días, se presumirá su aceptación, quedando autorizado el arrendatario para realizarlas.

El agrónomo regional fiscalizará la realización de las obras de acuerdo con el plan propuesto.

Art. 27. En caso de desacuerdo sobre la utilidad de las mejoras, así como sobre el monto de la inversión, se recurrirá al juicio arbitral.

Los árbitros para dictar sentencia considerarán las mejoras existentes en el predio, las condiciones de la explotación y la superficie del predio.

Art. 28. Todo arrendatario tiene derecho a ser resarcido por el propietario, en las mejoras útiles que hubiera realizado de acuerdo con las condiciones previstas en el artículo 26. Dichas mejoras serán pagadas en dinero, por el valor que tengan al tiempo de ser entregada la propiedad, fijándose este valor, en caso de desacuerdo, mediante juicio arbitral.

Para esta indemnización, el propietario podrá utilizar el crédito a que se refiere el Decreto-Ley N.º 10.154, de 13 de mayo de 1942.

Art. 29. Para realizar las mejoras el arrendatario podrá recurrir al crédito del Banco de la República a que se

refiere el Decreto Ley N.º 10.154, de 13 de mayo de 1942, aunque sin afectar el predio con el derecho real.

El propietario será, no obstante, garantía subsidiaria del crédito por el valor que tengan las mejoras en el momento de la nueva entrega del predio, no teniendo frente al Banco obligaciones mayores que las que tiene frente al arrendatario por concepto de indemnización de mejoras, de acuerdo con el artículo anterior. Todo ello sin perjuicio de la acción que el Banco tendrá contra el arrendatario como acreedor simple, por el monto del referido crédito.

Antes de la entrega del préstamo, el Banco notificará al propietario de la existencia del mismo, a los efectos de la obligación creada por esta ley.

Art. 30. Todo contrato de arrendamiento o aparcería supone la obligación de formar un fondo de previsión, para el mejoramiento del suelo y el mantenimiento de la fertilidad del predio que se explota.

El fondo se integrará con el aporte, por ambas partes, equivalente al tres por ciento (3 o/o) del arrendamiento o de la cuota parte de los frutos que cada contratante perciba; será administrado por los interesados y aplicado a las deficiencias más apremiantes del predio.

El Poder Ejecutivo reglamentará este precepto, en cuanto a la forma de su cumplimiento y a las sanciones por su omisión.

CAPITULO VI

De los Jurados

Artículo 31. Las diferencias entre arrendador y arrendatarios o aparceros sobre precios y plazos serán planteadas en primer término ante los Jueces de Paz de las capitales de los Departamentos, y de las ciudades, pueblos y secciones del interior del país que estén a cargo de abogados o escribanos públicos, de acuerdo con el artículo 247, inciso 2.º, de la Constitución de la República.

Art. 32. Presentada la demanda, el Juez citará a las partes dentro de un plazo máximo de ocho días a un comparendo de conciliación proponiendo soluciones que armonicen la situación económica y jurídica de los litigantes.

Si hubiere avenimiento de las partes, el Juez asentará en actas las conclusiones logradas, de las que, a petición de partes, expedirá testimonios, quedando terminado el juicio.

Cuando no hubiere acuerdo de partes el Juez dejará en actas constancia del fracaso del comparendo y cualquiera de las partes estará legalmente habilitada para presentarse al Jurado que se crea a continuación.

Art. 33. Créase en cada Departamento, un Jurado de Arrendamientos y Aparcerías.

El Jurado Departamental estará constituido por tres miembros, designados con sus respectivos suplentes:

Uno, por la Suprema Corte de Justicia, que lo presidirá, pudiendo ser un magistrado de cualquier categoría.

Uno, por el Ministerio de Ganadería y Agricultura, en la persona del Agrónomo o Veterinario Regional.

Uno, por la Comisión Nacional de Fomento Rural.

Art. 34. El Poder Ejecutivo, a solicitud de los Jurados Departamentales, podrá disponer la instalación de Jurados Regionales, con las mismas competencias y preferentemente con la misma integración de los Jurados Departamentales.

Art. 35. Créase en Montevideo un Jurado Nacional de Arrendamientos y Aparcerías, compuesto de tres miembros, designados con sus respectivos suplentes:

Uno, por la Suprema Corte de Justicia, que lo presidirá.

Uno, por el Ministerio de Ganadería y Agricultura.

Uno, conjuntamente por las entidades rurales nacionales con personería jurídica.

Art. 36. Los Jurados Departamentales y el Jurado Nacional se constituirán dentro de los cuarenta días de promulgada esta ley. Si pasado dicho término las instituciones privadas mencionadas en los artículos 33 y 35 no hubiesen efectuado las designaciones, las realizará el Poder Ejecutivo dentro de la nómina de afiliados a las mismas.

Art. 37. Los cargos de los jurados serán honorarios y obligatorios. Los miembros durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser confirmados en los mismos.

Art. 38. Los Jurados Departamentales y Regionales funcionarán en los locales que solicitarán a las respectivas Intendencias Municipales.

El Jurado Nacional funcionará en la sede del Ministerio de Ganadería y Agricultura.

Los Jurados solicitarán a estos organismos el personal y los útiles necesarios para su funcionamiento.

Art. 39. Son cometidos de los Jurados Departamentales de Arrendamientos y Aparcerías, a pedido de parte y con sujeción a las disposiciones de esta ley:

A) Anterior o denegar las prórrogas de arrendamientos

o aparcería dentro de los plazos máximos establecidos y rescindir las mismas de acuerdo con el régimen establecido en el Capítulo II; y

B) Ajustar los precios de arrendamiento o los porcentajes de aparcería.

El ajuste de precios y de otras condiciones del contrato no variará el punto de partida para el cómputo de los plazos.

Art. 40. Son cometidos del Jurado Nacional:

Resolver las apelaciones interpuestas respecto de los laudos de los Jurados Departamentales o Regionales y entender en los casos que sobre limitaciones de los arrendamientos dispone el Capítulo VIII.

Art. 41. Los laudos serán dictados por mayoría de votos.

Tratándose del Jurado Departamental, las partes podrán deducir contra aquellos laudos, dentro del término de quince días, los recursos de reposición o de apelación o ambos conjuntamente en forma subsidiaria. Si el laudo fuera confirmado por unanimidad, será inapelable; salvo el caso de que la resolución del Jurado aumentase o disminuyese el precio del arrendamiento o aparcería vigente en un porcentaje mayor del 30 o/o.

Para los laudos dictados por mayoría por el Jurado Nacional habrá recurso de apelación en relación, para ante el Tribunal de Apelaciones de Turno.

Lo dispuesto por este artículo se entenderá sin perjuicio del recurso de nulidad ante la Justicia Ordinaria que procederá siempre en las circunstancias establecidas por el artículo 570 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 42. La demanda deberá formularse por escrito, con exposición detallada de las razones en que se funde. En el mismo escrito, el actor deberá ofrecer la totalidad de la prueba que se proponga producir, sin que luego esta prueba pueda ser ampliada en ningún caso.

Art. 43. Dentro de las veinticuatro horas de recibido el petitorio, el Jurado convocará a las partes a audiencia verbal con término de veinte días, a fin de tentar la conciliación y si ésta no se realizara, oír la contestación del demandado, con advertencia de que en la misma audiencia o antes, si éste lo prefiriere, deberá ofrecer la información o prueba de su parte.

En esa oportunidad, se diligenciará la prueba del actor (artículo anterior) y la que en ella ofreciere el demandado.

Con la citación del demandado se acompañará siempre copia del escrito del actor y de la documentación agregada.

El demandado, en lugar de concurrir a la audiencia, tendrá la facultad de presentar por escrito su defensa y ofrecer prueba hasta la fecha señalada para la celebración de aquélla.

Art. 44. Sólo en el caso de que en la referida audiencia, a juicio del Jurado, no hubiere sido posible el diligenciamiento de la prueba ofrecida, se señalará otra dentro de los seis días siguientes como máximo. La nueva audiencia no podrá en ningún caso, ser prorrogada o suspendida, salvo acuerdo de las partes.

Art. 45. Las audiencias a que se refieren los artículos anteriores se realizarán aun cuando no compareciere el demandado. Si fuera el actor quien no compareciera a la primera audiencia, se darán por concluidos los procedimientos, sin que sea posible la renovación de los mismos, salvo motivo justificado, a juicio del Jurado.

Art. 46. Los Jurados dictarán resolución tanto en primera como en segunda instancia, dentro de los treinta días siguientes a la conclusión de la audiencia a que se refieren los artículos 43 y 44. Si creyeran del caso proceder a alguna inspección ocular u otra diligencia para mejor proveer, podrán decretarla, pero su diligenciamiento no interrumpirá dicho término.

Art. 47. Vencido el término para fallar fijado al Jurado Departamental sin que éste se haya expedido, el Presidente del Jurado elevará el expediente de inmediato y bajo su responsabilidad al Jurado Nacional, quien deberá resolver dentro del mismo término.

Si se tratare del Jurado Nacional, su Presidente bajo su responsabilidad, deberá elevar el expediente a la resolución inapelable del Tribunal de Apelaciones de Turno, el que deberá tomar resolución dentro de sesenta días.

Art. 48. Las apelaciones ante la Justicia Ordinaria, en los casos que correspondan tendrán efecto suspensivo y serán sólo en relación.

Art. 49. En la sustanciación de los procedimientos a que se refieren los artículos anteriores, los Jurados deberán repeler de plano cualquier petición de las partes, que a su juicio, tienda a entorpecer o dilatar el trámite sumario, y de sus resoluciones no habrá recurso alguno.

Art. 50. En caso de impedimento, recusación o excusación de los titulares del Jurado, se integrará el mismo con el respectivo suplente. Las excusaciones y recusaciones serán resueltas por el propio Jurado en que se planteen, in-

tegrándose éste a esos efectos, con el suplente que corresponda.

Art. 51. Las partes pueden de común acuerdo prescindir del recurso a los Jurados y acudir a la Justicia ordinaria o al juicio arbitral, previsto por el Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, con acuerdo de las partes, podrá procederse a la prórroga de competencia, siempre que se trate de departamentos colindantes.

Art. 52. Los procedimientos a que de lugar la acusación de los Jurados estarán exonerados del impuesto de papel sellado, timbres y tributos judiciales.

CAPITULO VII

Del derecho preferencial

Artículo 53. Todo predio, no mayor de 1.000 hectáreas que estuviese ocupado por uno o más arrendatarios y/o aparceros desde un plazo no menor de siete años, en caso de ser puesto en venta, debe ser ofrecido en primer término al Instituto Nacional de Colonización de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley N.º 11.029 de 12 de enero de 1948, y a los efectos previstos en los artículos 54 y 56 de esta ley.

Si el tiempo de ocupación fuese menor, pero los ascendientes del ocupante hubiesen trabajado con anterioridad inmediata al mismo predio, se tendrán en cuenta esos años de trabajo a los efectos de este artículo.

Art. 54. Si el ocupante reúne los requisitos indispensables para ser colono y siempre que la explotación de ese predio fuera su principal medio de vida, el Instituto Nacional de Colonización intervendrá como intermediario en la gestión de compra del inmueble por el ocupante, dentro de las condiciones dispuestas en el artículo 35 de la Ley N.º 11.029.

El Instituto Nacional de Colonización podrá acordar, al ocupante, los créditos previstos, según los casos, en el artículo 23 y Capítulo XIV y XVII de la referida ley, aún cuando el valor venal del predio ascienda a \$ 100.000.00.

Art. 55. Recibido el ofrecimiento del predio en venta, el Instituto Nacional de Colonización dispondrá de veinte días para dar noticia del mismo al interesado y de veinte días más para concertar la operación.

Art. 56. El propietario que vendiera su propiedad con infracción de la disposición del artículo 53, a denuncia de parte interesada, incurrirá en multa equivalente a dos años de arrendamiento o aparcería, que beneficiará al ocupante perjudicado.

Esta multa será impuesta por el procedimiento de los juicios ordinarios de menor cuantía ante el Juez competente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de 16 de diciembre de 1927, con apelación ante el superior que corresponda.

Art. 57. Queda prohibido el remate de arrendamientos así como cualquier procedimiento que signifique la puja pública de presuntos arrendatarios.

La infracción de este precepto será sancionada con multa de \$ 1.000.00 a \$ 3.000.00, de la que responderán, solidariamente, el propietario y el rematador.

El procedimiento para su aplicación, será el establecido en el inciso 2.º del artículo anterior.

CAPITULO VIII

De la limitación de los arrendamientos

Artículo 58. A partir de la promulgación de la presente ley, ninguna persona física o jurídica, podrá tomar en arrendamiento sin autorización del Jurado Nacional, tierras en extensión mayor de 5.000 hectáreas o de aforo mayor de \$ 300.000.00, en forma única o fraccionada. Los propietarios de más de 10.000 hectáreas no podrán arrendar ni aún dentro de los límites establecidos, salvo expresa autorización del Jurado.

El Jurado, según los casos, podrá autorizar límites mayores, que sin embargo no excederán de 10.000 hectáreas, teniendo en cuenta las circunstancias de lugar y tiempo, grado de disponibilidad de tierras, concepto de unidad económica para el interés de arrendatario y arrendador, extensión de tierras explotadas en propiedad por el arrendatario, destino del arrendamiento, carácter de cooperativa de producción del arrendatario, o toda otra consideración de interés general que fundamente la resolución.

Art. 59. El arrendatario que infrigiese la prescripción del artículo anterior, se hará pasible de las siguientes sanciones:

- A) La pérdida de su derecho a los plazos legales y de su recurso a los Jurados mientras esté en infracción; y
- B) Una multa equivalente a la anualidad correspondien-

te al área arrendada en exceso, y por el tiempo que dure su arrendamiento. Si el exceso correspondiese a arrendamientos de precios diferentes, la multa se aplicará sobre aquél de mayor precio. Esta multa así como la establecida en el artículo 57, beneficiará por mitades al denunciante y al Instituto Nacional de Colonización, y se impondrá por los procedimientos previstos por el artículo 56.

La multa se triplicará cuando se compruebe la simulación de arrendamiento por interpósita persona, a los fines de eludir la prescripción establecida por el artículo 58.

Art. 60. Las disposiciones de esta ley son de orden público.

Art. 61. Deróganse respecto del régimen contractual de arrendamientos y aparcerías rurales estructurado por esta ley, los artículos 5.º, 6.º y 7.º de la Ley N.º 8.153, de 16 de diciembre de 1927.

Art. 62. El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los seis meses de su promulgación.

Art. 63. Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de diciembre de 1952.

JOSE G. LISSIDINI, Presidente. — Mario Dufort y Alvarez, Secretario.

Cámara de Senadores.

Comisión de Fomento.

INFORME

Al Senado:

I) Principios básicos del proyecto

Después del ya demasiado prolongado período de las leyes de emergencia y prórrogas consiguientes, en la materia de arrendamientos rurales, la Comisión de Fomento de la Producción de la Cámara de Representantes y luego el Cuerpo en pleno, se han abocado, durante un largo período de tiempo a la ardua labor de elaborar un proyecto de ley que pudiera dar una solución adecuada a los difíciles problemas que suscita la misma.

El proyecto sancionado por la Cámara de Representantes ha sido recibido con general beneplácito por los distintos sectores de opinión, especialmente por aquéllos a quienes el tema afecta más directamente, con algunas salvedades que vuestra Comisión ha tratado de subsanar.

Esto indica, que las enmiendas que se introducen a dicho proyecto no son sustanciales, habiendo sido el propósito constante de vuestra Comisión mantener las directivas generales que animan el proyecto, respetando lo más posible su estructura, sus definiciones y conceptos, introduciendo tan sólo algunos ajustes que ha considerado indispensables para dotarlo de una técnica más precisa y de una mayor unidad.

Cabe en consecuencia, hacer algunas consideraciones sobre los principios básicos que sustenta, para luego ir a la explicación de las modificaciones que se ha considerado útil introducir.

El proyecto aprobado por la Cámara de Representantes está caratulado como proyecto de ley de arrendamientos rurales, y lo es indudablemente, pero la denominación es si se quiere incompleta pues no expresa el verdadero alcance o sentido del mismo. Por eso vuestra Comisión lo denomina de "arrendamientos rurales o de estabilización agraria mínima". En efecto, cada día se considera más inadecuado el régimen de arrendamientos para la explotación de la tierra. El arrendamiento a corto o largo plazo significa transitoriedad, y el trabajo de la tierra requiere cierta permanencia o estabilización. La tierra requiere cuidados y procesos que no se pueden efectuar por quien sabe, que su permanencia en la misma es limitada y entonces, como es lógico suponerlo, en un afán de lucro, se trata de extraer de la misma el mayor rendimiento posible en el menor espacio de tiempo, sin preocuparse por su cansancio y por su fertilidad futura. Lo ideal para muchos sería que el que trabaje la tierra sea propietario de la misma, para que esa incertidumbre o inquietud no lo desinterese de su cuidado. La solución también podría ser la de un régimen, que sin llegar a constituir el clásico derecho del propietario, significara su permanencia durante toda su vida de trabajo y aún la de sus hijos, algo así como el antiguo instituto de la enfiteusis. De cualquier manera, — no hay duda que si es el propietario el que explota la tierra no debe seguir teniendo el "jus abutendi" del derecho

romano, sino que debe estar fundamentalmente limitado por el interés social del cuidado y conservación de la tierra. Tampoco hay duda que cuando la tierra se da en arrendamiento, no pueden seguir rigiendo en su totalidad los tradicionales preceptos de ese contrato.

La realidad que hoy tiene que afrontar el legislador es la de que no siendo posible adjudicar tierras en cantidad suficiente para que la trabajen quienes no han podido hacerse propietarios, es ineludible mantener el régimen de los arrendamientos, pero, no se puede permitir que el tiempo de permanencia sea demasiado reducido; que el precio que se pague no sea equitativo; que el que ocupe la tierra no cuide su fertilidad, etc. En otros términos, que no sólo deben estar en juego los intereses de las partes sino también, y muy fundamentalmente, los intereses sociales y económicos de la Nación.

El alcance de este nuevo régimen legal está establecido con toda precisión en el artículo 1.º del proyecto, cuya redacción, en un primer momento parece impropia por su falta de concreción preceptiva, pero que luego, se reconoce como útil porque da el criterio básico para la total interpretación de la ley.

"Todo productor rural tiene derecho a una radicación mínima en la tierra que ocupe" es la primera premisa de la disposición que justifica los plazos que se estatuyen más adelante.

Enseguida se agrega: "... y a condiciones de trabajo que le permitan desarrollar económicamente la explotación agraria que realiza", las que surgirán de las distintas exigencias o limitaciones de esta ley, o de las que se dicten en el futuro. Termina el primer inciso: "obteniendo una razonable utilidad que sirva de estímulo a su actividad creadora". Este aspecto ya había sido considerado por leyes y disposiciones anteriores, especialmente en lo que se refiere a los subsidios o precios mínimos.

El apartado final del artículo 1.º ya entra al problema de que el uso o goce de la tierra se produzca por medio del contrato de arrendamiento, y se señala que los "plazos de permanencia", deben regularse de acuerdo con "la finalidad de protección al trabajo rural" pero sin desmedro del principio general de que la explotación de la tierra está subordinada al interés nacional de su conservación con fertilidad" y por último establece medidas "tendientes a asegurar que los precios del arrendamiento y los porcentajes de la aparcería mantengan equitativa relación para ambas partes contratantes en función de la rentabilidad normal del predio".

II—NORMAS PRINCIPALES DEL NUEVO DERECHO

Iremos analizando, también en líneas muy generales las principales innovaciones que se introducen en el proyecto de la Cámara de Representantes que han sido aceptadas por vuestra Comisión.

A — Arrendamiento y aparcería.

Por los artículos 21 y 24 se trata de resolver el problema de los medianeros o aparceros que tantos conflictos ha traído aparejado en la interpretación de los contratos.

Se asimila totalmente la situación del arrendatario a la del medianero o aparcerero, al determinarse que la obligación principal en el contrato es la de pagar por el uso o goce del predio rural "un precio en dinero o en frutos naturales o productos de la cosa". Además cuando el dador del inmueble, en una aparcería contribuye tan sólo al capital de explotación y a los gastos de administración con un monto inferior al 40 o/o excluyendo el valor de la tierra, el contrato se considera arrendamiento a los efectos de los plazos y prórrogas (art. 24.).

B) — Contrato escrito e inscripción.

Se considera como innovación de gran importancia la obligatoriedad del contrato escrito y su inscripción en el registro para todos los que se celebren después de la promulgación de la ley (art. 4).

Se entiende que es la única forma eficaz de asegurar el cumplimiento del contrato en las condiciones que preceptúa el proyecto.

Como sanción por el incumplimiento de esta exigencia legal se establece una multa equivalente al 10 o/o de la renta anual por cada mes o fracción de mes que permanezca incumplida la obligación (art. 7.º).

C) — Plazos y opción de prórroga.

El proyecto sancionado por la Cámara de Representantes como lo señalaremos más adelante no se especificaba con suficiente claridad, si el régimen de plazos que establecía, regía tan sólo en los contratos que se celebraran con posterioridad a la promulgación de la ley o si también regía para los anteriores.

El régimen que estatuye ha sido aceptado como loable y moderado para estatuir una radicación mínima tal como se persigue en el propósito esencial del proyecto.

Se entiende que en todo contrato de arrendamiento de bienes raíces para explotación agraria el arrendatario buen cumplidor de sus obligaciones, tiene derecho a un término mínimo de cinco años, aún cuando se hubiera establecido un plazo menor (artículo 11). En este caso, deberá seis meses antes del vencimiento del contrato, hacer conocer su renuncia al uso del derecho de permanencia legal, entendiéndose en caso contrario que el arriendo continúa por un año más y así sucesivamente hasta completar el plazo legal de los cinco años.

Además del plazo legal mínimo de los cinco años o del contractual en el caso de que fuere mayor, se instituye un derecho de opción a prórroga para completar la radicación mínima hasta ocho años (artículo 12); también en este caso debe hacerse conocer por el arrendatario su opción a ese derecho con anticipación de seis meses.

D) — Precios.

El régimen de radicación mínima para el arrendatario trabajador de la tierra, sobre la base de los plazos y opción de prórroga, sería una solución injusta sino estuviera completado por un sistema de revisión de los precios, como lo establece el artículo 19, cuando han transcurrido dos o más años de vigencia contractual o legal del arrendamiento.

E) — Mejoras.

En este aspecto se persigue la finalidad de dotar al trabajador de la tierra de elementos necesarios requeridos para la explotación del predio. Se considera el aspecto humano de la vivienda y luego los elementos propios de la explotación.

En este capítulo, vuestra Comisión ha efectuado algunos ajustes al proyecto venido con sanción de la Cámara de Representantes.

F) — Derecho preferencial.

Estableciendo una lógica conexión con la ley orgánica del Instituto Nacional de Colonización se instituye el derecho preferencial para que dicho Ente pueda adquirir todo predio no mayor de 1.000 hectáreas que estuviere ocupado por uno o más arrendatarios desde un plazo no menor de siete años, y que su propietario estuviere dispuesto a enajenar (artículo 45).

G) Limitación de los arrendamientos.

El proyecto estima inconveniente en el futuro, que una persona física o jurídica pueda tomar en arriendo, sin autorización del Instituto Nacional de Colonización, "tierras en extensión de 5.000 hectáreas o de aforo mayor de pesos 400.000.00 en forma única o fraccionada".

III LAS ENMIENDAS INTRODUCIDAS AL PROYECTO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

Como ya lo señalamos al principio de este informe vuestra Comisión se ha limitado a introducir las modificaciones que estimó indispensables tratando de respetar la estructura del proyecto remitido por la otra rama del P. Legislativo.

Pueden resumirse en dos las modificaciones más importantes; las que se refieren a la clasificación de las distintas situaciones de los arrendatarios, y las que afectan a la jurisdicción que debe regir los conflictos que se puedan promover por aplicación o interpretación de la ley.

A) Clasificación de las distintas situaciones.

Se debe considerar la situación de tres grupos de productores agrarios, a los fines de la estandarización mínima que persigue la ley.

1º El primero estaría constituido por los que celebren contratos de arrendamiento posteriores a la promulgación de la ley. Se eliminan las dudas que suscitaba el texto sancionado por la C. de Representantes. Es para este grupo que rige totalmente el sistema instituido por el nuevo derecho y que ya analizamos: plazos mínimos de cinco años y opción a prórroga por tres años más.

Está demás recordar, que para que el arrendador pueda ser acreedor de los beneficios de la ley debe ser buen cumplidor de sus obligaciones contractuales y desde luego aún en curso de cualquiera de esos beneficios, podría ser objeto de una demanda por rescisión de contrato.

Por otra parte, el proyecto ratifica en materia de excepciones, el régimen de las leyes vigentes de emergencia que decretaban la suspensión de la sentencia de desalojo.

2º El segundo grupo está constituido por los arrendatarios con contratos otorgados con anterioridad a la promulgación de la ley y que a la fecha de la misma no hubieran sido demandados por desalojo. Para estos productores se estatuye el mismo beneficio del art. 11, plazo mínimo de cinco años, que se contará de la fecha de promulgación de la ley (art. 18). No obstante, para estos casos se declara que estos beneficiarios no tendrán derecho a optar por la prórroga de tres años más.

3.º Por último, el tercer grupo está integrado por los arrendatarios que tengan también contratos otorgados con anterioridad a la promulgación de la ley, pero que se encuentren demandados por desalojo, aún cuando la efectividad del mismo haya sido mantenida en suspenso, de conformidad con las leyes vigentes.

En el artículo 57 se contempla la situación de estos arrendatarios considerados en dos posibilidades: A) cuando hubieren ocupado el bien objeto del arrendamiento por un plazo mayor de cinco años, tendrán derecho a un plazo de estabilización de tres años que se contarán a partir del 30 de abril próximo y B) cuando hubieren ocupado el predio con una anterioridad menor de cinco años, tendrán derecho a un plazo de cuatro años.

Para gozar de estos beneficios deberá tratarse también de arrendatario "buen cumplidor de sus obligaciones como tal".

Para hacer uso de la estabilización instituida deberán los beneficiarios dentro de los treinta días de la vigencia de la ley formular en el expediente de desalojo la manifestación de su propósito afirmativo, porque si no lo hiciera se entenderá renuncia del beneficio, procediendo, en consecuencia, la efectividad del desalojo.

Tampoco este grupo de arrendatarios tendrá derecho a la opción de prórroga de los tres años.

Se determina además para estos dos últimos grupos de arrendatarios la aplicación de las normas de inscripción de los contratos, de la revisión de los precios convenidos o establecidos, las de asimilación de la aparcería al arrendamiento, de la jurisdicción, del derecho preferencial y las del Capítulo IX de disposiciones generales.

Vuestra Comisión entiende que la inclusión en el régimen del proyecto de los desalojos, es una solución feliz que dará indudable prestigio a la ley. Mientras el Instituto Nacional de Colonización no disponga de tierras y recursos suficientes, el problema de los desalojos tendría que haberse seguido paliando con nuevas leyes de prórroga, de las que todos tienen conciencia que constituyan un mal necesario.

Con la solución instituida en el proyecto, los desalojados entran en el régimen de estabilización mínima dando un discreto campo de espera para que el órgano oficial pueda ir satisfaciendo en forma paulatina las distintas situaciones de productores desalojados.

B) La jurisdicción

Desde un primer momento hubo, en el seno de vuestra Comisión, opinión unánime para sustituir el sistema de los jurados por la jurisdicción común. Las distintas opiniones y requerimientos de institutos y personas, que llegaron a la Comisión, coincidieron también con ese punto de vista.

Aparte del argumento insinuado en diversas oportunidades con respecto a la posible inconstitucionalidad del sistema, —tuvo especial influencia en el ánimo de los integrantes de la Comisión, la consideración, de que en el proyecto de ley, que nos ocupa, el Instituto del Jurado—, contrariamente a lo ocurrido en la legislación anterior, tendría un carácter permanente, porque en efecto, la ley ya no sería una ley de emergencia y en esas condiciones no sería acertado su establecimiento.

Además, el cúmulo de tareas que el proyecto ponía a cargo del Jurado, iba a determinar la necesidad de dotarlo de una organización burocrática de cierta entidad, —que no resultaba recomendable, amén del impedimento constitucional de poder crear cargos o partidas para sueldos fuera de la ley de presupuesto general.

Por otra parte, el proyecto instituye un régimen de limitación de derechos que evidentemente parecería ser materia reservada preceptivamente por la Constitución para el Poder Judicial.

Pero, en el afán de respetar lo que la otra rama del Poder Legislativo pudo haber considerado como esencial al nuevo régimen, vuestra Comisión ha advertido que el Jurado no fue considerado como algo tan esencial por cuanto en el mismo texto sancionado, las partes de común acuerdo, podían abandonar el juicio del Jurado y dirigirse a la Justicia Ordinaria.

Todas las enmiendas introducidas con motivo de la jurisdicción han sido las indispensables para ajustar el proyecto al sistema sustitutivo, siendo especial preocupación, la de innovar lo menos posible en el derecho vigente.

En esta forma, se le da jurisdicción a los Jueces de Paz en los desalojos respetando el criterio de la Ley N.º 8.153,

del 16 de diciembre de 1927, es decir, en función de la importancia de la renta. Las jurisdicciones son departamentales, en función del lugar de ubicación del inmueble, y como la ley es de orden público no hay prórroga de competencias. Para la revisión de los precios, conocerán los jueces, teniendo presente que la competencia la determina el precio del arrendamiento en vigor.

El procedimiento es el mismo establecido por el proyecto de la Cámara de Representantes, sólo se amplía el plazo que tienen los jueces para dictar sentencia, cuando han decretado diligencias para mejor proveer.

En lo que respecta a la competencia y los procedimientos en materia de aplicación de multas vuestra Comisión entiende que no hay razones que puedan justificar limitaciones en los recursos y garantías para la defensa, sobre todo si se tiene en cuenta que las sanciones son en general de verdadera entidad, justificada, para no hacer ilusorios los preceptos de la ley.

En cuanto a las demás disposiciones y detalles, vuestra Comisión está dispuesta a realizar todas las demás aclaraciones pertinentes durante el debate a desarrollarse en Sala.

Antes de terminar este informe, vuestra Comisión considera de su deber destacar las importantes colaboraciones que ha recibido para realizar su labor. En primer término, cabe destacar la diligente presencia de los señores Directores del Instituto Nacional de Colonización que expusieron sus puntos de vista en general coincidentes con los de la Comisión y formularon sugerencias que fueron especialmente tenidas en cuenta en el ajuste del articulado del proyecto sustitutivo que se somete a consideración del Senado.

También cabe señalar el importante trabajo del Centro de Estudios de Derecho Rural y de la Asociación Rural completado con la exposición del miembro de las mismas, Dr. Adolfo Gelsi Bidart.

Pero tiene especialísima significación la desinteresada colaboración prestada por el distinguido ex-Senador, actualmente Presidente de la Caja Rural, Dr. Ramón F. Bado, que le fuera solicitada en base a su notoria versación en la materia.

Puede decirse que se le deben las directrices fundamentales de las enmiendas introducidas, en todas las felices soluciones que ellas encierran.

Sala de la Comisión, a 31 de marzo de 1954.

Juan Vicente Chiarino, Miembro Informante. —
Emilio O. Bonino, Miembro Informante. —
José Bove Arteaga, Miembro Informante. —
Javier Barrios Amorín. — Juan F. Guichón. —
Aguilón Espalter. — Juan C. Raffo Fravega. —
Lorenzo Batlle Pacheco. — A. Carlos Cutinella.

PROYECTO SUSTITUTIVO

Artículo 1.º Todo productor rural tiene derecho a una radicación mínima en la tierra que ocupe y a condiciones de trabajo que le permitan desenvolver económicamente la explotación agraria que realiza, obteniendo una razonable utilidad que sirva de estímulo a su actividad creadora.

En caso de que el propietario ceda el uso o el goce de un predio rural, por plazos de permanencia de los productores en la tierra deben regularse de acuerdo con esa finalidad de protección al trabajo rural, sin desmedro del principio general de que la explotación de la tierra está subordinada al interés nacional de su conservación con fertilidad, y sin perjuicio —asimismo— de las medidas previstas por esta ley, tendientes a asegurar que los precios del arrendamiento y los porcentajes de la aparcería mantengan equitativa relación para ambas partes contratantes en función de la rentabilidad normal del predio.

Art. 2.º Todo contrato por el que una de las partes se obliga a conceder a otra el uso y goce de un predio rural con destino a cualquier explotación agraria, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio en dinero o en frutos naturales productos de la cosa, queda sujeto a las disposiciones de la presente ley.

Los derechos y obligaciones conferidos por esta ley al arrendatario, se extienden al sub-arrendatario y/o aparcerero.

Serán nulos los contratos de sub-arrendamiento o sub-aparcería cuando el precio pactado sea superior al que debe pagar el arrendatario o aparcerero. No obstante, tales contratos podrán celebrarse válidamente con un aumento de hasta el 10% del precio del arriendo o aparcería, previa autorización que por razones fundadas podrá acordar el Juez competente.

Art. 3.º No se consideran comprendidos en esta ley los convenios sobre pastoreo de hasta un año de plazo, pero si aquéllos que se renueven o se prorrogan por plazos que total excedan aquel límite, o cuando —previa notificación al propietario y sin oposición documentada por su parte ar-

te el Juez de Paz del domicilio del mismo— el tenedor del predio lo retenga por un plazo mayor de un año.

Sin la constancia de estos consentimientos del propietario producido el vencimiento del contrato el ocupante podrá ser desalojado como teniendo el inmueble a título precario (Art. 17, Ley N.º 8.153, de diciembre 16 de 1927.)

CAPITULO I.

De la inscripción de los contratos.

Artículo 4.º Todo contrato de arrendamiento, aparcería, sub-arrendamiento y sub-aparcería que se otorgue después de la promulgación de la presente ley, deberá ser extendido por escrito y debidamente inscripto.

Los que tengan por objeto inmuebles radicados en el Departamento de la Capital se inscribirán en el Registro General de Arrendamientos y Anticresis.

Los que se otorguen sobre inmuebles radicados en los Departamentos del Litoral e Interior se inscribirán en un registro especial que llevarán las oficinas de Catastro de cada uno de ellos, las cuales se considerarán en esta materia secciones del Registro General de Arrendamientos. Dichas Oficinas, dentro de los 20 días de la inscripción de los contratos, deberán remitir al Registro General un duplicado del texto de la inscripción a los fines de su incorporación a libros separados por Departamento.

La inscripción en las oficinas de Catastro departamentales valdrá inscripción en el Registro General, con los efectos establecidos por la Ley N.º 10.793 de setiembre 25 de 1946.

Art. 5.º Los contratos de sub-arrendamientos y de sub-aparcería no podrán ser inscriptos:

- A) Si en el contrato del que deriva su decreto el arrendatario o aparcerero no existe constancia expresa de la autorización para el sub-arrendamiento o sub-aparcería, y
- B) Cuando el precio en dinero o el porcentaje convenido en los frutos de la cosa sean superiores a lo que según el contrato originario deba pagar el arrendatario o aparcerero al arrendador, con excepción de la situación prevista en el artículo 2.º, parte final.

Art. 6.º La presentación del contrato inscripto o, en su defecto, del certificado de inscripción, es requisito indispensable para las partes contratantes en toda gestión ante órganos públicos relacionados con su condición de tales.

Art. 7.º La inscripción estará a cargo del arrendador, sub-arrendador o aparcerero, y deberá efectuarse dentro de los 45 días de celebrado el contrato, incurriendo aquél —en caso de omisión— en una multa equivalente al 10 o/o de la renta anual por cada mes o fracción de mes que permanezca incumplida la obligación.

Sin perjuicio de lo expresado, el arrendatario o aparcerero tendrá derecho a obtener por su parte dicha inscripción, con facultad de repetir contra el arrendador o aparcerero dador por los gastos, derechos de inscripción y multas.

Las multas serán pagadas, juntamente con los derechos de inscripción tardía, en las oficinas del Registro, el cual verterá trimestralmente su producido al Instituto Nacional de Colonización que será el beneficiario de las mismas y titular de la pertinente acción.

Art. 8.º Si el propietario de un predio arrendado lo enajenara sin antes haber inscripto el contrato de arrendamiento, el arrendatario que resultase perjudicado como consecuencia de lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nº 10.793, podrá reclamar del vendedor la indemnización de los daños y perjuicios que se justifiquen, y —además— aún en ausencia de tales daños y perjuicios, el importe equivalente a dos anualidades del precio del arrendamiento vigente en la fecha de la enajenación, en calidad de multa.

Art. 9.º Todo contrato de arrendamiento, aparcería, sub-arrendamiento y subaparcería otorgado con anterioridad a la promulgación de la presente ley, también deberá ser inscripto en el Registro. (Art. 49).

La correspondiente obligación se establece igualmente de cargo de los arrendadores, los que dispondrán de un plazo de 90 días a partir de la fecha de dicha promulgación para proceder a la inscripción de los contratos que constaren por escrito.

Si el contrato no fuera escrito, dentro del mismo plazo señalado antes, comunicarán por escrito al Registro todas las circunstancias relativas al convenio que hubieren otorgado y que lo individualicen suficientemente. El instrumento por el que se haga esa comunicación, también será registrado.

El incumplimiento por el arrendador de lo preceptuado en el presente artículo, lo hará pasible de la misma multa prescripta en el Art. 7.º, la que tendrá igual destino y régimen que los allí establecidos.

Dicha multa se instituye en beneficio del arrendatario.

Art. 10. Todo arrendador o aparcerero comprendido en el Art. 4.º que consintiese alguno de los contratos allí referidos sin el requisito de la escritura, incurrirá en una multa equivalente a una anualidad del precio del arrendamiento, la que pertenecerá al arrendatario, subarrendatario o subaparcerero, titular de la acción.

CAPITULO II

De los plazos

Artículo 11. En todo contrato de arrendamiento de bienes raíces para explotación agraria que se otorgue a partir de la promulgación de esta ley que no estipule plazo de vigencia o que estipule uno menor de 5 años, el arrendatario —buen cumplidor de sus obligaciones como tal— tendrá derecho a que el arrendamiento se considere realizado por el término mínimo de 5 años a contar desde la fecha del contrato, sin perjuicio de su derecho de opción a la prórroga del arrendamiento de acuerdo con el régimen previsto por los artículos siguientes. Se entiende que el arrendatario es "buen cumplidor de sus obligaciones como tal" cuando es buen pagador y ha cuidado como "buen padre de familia" las mejoras y el predio, preservándolo de los daños que están a su alcance evitar, como ser la invasión de malezas y la producción de erosiones o cualquier otro elemento de degradación por uso inadecuado de la tierra.

El arrendatario de contrato con plazo estipulado, que resuelva no hacer uso del derecho de permanencia legal que exceda del término de aquel plazo, deberá —seis meses antes del vencimiento del contrato— practicar la diligencia de renuncia en acta que labrará el Juez de Paz del domicilio del arrendador, o por declaración ante escribano público, las que se notificarán al arrendador o a su representante legal. Si no lo hiciera el contrato subsistirá durante el año siguiente a aquel vencimiento, y del mismo modo, y por años sucesivos, hasta completar los cinco años.

En los casos de arrendatarios con contratos sin estipulación de plazo, la formulación de la renuncia se hará por igual procedimiento que el señalado precedentemente, y deberá producirse dentro del primer año de la fecha del contrato. Si no lo hiciera, igualmente se entenderá que el contrato le obliga por otro año más, y del mismo modo, y por años sucesivos, hasta completar los cinco años.

Art. 12. El arrendatario tendrá derecho a optar por la prórroga del contrato a partir del plazo legal de cinco años o del contractual en caso de que éste fuera mayor, hasta completar ocho años de permanencia en el predio.

Para tener derecho a la prórroga se requiere:

- A) Ser buen cumplidor de sus obligaciones contractuales (artículo 11; inciso 1º, parte final), y
- B) Haber denunciado al arrendador, por acta del Juez de Paz del domicilio de aquél o por declaración ante escribano público, su voluntad de acogerse a la prórroga, con seis meses de anticipación al vencimiento del plazo legal de cinco años o del contractual si fuera mayor.

Art. 13. El arrendatario no tendrá derecho a la prórroga en los siguientes casos:

- A) Cuando el inmueble objeto del contrato fuera entregado en administración por el propietario al Instituto Nacional de Colonización a efecto de que éste determine las nuevas condiciones del contrato que deba estipularse entre el propietario y los colonos;
- B) Cuando se trate de inmuebles cuyos propietarios no exploten otro bien rural y la reclamen para explotarlos directamente por un plazo no menor de tres años por sí o por sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Se entenderá que se trata de un solo bien rural siempre que los predios constituyan una unidad física aunque comprendan varios padrones.

Asimismo, no corresponderá el beneficio en los casos de predios cuyos propietarios exploten a cualquier título uno o más bienes rurales cuyo valor de aforo para la Contribución Inmobiliaria no exceda, en conjunto, de \$ 30.000. El propietario de varios predios que no constituyen una unidad física sólo podrá utilizar esta excepción respecto de uno de ellos.

Se procederá del mismo modo cuando el arrendador sea una persona jurídica;

- C) Cuando previa aceptación por el Instituto Nacional

de Colonización del plan de colonización programado por el propietario, y dentro de las condiciones establecidas en el artículo 122 de la Ley Nº 11.029, el arrendador propietario reclame la tierra para subdividirla y colonizarla; y

- D) Cuando el arrendatario explotare directamente, por sí o por otros, otro u otros predios con un valor de por lo menos \$ 20.000 siendo propietario, o con un valor de aforo conjunto superior a \$ 25.000 si realizase su explotación a cualquier otro título.

Art. 14. En los casos del apartado letra b) del artículo anterior toda alteración por el arrendador del destino alegado para reclamar la entrega del inmueble al vencimiento del plazo legal sin opción a prórroga, y siempre que no probare justa causa superviniente hará que se le tenga incurso en una multa equivalente a tres anualidades de renta como única compensación de la lesión del derecho del arrendatario si el pago fuese en dinero; y si fuese en especie, se calculará sobre la base del rendimiento promedio de los cinco años de plazo legal (o de los últimos cinco años del plazo contractual si fuere mayor) y del precio de los productos de la última zafra o cosecha. Esta multa beneficiará al arrendatario, que será el titular de la acción.

Art. 15. La enajenación del predio posterior al nacimiento del derecho a la prórroga, hará caducar dicho beneficio del arrendatario, si el adquirente se encuentra en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.

Igual caducidad se producirá, aún sin modificación en la persona titular de la propiedad del inmueble —no obstante encontrarse el arrendatario en el goce de la prórroga— cuando se justifique por el arrendador alguna de las causas previstas en el artículo 13 citado.

Art. 16. Vencido el plazo legal de cinco años o el contractual si fuera mayor, así como el de la prórroga si la hubiera, el arrendatario deberá hacer entrega inmediata del predio.

En los casos de caducidad de la prórroga previstos en el artículo anterior, el arrendatario dispondrá a ese efecto del plazo de un año.

Art. 17. Producida la extinción del derecho del arrendatario a la permanencia en el inmueble, a pedido de parte, el Juez competente decretará el correspondiente desalojo.

El plazo para el desalojo no podrá exceder en dichos casos de quince días.

En los casos que deba procederse al lanzamiento del ocupante, además de la causal de prórroga contemplada en el artículo 19 de la Ley N.º 8.153, de diciembre 16 de 1927, el Juzgado —en las circunstancias previstas por el artículo 141 del Código Rural— concederá al arrendatario el término estrictamente necesario para recoger el fruto de las sementeras que hubiesen sido sembradas antes de la extinción del plazo legal de cinco años, del contractual si fuere mayor, o del de prórroga si correspondiere. En este último caso, los gastos judiciales estarán a cargo de la parte obligada a conceder el plazo razonable para la conclusión de las tareas agrícolas, sin perjuicio de su derecho a reiterar la petición de lanzamiento si el arrendatario no desocupare oportunamente el predio.

Art. 18. Los arrendatarios con contrato otorgado con anterioridad a la promulgación de la presente ley —y que a la fecha de la misma no hayan sido demandados por desalojo— gozarán del mismo beneficio establecido en el artículo 11, de acuerdo a las situaciones que allí se consideraran, por el plazo de cinco años que se contará desde la fecha de dicha promulgación, y con igual régimen que el instituido en este Capítulo, en cuanto les fuere aplicable.

No obstante, no tendrán el derecho a optar por la prórroga del artículo 12 y demás que a ella se refieren.

CAPITULO III

De los precios

Artículo 19. Cualquiera de las partes interesadas en un contrato de arrendamiento, aparcería, sub-arrendamiento y sub-aparcería —otorgado antes o después de la promulgación de la presente ley— con dos años o más de vigencia contractual o legal, podrá solicitar ante el Juez competente la revisión de los precios convenidos o establecidos.

El Juzgado examinará los casos que se sometan a su resolución al efecto de fijar el precio del arriendo que corresponda a la rentabilidad económica normal del predio. Con tal objeto, estudiará las circunstancias de cada contrato, calidad de los campos, mejoras y tipo de explotación de cada inmueble, los valores de venta y de los arrendamientos de campos de la zona, el precio del arrendamiento del caso par, campos de la zona, el precio del arrendamiento del caso particular anterior al vigente y las causas que pudieran haber dado mérito a su modificación. Los precios fijados

por el Juez tendrán efecto retroactivo a la fecha de la demanda, y sólo podrán ser nuevamente revisados después de transcurridos dos años de la revisión anterior.

Art. 20. Para la determinación de la rentabilidad del predio, las producciones que reciban subsidio del Estado o tengan precios de estímulo al productor, sólo podrán ser consideradas por su valor económico normal con prescindencia del estímulo o del subsidio, o del margen de precio que los represente.

Se considerarán del mismo modo las producciones cuyo costo sea financiado en parte por el Estado o los Municipios con cargo a fondos públicos. Para el caso de tales producciones no se tomará en cuenta el margen que represente dicha contribución.

Art. 21. Las producciones no subsidiadas o que no tengan precios de estímulo pero cuyas cotizaciones hubieren sufrido variantes superiores al 25 o/o en los precios del último bienio anterior a la demanda, serán consideradas por su valor económico probable de comercialización en el país en la época de aquélla, sin que en ningún caso la producción de que se trata pueda ser llevada en cuenta por un valor superior al promedio de precios del dicho último bienio, menos un 20 o/o.

Si las variantes en los precios fueren inferiores al porcentaje referido, el Juez procede del mismo modo pero con el límite del correspondiente promedio puro, sin reducción alguna.

Art. 22. Cuando la sentencia aumentare el precio del arrendamiento en más de un 30 o/o, aún cuando no hubiese vencido el término del contrato, el arrendatario tendrá derecho a renunciar a los plazos en curso sin responsabilidad alguna para su parte.

Art. 23. La violación por el arrendador, comprobada ante Juez competente, del régimen y cantidad de precio fijado por la sentencia, será sancionada con una multa equivalente a una anualidad de dicho precio.

El producido de la multa beneficiará al arrendatario, titular de la acción.

CAPITULO IV

De la aparcería asimilable al arrendamiento

Art. 24. Los contratos de aparcería en los cuales el porcentaje con que el dador del inmueble contribuye al capital de explotación y a los gastos de administración no alcance al 40 o/o excluyendo el valor de la tierra, se consideran contratos de arrendamiento a los efectos de las disposiciones de esta ley sobre plazos y derechos de prórroga.

Quedan exceptuados de estas disposiciones los contratos accidentales por una sola cosecha, y los casos de cesión de tierras al productor para trabajos de mejoramiento de pasturas, siembra de tréboles, ray grass y otros cultivos similares mejoradores del suelo. No obstante, si se comprobare que no se cumple esta finalidad, o que se la invoca como medio de ceder el uso y el goce del predio con propósito de eludir los beneficios de estabilidad y demás que esta ley acuerda al productor, el dador o arrendador quedará sometido al imperio de sus disposiciones.

Art. 25. Al vencimiento del plazo legal, o del contractual si fuera mayor, o en su caso del de la prórroga, el aparcerero debe proceder a la entrega del predio sin derecho a más plazo complementario que el necesario para levantar el fruto de las sementeras.

Art. 26. Son aplicables a los contratos de aparcería a que se refiere el artículo 24., las disposiciones establecidas en el Capítulo III cuando en función de la rentabilidad de la tierra el porcentaje de los beneficios para cualquiera de las partes no guarde proporción razonable con el aporte que cada una de ellas hace a los fines de la explotación.

El Juez apreciará la equidad de la proporción entre aportes y beneficios, estimando el precio de los frutos en su equivalente en dinero.

CAPITULO V

De las mejoras

Artículo 27. El propietario de todo predio en arrendamiento o aparcería para agricultura, ganadería, lechería o granja, queda obligado a dotarlo de las siguientes mejoras comunes a toda explotación: alambrados divisorios, casa habitación, cocina y agua potable. La entidad e importancia de dichas mejoras deberá guardar razonable relación con el valor real del inmueble.

Del mismo modo —y de acuerdo a la extensión del predio— deberá dotarlo de dependencias para peones.

Art. 28. Son también de cargo del propietario las mejoras requeridas para la normal explotación del predio según su destino, como ser alambrados interiores, bretes, bañaderos, montes de abrigo, aguadas artificiales y toda adaptación del predio a los fines del contrato.

Art. 29. Dichas mejoras podrán realizarse por acuerdo de partes, durante la vigencia del contrato, en los términos que ellas libremente determinen. En caso de que el propietario hiciera por sí mismo dichas mejoras, dispondrá del crédito a que se refiere el Decreto Ley N.º 10.154, de mayo 13 de 1942.

Art. 30. Si el propietario no realizare por sí mismo dichas mejoras, el arrendatario cuyo contrato tenga aún dos años de vigencia por lo menos, podrá dirigirse a la Oficina de Agronomía Regional presentando un plan de mejoras cuyo monto no podrá exceder del 20 o/o del valor del predio para la Contribución Inmobiliaria. En ese porcentaje se considerarán incluidas, por su valor de estimación, las mejoras ya existentes.

Dicha Oficina notificará al arrendador el plan de mejoras referido, y si no mediare oposición de su parte dentro de los 30 días de la fecha de la notificación, se presumirá que lo conciente, quedando desde entonces autorizado el arrendatario para ejecutarlo por cuenta de aquél.

El Agrónomo Regional fiscalizará la realización de las obras.

Art. 31. En caso de desacuerdo sobre la utilidad de las mejoras notificadas, así como sobre el monto de la inversión, se recurrirá al juicio de árbitros. Para dictar el laudo éstos considerarán las mejoras existentes en el predio, el destino y condiciones de la explotación y la superficie de aquél.

Art. 32. Las mejoras ejecutadas por el arrendatario, de acuerdo al artículo 30., serán pagadas en dinero por el arrendador, por el valor que tengan en el momento de serle entregado el inmueble. En caso de discrepancia, dicho valor se determinará por juicio de árbitros.

Para el pago de esta indemnización, el propietario también podrá utilizar el régimen de crédito establecido en el Decreto Ley N.º 10.154, referido antes.

Art. 33. Para la ejecución de las mejoras (artículo 30) el arrendatario también podrá recurrir al régimen de crédito de dicho Decreto Ley N.º 10.154, sin facultad de afectar el predio con derechos reales.

No obstante, el propietario será garantía subsidiaria del crédito por el valor que tengan las mejoras en el momento de la entrega del inmueble, no teniendo frente al Banco, obligaciones mayores que las que por la presente ley asume frente al arrendatario por concepto de indemnización de mejoras según el artículo anterior; todo ello sin perjuicio de la acción que el Banco tendrá contra el arrendatario como acreedor simple por el monto del referido crédito.

Antes de la entrega del importe del préstamo el Banco notificará al propietario de la existencia del mismo, a los efectos de la obligación que se le crea por esta ley.

CAPÍTULO VI

De la jurisdicción y de los procedimientos

Artículo 34. En los juicios de desalojos que se promuevan en las situaciones previstas por la presente ley conocerá el Juez de Paz del lugar de la ubicación del inmueble arrendado, siempre que el precio del arrendamiento convenido o fijado por sentencia, no exceda de \$ 150.00 mensuales o su equivalente, y en todos los casos de ocupantes de inmuebles a título de pastoreo a que se refiere el artículo 3.º.

Si el precio del arrendamiento fuere mayor conocerá el Juez Letrado de Primera Instancia del Departamento correspondiente.

En tales casos el juicio se seguirá de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 y demás aplicables de la Ley N.º 8.153, de diciembre 16 de 1927.

Art. 35. Los mismos Jueces conocerán —según los casos— de los procesos que se promuevan para la revisión de los precios de los arrendamientos, debiéndose tener presente que la competencia la determina el precio del arrendamiento en vigor.

El procedimiento de estos juicios se seguirá de conformidad a lo prescripto por los artículos 36 a 42 siguientes.

Art. 36. La demanda deberá formularse por escrito, con exposición detallada de las razones en que se funde, y en la misma el actor deberá ofrecer con la precisión posible la totalidad de la prueba que se proponga producir.

Art. 37. Dentro de las cuarenta y ocho horas de recibido el petitorio, el Juez convocará a las partes a audiencia verbal con término de veinte días a fin de tentar la conciliación, y si ésta no se realizara, oír la contestación del demandado con advertencia de que en la misma audiencia o antes —si éste lo prefiriere— deberá ofrecer la información o prueba de su parte.

En esa oportunidad se diligenciará la prueba del actor (artículo anterior), y la que hubiera ofrecido o en ella ofreciere el demandado.

Con la citación del demandado se acompañará siempre copia del escrito del actor y de la documentación agregada.

El demandado tendrá la facultad de presentar por escrito su defensa y ofrecer prueba hasta la fecha señalada para la celebración de aquella audiencia.

Art. 38. Sólo en el caso de que en la referida audiencia —según estime el Juez— no hubiere sido posible el diligenciamiento de la prueba ofrecida, se señalará otra dentro de los diez días siguientes como máximo. La nueva audiencia no podrá en ningún caso ser prorrogada o suspendida, salvo acuerdo de las partes.

Art. 39. Las audiencias a que se refieren los dos artículos anteriores se realizarán aun cuando no compareciere el demandado. Si fuera el actor quien no compareciera a la primera audiencia, se darán por concluidos los procedimientos, sin que sea posible la renovación de los mismos hasta los dos años siguientes a la fecha de la demanda, salvo motivo justificado, a criterio del Juez.

Art. 40. Los Jueces dictarán sentencia definitiva dentro de los treinta días siguientes a la conclusión de la audiencia a que se refieren los artículos 37 y 38. Si creyeren del caso proceder a alguna inspección ocular u otra diligencia para mejor proveer, podrán decretarla, pero su diligenciamiento sólo interrumpirá el término por treinta días.

Art. 41. En la sustanciación de los procedimientos a que se refieren los artículos anteriores, los Jueces deberán repeler de plano cualquier petición de las partes que, a su juicio, tienda a entorpecer o dilatar el trámite sumario, y de sus resoluciones no habrá recurso alguno.

Art. 42. Contra la sentencia de primera instancia que se dicte de conformidad a lo dispuesto en el artículo 40, procederá el recurso de apelación para ante el Superior que corresponda, que se concederá sólo en relación.

Las sentencias de segunda instancia causarán ejecutoria. Lo dispuesto por este artículo se entenderá sin perjuicio del recurso de nulidad, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 670 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Art. 43. Lo dispuesto por los artículos 35 a 42 precedentes regirá para la autorización de subarrendamiento o subaparcería con precio más elevado que el del arrendamiento o aparcería a que se refiere el artículo 2.º.

Art. 44. Para conocer en primera instancia de los juicios que se promuevan por cobro de las multas y/o indemnizaciones establecidas por la presente ley, será competente el Juez de Paz o el Juez Letrado de Primera Instancia, con jurisdicción en el lugar de ubicación del inmueble al que se vincula la circunstancia que origina el crédito del actor; y la competencia será determinada de acuerdo a la importancia del asunto según las reglas generales de procedimiento.

El trámite para dichos juicios se ajustará al del ordinario que corresponda, con el régimen de recursos del derecho común.

CAPÍTULO VII

Del Derecho Preferencial

Artículo 45. Todo propietario antes de vender un predio no mayor de 1.000 hectáreas, que estuviese ocupado por uno o más arrendatarios y/o aparceros desde un plazo no menor de siete años, debe ofrecerlo en primer término al Instituto Nacional de Colonización en las condiciones establecidas en el artículo 35 de la Ley N.º 11.029 de 12 de enero de 1948.

Si el tiempo de ocupación fuese menor, pero los ascendientes del ocupante hubiesen trabajado con anterioridad inmediata el mismo predio, se tendrán en cuenta esos años de trabajos a los efectos de este artículo.

Art. 46. Elévese el límite del valor venal de las propiedades beneficiadas por los préstamos a que alude el artículo 23 de la referida ley, a la cantidad de \$ 70.000.00.

Art. 47. Recibido el ofrecimiento de la venta, el Instituto Nacional de Colonización dispondrá de veinte días para dar noticia del mismo a los ocupantes del predio, y de veinte días más para concertar la operación.

Art. 48. El propietario que vendiera su propiedad, con infracción de la disposición del artículo 45, incurrirá en multa equivalente a dos años de arrendamiento o aparcería que beneficiará al ocupante perjudicado, titular de la acción.

Art. 49. Queda prohibido el remate de arrendamientos, así como cualquier procedimiento que signifique la puja pública de presuntos arrendatarios.

La infracción de este precepto será sancionada con multa de \$ 2.000.00 a \$ 10.000.00 de la que responderán, solidariamente, el propietario y el rematador.

Dicha multa se establece en beneficio del Instituto Nacional de Colonización a quien pertenecerá la acción.

CAPITULO VIII

De la limitación de los arrendamientos

Artículo 50. A partir de la promulgación de la presente ley, ninguna persona física o jurídica podrá tomar en arrendamiento —sin autorización del Instituto Nacional de Colonización— tierras en extensión mayor de 5.000 hectáreas o de aforo mayor de \$ 400.000.00 en forma única o fraccionada. Aún dentro de tales límites, los propietarios de más de diez mil hectáreas no podrán tomar en arrendamiento inmuebles, sin la previa autorización del mismo Instituto.

Dicho Instituto, según los casos, podrá autorizar límites mayores, que sin embargo no excederán de diez mil hectáreas, teniendo en cuenta las circunstancias de lugar y tiempo, grado de disponibilidad de tierras, concepto de unidad económica para el interés de arrendatario y arrendador, extensión de tierras explotadas en propiedad por el arrendatario, destino del arrendamiento, carácter de cooperativa de producción del arrendatario y toda otra consideración de interés general.

En todo caso la correspondiente resolución del Instituto deberá ser fundada.

Los pedidos de autorización formulados según este artículo deberán ser resueltos y notificados dentro del plazo de treinta días de su presentación. La ausencia de resolución se considerará como autorización concedida.

Art. 51. El arrendatario que infrinja la prescripción del artículo anterior, se hará pasible de las siguientes sanciones:

- A) De la pérdida del derecho a los plazos legales y del de revisión del precio del arrendamiento mientras se mantenga en infracción; y
- B) De una multa equivalente a una anualidad del precio correspondiente al área arrendada en exceso y por cada año, o fracción de años, que dure el arrendamiento en infracción. Si el exceso correspondiese a arrendamientos de precios diferentes, la multa se aplicará sobre aquél de mayor precio. Esta multa beneficiará al Instituto Nacional de Colonización, titular de la sección.

La multa se triplicará cuando se compruebe la simulación de arrendamiento por interpósita persona, a los fines de eludir lo prescrito por el artículo anterior.

CAPITULO IX

Disposiciones Generales

Artículo 52. Las disposiciones de esta ley son de orden público.

Art. 53. Deróganse respecto del régimen de arrendamientos y aparcerías rurales estructurado por esta ley, los artículos 5.º, 6.º y 7.º de la Ley N.º 8.153, de 16 de diciembre de 1927.

Art. 54. No se consideran comprendidos en las disposiciones de la presente ley los casos de los contratos otorgados por el Instituto Nacional de Colonización como arrendador o subarrendador.

Art. 55. Las disposiciones de la presente ley no regirán en los casos de predios arrendados, cualquiera sea su extensión o área, que se encuentren aforados para el pago de la Contribución Inmobiliaria en más de mil quinientos pesos la hectárea.

Art. 56. El Registro General de Arrendamientos y Anticresis, con cargo al caudal que percibe en concepto de derechos, dispondrá y ejecutará de inmediato propaganda suficiente —por la prensa oral y escrita— a los fines de la eficaz difusión de las obligaciones y sanciones que se instituyen por el Capítulo I de la presente ley.

CAPITULO X

Disposiciones Transitorias

Artículo 57. Los arrendatarios por contrato otorgado con anterioridad a la promulgación de la presente ley, y que se encuentren demandados por desalojo, aun cuando la efectividad del mismo haya sido mantenida en suspenso, de conformidad con las leyes vigentes, estarán sometidos al siguiente régimen:

- A) Los que hubieren ocupado el bien objeto del arrendamiento por un plazo mayor de cinco años, con anterioridad a la fecha establecida al principio de este artículo, tendrán derecho a un plazo de estabilización de tres años, que se contará a partir del 30 de abril próximo;

- B) Aquellos que hubieren ocupado el predio con una anterioridad menor de cinco años a la misma fecha considerada antes, gozarán, al mismo título, de un plazo de cuatro años que se contará del mismo modo;
- C) Para gozar del beneficio, deberá tratarse de arrendatario "buen cumplidor de sus obligaciones como tal".
- D) El arrendatario que resuelva hacer uso de los plazos de estabilización instituidos por el presente artículo, deberá —dentro de los treinta días de la vigencia de esta ley— practicar en el correspondiente expediente de desalojo la manifestación de su propósito afirmativo. Si no lo hiciere se entenderá que renuncia al beneficio del nuevo plazo y le será aplicable lo dispuesto por el artículo 17;
- E) Se entiende que el arrendatario, en caso de manifestación afirmativa de usar el beneficio, puede optar por una o más de las anualidades comprendidas en los plazos de los apartados A) y B) precedentes;
- F) No tendrán el derecho a optar por la prórroga del artículo 12 y demás que a ella se refieren, y se encontrarán sometidos al mismo régimen instituido en el Capítulo II en cuanto les fuere aplicable. (Artículo 16 y 17).

Art. 58. En los casos de artículo anterior seguirá, igualmente, lo dispuesto por los Capítulos I, III, IV, VI, VII y IX de la presente ley en todo lo que sea aplicable.

Art. 59. Lo dispuesto por el artículo 57 no regirá para los arrendatarios que se encontraren en alguna de las situaciones previstas en los apartados letras A) a D) inclusive del artículo 13.

Art. 60. Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, a 21 de marzo de 1954.

Juan Vicente Chiarino, Miembro Informante. — Emilio O. Bouino, Miembro Informante. — José Bove Arteaga, Miembro Informante. — Juan F. Guichón. — Juan C. Raifo Frávega. — Javier Barrios Amorin. — Aquiles Espalter. — Lorenzo Batlle Pacheco. — A. Carlos Cutillella.

(Modificaciones introducidas por la Comisión en su sesión del 7 de abril).

CAPITULO I

De la inscripción de los contratos

Artículo 49. Todo contrato de arrendamiento, aparcería, subarrendamiento y subaparcería que se otorgue después de la promulgación de la presente ley, deberá ser extendido por escrito y debidamente inscripto.

Los que tengan por objeto inmuebles radicados en el Departamento de la Capital se inscribirán en la Dirección General de Catastro.

Los que se otorguen sobre inmuebles radicados en los Departamentos del Litoral e Interior se inscribirán en un registro especial que llevarán las Oficinas de Catastro de cada uno de ellos. Dichas Oficinas, dentro de los 20 días de la inscripción de los contratos, deberán remitir a la Dirección General un duplicado del texto de la inscripción a los fines de su incorporación a libros separados por Departamento.

La inscripción en la Dirección General o en las Oficinas de Catastro departamentales tendrá los efectos establecidos por la Ley Nº 10.793, de setiembre 25 de 1946.

Art. 99. Todo contrato de arrendamiento, aparcería, subarrendamiento y subaparcería otorgado con anterioridad a la promulgación de la presente ley, también deberá ser inscripto en el Registro. (Artículo 49).

La correspondiente obligación se establece igualmente de cargo de los arrendatarios, los que dispondrán de un plazo de 90 días a partir de la fecha de dicha promulgación para proceder a la inscripción de los contratos que constaren por escrito.

Si el contrato no fuera escrito dentro del mismo plazo señalado antes, comunicará por escrito al Registro todas las circunstancias relativas a la individuación del inmueble, precio de arrendamiento y demás del mismo. El instrumento por el que se haga esa comunicación, también será registrado.

El incumplimiento por el arrendatario de lo preceptuado en el presente artículo, lo hará pasible de la misma multa prescrita en el artículo 7º, y no tendrá igual destino y régimen que los allí establecidos.

Dicha multa se instituye en beneficio del arrendatario.

CAPITULO II

De los plazos

Artículo 11. En todo contrato de arrendamiento de bienes raíces para explotación agraria, que se otorgue a partir de la promulgación de esta ley, que no estipule plazo de vigencia o que estipule uno menor de 5 años, el arrendatario —buen cumplidor de sus obligaciones como tal— tendrá derecho a que el arrendamiento se considere realizado por el término mínimo de 5 años a contar desde la fecha del contrato, sin perjuicio de su derecho de opción a la prórroga del arrendamiento, de acuerdo con el régimen previsto por los artículos siguientes.

Se entiende que el arrendatario es "buen cumplidor de sus obligaciones como tal" cuando cumple satisfactoriamente las principales estipulaciones del contrato, es buen pagador, y ha cuidado como "buen padre de familia" las mejoras y el predio, preservándolo de los daños que están a su alcance evitar, como ser la invasión de malezas y la producción de erosiones o cualquier otro elemento de degradación por uso inadecuado de la tierra.

El arrendatario de contrato con plazo estipulado, que resuelva no hacer uso del derecho de permanencia legal que exceda del término de aquel plazo, deberá —seis meses antes del vencimiento del contrato— practicar la diligencia de la renuncia en acta que labrará el Juez de Paz del domicilio del arrendador, o por declaración ante escribano público, las que se notificarán al arrendador o a su representante legal. Si no lo hiciera el contrato subsistirá durante el año siguiente a aquel vencimiento, y del mismo modo, y por años sucesivos, hasta completar los cinco años.

En los casos de arrendatarios con contratos sin estipulación de plazo, la formulación de la renuncia se hará por igual procedimiento que el señalado precedentemente y deberá producirse dentro del primer año de la fecha del contrato. Si no lo hiciera, igualmente se entenderá que el contrato le obliga por otro año más, y del mismo modo, y por años sucesivos, hasta completar los cinco años.

Art. 13. El arrendatario no tendrá derecho a la prórroga en los siguientes casos:

- A) Cuando el inmueble objeto del contrato fuera entregado en administración por el propietario al Instituto Nacional de Colonización a efecto de que éste determine las nuevas condiciones del contrato que deba estipularse entre el propietario y los colonos;
- B) Cuando se trate de inmuebles cuyos propietarios no exploten otro bien rural y lo reclamen para explotarlo directamente por un plazo no menor de dos años por sí o por sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Se entenderá que se trata de un solo bien rural siempre que los predios constituyan una unidad física aunque comprendan varios padrones.

Asimismo, no corresponderá el derecho a la prórroga en los casos de predios cuyos propietarios exploten a cualquier título uno o más bienes rurales cuyo valor de aforo para la Contribución Inmobiliaria no exceda, en conjunto, de \$ 30.000. El propietario de varios predios que no constituyen una unidad física sólo podrá utilizar esta excepción respecto de uno de ellos.

Se procederá del mismo modo cuando el arrendador sea una persona jurídica;

- C) Cuando previa aceptación por el Instituto Nacional de Colonización del plan de colonización programado por el propietario, y dentro de las condiciones establecidas en los artículos 45 y 124 y siguientes de la Ley número 11.029, el arrendador propietario reclame la tierra para sub-dividirla y colonizarla; y
- D) Cuando el arrendatario explotare directamente, por sí o por otros, otro u otros predios con un valor de aforo conjunto para la Contribución Inmobiliaria superior a \$ 20.000 siendo propietario, o con un valor de aforo conjunto superior a \$ 25.000 si realizase su explotación a cualquier otro título.

Artículo 18. Los arrendatarios con contrato otorgado con anterioridad a la promulgación de la presente ley —y que a la fecha de la misma no hayan sido demandados por desalojo— gozarán del mismo beneficio establecido en el artículo 11, de acuerdo a las situaciones que allí se consideran, por el plazo de cinco años que se contará desde la fecha de dicha promulgación, y con igual régimen que el instituido en este Capítulo en cuanto les fuere aplicable.

El régimen de plazos en los casos del presente artículo no regirá en las situaciones previstas en los incisos letras A) a D) del artículo 13.

Además estos arrendatarios no tendrán el derecho a op-

tar por la prórroga del artículo 12 y demás que a ella se refieren.

CAPITULO III

De los precios

Artículo 19. Cualquiera de las partes interesadas en un contrato de arrendamiento, aparcería, sub-arrendamiento y sub-aparcería —otorgado antes o después de la promulgación de la presente ley— con dos años o más de vigencia, contractual o legal, podrá solicitar ante Juez competente la revisión de los precios convenidos o establecidos.

El Juzgado examinará los casos que se sometan a su resolución al efecto de fijar el precio del arriendo que corresponda a la rentabilidad económica normal del predio. Con tal objeto, estudiará las circunstancias de cada contrato, calidad de los campos, mejoras y tipos de explotación de cada inmueble, los valores de venta y de los arrendamientos de campos de la zona, el precio del arrendamiento del caso particular anterior al vigente y las causas que pudieran haber dado mérito a su modificación. Los precios fijados por el Juez tendrán efecto retroactivo a la fecha de la demanda, y sólo podrán ser nuevamente revisados después de transcurridos dos años de la revisión anterior.

Tampoco podrán ser objeto de revisión los precios de arrendamientos fijados de conformidad a las leyes vigentes, hasta transcurridos dos años de la efectiva aplicación de los mismos.

CAPITULO IV

De la aparcería asimilable al arrendamiento.

Artículo 24. Los contratos de aparcería, se consideran contratos de arrendamiento a los efectos de las disposiciones de esta ley sobre plazos y derechos de prórroga. (Artículo 58).

Quedan exceptuados de estas disposiciones los contratos accidentales por una sola cosecha, y los casos de cesión de tierras al productor para trabajos de mejoramiento de pasturas, siembra de tréboles, ray grass y otros cultivos similares mejoradores del suelo.

No obstante, si se comprobare que no se cumple esta finalidad, o que se la invoca como medio de ceder el uso y el goce del predio con propósito de eludir los beneficios de estabilidad y demás que esta ley acuerda al productor, el dador o arrendador quedará sometido al imperio de sus disposiciones.

CAPITULO V

De las mejoras.

Artículo 27. El propietario de todo predio en arrendamiento o aparcería para agricultura, ganadería, lechería o granja, queda obligado a dotarlo de las siguientes mejoras, comunes a toda explotación: alambrados divisorios, casa habitación, cocina y agua potable. La entidad e importancia de dichas mejoras deberá guardar razonable relación con el valor real del inmueble y con las circunstancias de cada caso.

CAPITULO IV

De la aparcería asimilable al arrendamiento

Artículo 24. Los contratos de aparcería, se consideran contratos de arrendamiento a los efectos de las disposiciones de esta ley sobre plazos y derechos de prórroga. (Artículo 58).

Quedan exceptuados de estas disposiciones los contratos accidentales por una sola cosecha, y los casos de cesión de tierras al productor para trabajos de mejoramiento de pasturas, siembra de tréboles, ray grass y otros cultivos similares mejoradores del suelo. No obstante, si se comprobare que no se cumple esta finalidad, o que se la invoca como medio de ceder el uso y el goce del predio con propósito de eludir los beneficios de estabilidad y demás que esta ley acuerda al productor, el dador o arrendador quedará sometido al imperio de sus disposiciones.

CAPITULO V

De las mejoras

Artículo 27. El propietario de todo predio en arrendamiento o aparcería para agricultura, ganadería, lechería o granja, queda obligado a dotarlo de las siguientes mejoras, comunes a toda explotación: alambrados divisorios, casa habitación, cocina y agua potable. La entidad e importancia de dichas mejoras deberá guardar razonable re-

lación con el valor real del inmueble y con las circunstancias de cada caso.

Del mismo modo —y de acuerdo a la extensión del predio— deberá dotarlo de dependencias para peones.

Art. 28 Son también de cargo del propietario las mejoras requeridas para la normal explotación del predio según su destino, como ser alambrados interiores, bretes, galpones de ordeño, bañaderos, montes de abrigo, aguas artificiales y toda adaptación del predio a los fines del contrato.

Art. 40 Siempre que se mantenga la divergencia entre las partes, los Jueces solicitarán dictamen de perito o peritos que designarán dentro del quinto día de la conclusión de la audiencia a que se refieren los artículos 37 y 38, sin perjuicio de decretar en la misma oportunidad inspecciones oculares u otras diligencias para mejor proveer.

Los Jueces dictarán sentencia dentro del término de sesenta días de recibido el dictamen pericial

CAPITULO VII

Del Derecho Preferencial

Art. 46. Elévase el límite del valor venal de las propiedades beneficiadas por los préstamos a que alude el artículo 23 de la referida ley, a la cantidad de \$ 70.000.00, que se extenderá a todo tipo de explotación rural.

CAPITULO IX

Disposiciones Generales

Art. 56. La Dirección General de Catastro dispondrá y ejecutará de inmediato propaganda suficiente —por la prensa oral y escrita— a los fines de la eficaz difusión de las obligaciones y sanciones que se instituyen por el Capítulo I de la presente ley.

Asimismo dispondrá la impresión de formularios para la inscripción de los contratos comprendidos en la presente ley.

(Los artículos 57 y 58 fueron incorporados por la Comisión).

Art. 57 Para que el arrendador pueda ejercer acción contra el arrendatario en base a que éste no cumpla sus obligaciones como "buen padre de familia", será condición necesaria que las circunstancias relativas al estado del inmueble en la fecha de iniciación del contrato consten del instrumento que lo prueba.

Art. 58. Es entendido que el dador de un predio en aparcería podrá reclamar la rescisión del contrato que hubiese otorgado, mediante prueba suficiente de que la producción del predio es inferior a la que razonablemente corresponde como producción normal, así como también en los casos de negligencia en el debido cuidado del predio, sus mejoras o del capital aplicado a la explotación.

CAPITULO X

Disposiciones Transitorias

Art. 59. Los arrendatarios por contrato otorgado con anterioridad a la promulgación de la presente ley, y que se encuentran demandados por desalojo, aun cuando la efectividad del mismo haya sido mantenida en suspenso, de conformidad con las leyes vigentes, estarán sometidos al siguiente régimen:

- A) los que hubieren ocupado el bien objeto del arrendamiento por un plazo mayor de cinco años, con anterioridad a la fecha establecida al principio de este artículo, tendrán derecho a un plazo de estabilización de tres años, que se contará a partir del 30 de abril próximo;
- B) aquéllos que hubieren ocupado el predio con anterioridad menor de cinco años a la misma fecha considerada antes, gozarán, al mismo título, de un plazo de cuatro años que se contará del mismo modo;
- C) para gozar del beneficio, deberá tratarse de arrendatario "buen cumplidor de sus obligaciones como tal".
- D) el arrendatario que resuelva hacer uso de los plazos de estabilización instituidos por el presente artículo, deberá —dentro de los treinta días de la vigencia de esta ley— practicar en el correspondiente expediente de desalojo la manifestación de su propósito afirmativo. Si no lo hiciere se entenderá que renuncia al beneficio del nuevo plazo y le será aplicable lo dispuesto por el artículo 17;
- E) e entiende que el arrendatario, en caso de manifestación afirmativa de usar el beneficio, puede optar por una o más de las anualidades comprendidas en los plazos de los apartados a) y b) precedentes;

F) no tendrán derecho a optar por la prórroga del artículo 12 y demás que a ellas se refieren, y se encontrarán sometidos al mismo régimen instituido en el Capítulo II en cuanto les fuere aplicable (artículos 16 y 17).

Art. 60 En los casos del artículo anterior regirá, igualmente, lo dispuesto por los Capítulos I, III, IV, VI, VII y IX de la presente ley en todo lo que les sea aplicable.

Art. 61. Lo dispuesto por el artículo 59 no regirá para los arrendatarios que se encuentren en alguna de las situaciones previstas en los apartados letras a) a d) inclusive del artículo 13.

Art. 62. Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, a 7 de abril de 1954.

Juan Vicente Chiarino, Miembro informante. —
Emilio O. Bonino, Miembro Informante. —
José Bove Arteaga, Miembro informante. —
Juan F. Guichón. — Juan C. Raffo Frávega. —
Javier Barrios Amorin. — Aquiles Espalter. — Lorenzo Batlle Pacheco. — A. Carlos Cutinella.

SEÑOR CHOUY TERRA. — ¿Me permite, señor Presidente, antes de entrar a la consideración del asunto que motiva la convocatoria del Senado?

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CHOUY TERRA. — Deseo declarar, señor Presidente, que me voy a abstener, en absoluto, de intervenir en este asunto y desearía que no se me computara el voto en caso de estar presente en la votación.

3

Mi asistencia, hoy, a la reunión del Senado, tenía por objeto tentar, si se pudiera hacer, un breve intermedio antes de iniciar la consideración del proyecto de ley sobre arrendamientos rurales y tratar las venias que tiene este Cuerpo para resolver, cosa que no podría demandar más de cuatro o cinco minutos, tal vez, y se solucionaría un problema antes de que entráramos en receso de Turismo, hasta el mes que viene.

SEÑOR GUICHON. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GUICHON. — A título informativo debo agregar que la Comisión de Asuntos Internacionales, en su sesión de ayer, se expidió, por unanimidad, sobre las venias que entraron en la sesión anterior del Senado, o sea para acreditar Embajadores de la República en las ciudades de La Paz y Quito. Además, la Comisión tiene pronto el informe de la venia solicitada por el Poder Ejecutivo para designar Embajador y Ministro Plenipotenciario ante el Gobierno del Reino Unido al doctor Quadros.

Por consiguiente dicha solicitud de venia está en condiciones de ser considerada por este Cuerpo. (Apoyados).

4

SEÑOR BOVE ARTEAGA. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOVE ARTEAGA. — Ha llegado a mi poder una comunicación respecto a una venia de destitución cuyo plazo vence el próximo 15 de abril. Considero que el Senado debe tratar esta venia. De acuerdo a mi criterio personal, no se puede dejar vencer el plazo cuando el Senado es juez de alzada. Además, nosotros tenemos la tranquilidad que la Comisión de Asuntos Administrativos ha estudiado el pedido de destitución y nos puede dar cuenta de la resolución que ha tomado.

Si el Senado es Juez de Alzada, en última instancia, no puede despojarse de tal carácter dejando vencer el plazo y permitir que este funcionario sea destituido. El Senado, repito, tiene que expedirse sobre esta solicitud de venia, porque, de lo contrario demostraría una falta de sensibilidad que ya ha acusado en otra oportunidad, donde tomó resolución la Comisión Permanente, asunto en el cual yo intervine. En dicho pedido de destitución, las razones que adujo eran tan claras que la Comisión Permanente negó la venia. Si algunos senadores no nos hubiéramos preocupado en ese problema, dicho funcionario hubiera sido destituido de cualquier forma.

Considero, que el Senado no puede quedarse impasible sin cumplir con su deber.

(Apoyados.)

SEÑOR GAMBA. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GAMBA. — La Comisión de Asuntos Administrativos, señor Presidente, tiene conocimiento del asunto a que se refiere el señor senador Bove Arteaga. El expediente ha circulado entre sus miembros, y no hay dos opiniones diferentes con respecto al pedido de venia para destituir al funcionario de que se trata. Como se citan diversos nombres, desearía que los señores Secretarios de la Comisión me alcanzaran los expedientes respectivos que he entregado, hace tres o cuatro días, después de haber circulado entre todos sus miembros, a fin de hacer más precisas las palabras que deba pronunciar.

Se trata de la situación creada por un chofer de Salud Pública...

SEÑOR PRESIDENTE. — Si me permite, señor senador, la Mesa debe informarle que estamos en sesión pública. El Senado deberá resolver.

SEÑOR BOVE ARTEAGA. — Solicito que se incluya entre los asuntos a tratar, en sesión secreta, la venia a que he hecho referencia.

SEÑOR GAMBA. — De cualquier manera, señor Presidente, deseo manifestar que si el Senado resuelve considerar el pedido de venia de destitución solicitado por el Poder Ejecutivo a que se ha referido el señor senador Bove Arteaga, la Comisión de Asuntos Administrativos, está en condiciones de informar.

5

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar la moción del señor senador Chouhy Terra ampliada por el señor senador Bove Arteaga.

Los señores senadores por la afirmativa, sirvanse indicarlo.

(Se vota:) — Afirmativa.

6

—El Senado pasa a sesión secreta.
(Así se hace).

7

(Vuelto a sesión Pública).

SEÑOR PRESIDENTE. — El Senado en sesión secreta ha concedido al Poder Ejecutivo las siguientes venias: para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República, ante el Gobierno de Su Majestad Británica al doctor José A. Quadros; para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de Ecuador, al doctor Julio F. Casas Araujo; y Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de Bolivia al señor Julio Antonio Lacarte Muró.

Asimismo se ha concedido venia al Poder Ejecutivo para destituir al Entero del Servicio de Asistencia Externa del Ministerio de Salud Pública, señor Ricardo Egipcio.

8

Continúa la orden del día con la consideración del proyecto de ley sobre arrendamientos rurales o estabilización agraria mínima.

SEÑOR BONINO. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador Bonino.

SEÑOR BONINO. — Señor Presidente: el tema que vamos a tratar de inmediato, debía lugar, indudablemente, a un informe extenso y de fondo, porque la materia de este proyecto y las soluciones que él propicia, son de verdadera entidad.

Los señores senadores están suficientemente ilustrados sobre la importancia y la trascendencia del problema. Es un tema que ha sido debatido en muchas oportunidades y que todos los años se trae al Parlamento sin haber tenido el tiempo suficiente de realizar justamente lo que ahora se intenta con este proyecto de ley: salir del régimen de emergencia y de prórrogas, que nadie acepta como bueno, pero que todos votan como un verdadero mal necesario.

Cabe destacar, en primer término, la labor intensísima realizada por la Cámara de Representantes, primero por la Comisión de Fomento de la Producción y después por el Cuerpo.

Casi toda la estructura del proyecto ha sido elaborada en la otra Cámara. Se trabajó durante mucho tiempo en esta materia con el mayor número de asesoramientos y la opinión pública recibió en general, con beneplácito, el pro-

yecto aprobado por la Cámara de Representantes, sin perjuicio, desde luego, de las observaciones o salvedades que es lógico suponer en una materia tan compleja y tan difícil.

Por su parte, la Comisión de Fomento integrada con miembros de la de Constitución y Legislación, también se hizo cargo de la entidad del proyecto, y ante la inminencia del vencimiento de otro año de prórroga, se propuso de todas maneras entrar a su estudio intenso y tiene la satisfacción de haberlo traído en tiempo hábil a la consideración del Senado. Podemos decir que en verdad nos hemos empeñado en este trabajo. Tendrá errores; se habrá omitido la solución de algunos problemas; a otros se les habrá dado solución imperfecta; pero en el ánimo de todos los integrantes ha estado la preocupación de realizar lo mejor dentro de un proyecto de tanta complejidad.

En términos generales, puede decirse que la Comisión de Fomento integrada ha respetado el proyecto de la Cámara de Representantes, limitándose a modificar a aquellos temas que ha considerado realmente imprescindible introducirles enmiendas.

Todo el espíritu del nuevo derecho, toda la preocupación que persigue este proyecto de ley, ha sido aceptado por la Comisión.

El problema de arrendamientos rurales es de gran trascendencia para la economía del país. Se tiene conciencia de que la explotación de la tierra no es como las actividades de otras industrias que pueden realizarse en períodos más o menos breves y donde el traslado de las máquinas o los implementos se puede efectuar con cierta facilidad.

La explotación de la tierra, requiere fundamentalmente radicación en la misma tierra, y si se trata de un régimen de arrendamientos, se está diciendo que tal radicación no existe o existe en un grado mínimo. Se sabe que el arrendatario no tiene estabilidad en la tierra, y trata de hacer la explotación en la forma más beneficiosa para sus intereses, pretendiendo, en el menor tiempo posible, obtener el mayor rendimiento. En esta forma, puede y llega necesariamente a conspirar contra el verdadero interés económico.

La ciencia enseña que el tratamiento de la explotación de la tierra, requiere prudencia, requiere cuidados. No es posible someter a la tierra a una explotación intensa en tal grado que se agote o se canse y, por el contrario, requiere procesos alternativos de producción que vayan extrayendo de la tierra, en forma parcial y periódica, los distintos elementos de riqueza.

Por otra parte, existe el problema del arrendador, que también debía ser digno de contemplarse por la legislación. Hace ya muchos años —más de 20— que se vive en un régimen de emergencia, que se prorroga la situación del arrendatario con plazos transitorios de un año más, sin tener en cuenta que los valores han variado fundamentalmente, por lo que el propietario se encuentra obligado a admitir la permanencia de un arrendatario que no paga, en la mayor parte de los casos, un justo precio.

Este problema lo hemos ventilado ampliamente cuando tratamos la Ley de Arrendamientos Urbanos y, por suerte, la legislación en este aspecto, sin ir a una solución perfecta, ha llegado a establecer un régimen en general aceptado por toda la opinión pública. Pretendemos que este proyecto de ley, también tenga una aceptación similar.

En lo que se refiere al propósito que anima la economía del proyecto, debo manifestar que, sin perjuicio de respetar el derecho del propietario a percibir un justo precio por entregar la tierra al que la explota, se persigue un plazo de estabilización mínima del arrendatario, y ya que no se puede llegar a un régimen de mayor permanencia en el cual el arrendatario pudiera ser realmente el propietario o un usufructuario de la tierra por un período más o menos largo, por lo menos se le asegura un mínimo de tiempo durante el cual pueda desarrollar un ciclo de producción que no signifique un inconveniente o un perjuicio para la economía del país.

En otros términos, además de contemplar en la mejor forma posible la situación de ambos contratantes, el proyecto de ley tiende a defender, también, con especial preocupación, la tierra en cuanto a su conservación y en cuanto a su fertilidad futura.

De ahí que el artículo 1º del proyecto, que tiene una redacción un poco sorpresiva, ya que no tiene ningún elemento preceptivo concreto, haya sido aceptado por la Comisión porque denota cuál es el espíritu que anima toda la ley.

Por estas razones la Comisión ha creído conveniente completar el rótulo o carátula del proyecto de arrendamientos rurales, con el de Estabilización Agraria Mínima.

En general, para los contratos que se celebren en el futuro, se le asegura a todo trabajador de la tierra que contrata un campo, una estabilización de cinco años, con derecho a prórroga por tres años más, es decir, ocho años.

Se considera un plazo prudencial para la permanencia del productor.

En el problema de los precios, la innovación fundamental o la solución fundamental que da el proyecto, es ir a la revisión de los precios. Se establece en la ley, como veremos en la discusión particular, una serie de elementos a tener en cuenta para el momento de decidir un precio razonable, un precio justo.

Otra cosa importante, que también se agrega, es la exigencia del contrato escrito, modificando las normas de la ley del año 27, que permitían el contrato verbal y, además, estableciendo la formalidad de la inscripción: para que los beneficios, los plazos y los derechos que acuerda esta ley, puedan ser invocados, es imprescindible que el contrato se encuentre inscripto.

También se tiene en cuenta la necesidad de dotar a los predios dados en arrendamientos, de mejoras que guarden relación razonable con el valor del predio y mejoras que se refieran ya a construcciones, alambrados, etc., generales a toda explotación, o ya a mejoras que se refieran específicamente al tipo de explotación para el que se destina el predio.

Se establecen, además, situaciones preferenciales para el Instituto de Colonización que, como sabemos, es el organismo público competente para regular la explotación de la tierra en representación del Estado y, por último, contiene disposiciones de limitación de los arrendamientos.

La Comisión de Fomento del Senado ha puesto su preocupación en dos aspectos: primero, ha considerado que el proyecto de la Cámara de Representantes había omitido dar una solución a los desalojados. Justamente, el problema más difícil y más candente que tiene que resolver el legislador. La ley podía ser muy buena al ir encauzando los contratos futuros, pero dejaba sin resolver el problema de los actuales desalojados, problema con respecto al cual se pensó siempre que el Instituto de Colonización podría ir solucionándolo, mediante la entrega de tierras a estos desalojados; pero sabemos perfectamente bien las dificultades con que se ha manejado este organismo, dificultades que provienen, en primer término, de los limitadísimos recursos que se le han otorgado para cumplir sus fines y, actualmente, con bastante penuria puede ir obteniendo algunos recursos, muy limitados, con la venta de títulos de deuda que le ha concedido la ley, cuestión que responde, por otra parte, al problema general financiero de la colocación de deuda pública.

Por consiguiente, si todavía estábamos lejos de una solución definitiva para los desalojados por el Instituto, había que prever también su situación y, entonces, en el seno de la Comisión se planteó una clasificación de las distintas situaciones: de los contratos a realizar, de los contratos realizados y aún de los contratos ya vencidos y con desalojo.

El primer grupo está integrado por los contratos futuros. En estos no hay ningún problema. Se acepta íntegramente la solución del proyecto de ley de la Cámara de Representantes. Si se realiza un contrato menor de cinco años, se entiende que puede extenderse a cinco años, se requiere la manifestación de voluntad del arrendatario para acogerse a este beneficio y, además, el derecho de prórroga por tres años más, si está en las condiciones establecidas en el proyecto de ley. Para los contratos vencidos, celebrados con anterioridad a la ley, pero que no han sido objeto de desalojo, también se contempla la situación, estableciendo el derecho a permanecer, también cinco años más. Por último, está el caso de los arrendatarios que tienen contrato vencido, pero que, además, se ha producido la acción de desalojo. Para éstos, se establece un complemento de tres o cuatro años, según los casos.

El otro punto importante que ha considerado necesario modificar la Comisión de Fomento del Senado, es el problema de la jurisdicción.

En este problema ya la Cámara de Representantes tuvo en su seno largas discusiones respecto a la conveniencia o inconveniencia de instituir los Jurados. Los Jurados, indudablemente, en esta materia, estaban rodeados de cierto prestigio y, sobre todo, tenían un sentido especial en los medios rurales; pero la Comisión, frente a las distintas manifestaciones de opinión por parte de los sectores más interesados o más vinculados al problema, entendió que era conveniente dejar de lado este instituto, a pesar de sus ventajas, e ir al régimen de los jueces, que es el normal, ni más ni menos que lo que se hizo en materia de arrendamientos urbanos.

Llegado el momento, si es necesario, podremos ampliar, con más detalles, los fundamentos que ha tenido la Comisión para llegar a esta solución.

En general, una de las causas o de los argumentos que más peso hicieron en la Comisión era el de que la ley que se intenta sancionar tiene el propósito de dar una cierta permanencia, un régimen de estabilidad al sistema de arrendamientos rurales. En cambio, las leyes que habían instituido antes los arrendamientos rurales, eran leyes tran-

sitorias, de emergencia, para la cuales se justificaba, en cierto modo, el funcionamiento de este instituto.

Por último, cabe decir que después de todo este estudio, que ha llevado bastantes horas de trabajo y que está expresado en el informe repartido en la semana pasada, como es del conocimiento del Senado, frente a las manifestaciones de algunos señores senadores de que en conocimiento del proyecto repartido e informado tenían diversas observaciones que formularle, el Senado resolvió como es notorio, la suspensión de la sesión de ayer, provocando la reunión de la Comisión de Fomento, a los efectos de oír esas observaciones y de intentar, en lo posible, contemplarlas, para traer un trabajo ya elaborado, al seno del Cuerpo.

Eso fue realizado en la tarde ayer, prolongándose la sesión hasta las primeras horas de la mañana de hoy. En general, las observaciones no eran de fundamental entidad; fueron oídas y la mayor parte de ellas fueron tenidas especialmente en cuenta constituyendo ajustes a la redacción del proyecto que se había repartido.

En el momento oportuno de analizarse los distintos artículos del proyecto en la discusión particular, tendremos ocasión de proporcionar todas las aclaraciones que el Senado pida con respecto a estas modificaciones.

No creo, señor Presidente, que deba prolongar más esta exposición. Como dije al principio es un tema muy conocido y debatido, aunque por su importancia merecería una información más intensa y extensa, pero, por la angustia de tiempo que existe, debemos, a la mayor brevedad, aprobar el proyecto en la forma que el Senado crea convenientes a fin de que la otra Cámara, en tiempo, pueda tomar en cuenta las enmiendas introducidas y sancionar la ley antes de fin de mes, es decir, antes del vencimiento de la ley de prórroga que está vigente actualmente.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR ESPALTER. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ESPALTER. — Señor Presidente: como estamos obligados por el Reglamento a manifestar las implicancias que podamos tener en los asuntos que considere este Cuerpo, voy a expresar lo que ya dije en la Comisión de Fomento. Aunque no estoy seguro que esta ley me comprenda, debo declarar que soy arrendatario y que la ley podría comprenderme en sus beneficios y, tal vez, en los que no son beneficios precisamente. Repito, que yo planteé mi situación en la Comisión de Fomento y ésta consideró que era un asunto de interés general. De cualquier manera, sin perjuicio de intervenir en el debate en lo que crea que no me está vedado por el Reglamento —doctores tiene la Santa Madre Iglesia y si estoy equivocado el señor Presidente me lo hará saber— no voy a votar el proyecto a favor ni en contra, aunque soy partidario del mismo. Hago esta aclaración porque en el o los informes de la Comisión respectiva está puesta mi firma.

Quiero dejar constancia, que, a pesar de todo, estas mismas manifestaciones las hice en el seno de la Comisión de Fomento cuando consideré el asunto.

SEÑOR CHIARINO. — Pido la palabra para referirme a este asunto.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CHIARINO. — Creo, señor Presidente, que el planteamiento que hace el señor senador Espalter nos obliga, a los que intervenimos en la labor de la Comisión, a repetir en el Senado lo que dijimos en su seno.

Este asunto ya fue promovido ante la Comisión Especial de Fomento, integrada al efecto, y se entendió que era una ley de carácter general...

(Apoyados).

...distinta a otras que tienen un interés directo, inmediato, que pueden alcanzar en particular a algunos legisladores. Pero, planteado el problema, señor Presidente, creo que sería conveniente el pronunciamiento expreso del Cuerpo.

Declaré en la Comisión que era arrendatario, y, además, por otra parte, represente de una firma arrendadora. De modo que en realidad actuaría hasta en una especie de equilibrio de intereses. No me considero en posición como para resolver el punto o para excluirme del asunto, porque en estas leyes de carácter general me parece que los legisladores deben tener una amplitud de intervención conveniente; pero de todo modos me interesa plantear el asunto en el Cuerpo para que lo resuelva. Desde luego, que si hubiera cualquier objeción a ese punto de vista que me es particular, no tendría ningún inconveniente en retirar mi firma del proyecto y manifestar que me considero excluido de toda intervención.

SEÑOR ESPALTER. — ¿Me permite, señor Presidente, para agregar algunas palabras a las manifestaciones que formulara anteriormente?

No es cuestión de susceptibilidades; pero cuando por primera vez lei en un Boletín Informativo de la Cámara de Representantes el debate producido sobre este tan llevado y traído asunto de la lana —que parece que es un asunto de interés general— en el cual el señor Ministro de Hacienda, doctor Acevedo Alvarez dijo que había legisladores que estaban votando en favor de sus intereses particulares —este es el concepto; no las palabras del señor Ministro— lo que no podían hacer, pensé, después de esas expresiones de un Ministro en el seno de la Cámara, que yo, en el futuro, tendría que tener más cuidado para que algún mal pensado, en algún momento determinado, no pudiera también decir que los senadores votan en asuntos que tocan a sus intereses particulares.

Esto es todo y por eso planteo este asunto al Senado.

SEÑOR RAFFO FRAVEGA. — Pido la palabra para referirme al mismo asunto.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAFFO FRAVEGA. — Quiero adherir, señor Presidente, a las palabras manifestadas por el señor senador Chiarino y para declarar, también, que no soy arrendatario ni propietario; pero puedo decir que tengo unas acciones de una sociedad anónima familiar. Así, que si estoy en la posición de los señores senadores, no votaría ni a favor ni en contra del proyecto.

SEÑOR GUICHON. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GUICHON. — Considero, señor Presidente, que estamos dentro del artículo 200 del Reglamento que dice que es prohibido a todo senador votar en negocios propios o cuando se trate de su persona, pero que tendrá derecho a tomar parte en la discusión.

SEÑOR ESPALTER. — Ese es el artículo que invoco.

SEÑOR GUICHON. — Y que ha invocado con anterioridad otro señor senador, que se retiró de Sala por la misma circunstancia y que dijo que no participaría en la discusión y votación del proyecto.

Creo que este asunto tiene entidad y que es una cuestión delicada sobre la cual no se puede pasar con una gran ligereza, pero que no es un asunto nuevo pues ya se ha planteado en múltiples oportunidades.

Considero, que estas leyes de carácter general no están comprendidas estrictamente en el artículo 200; no es un negocio propio cuando es un negocio general. Es un asunto que interesa a todo el país y a arrendatarios y arrendadores que forman una extensa parte de la población del país.

De manera, señor Presidente, que creo conveniente que se pronuncie el Senado en el sentido de que no están comprendidos en el artículo 200 las situaciones que plantean los señores senadores y, además, porque no vamos a poder lograr quórum porque empiezan las excusaciones y hay otros señores senadores que están en el mismo caso y que no han concurrido a la Comisión, encontrándonos, por consiguiente, con el problema, realmente grave, de no poder resolver esta cuestión.

Me pronuncio concretamente en el sentido de que los señores senadores puedan intervenir en la discusión y votación de este proyecto de ley sin ninguna limitación.

SEÑOR VINA. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VINA. — Señor Presidente: la verdad es que no he intervenido en absoluto en este asunto y que no pienso intervenir. Declaro que tengo unos bienes de campos que están arrendados por un hermano mío al que no pienso tocar a pesar de la aprobación de la ley.

De manera que esa circunstancia que concurre —aunque se trate de un bien pro-indiviso— determina que no intervenga en la discusión y votación de este proyecto de ley con o sin autorización del Parlamento.

SEÑOR ARRILLAGA SAFONS. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARRILLAGA SAFONS. — Me encuentro en situación análoga a la expresada por el señor senador Vina. Soy integrante de una Sucesión; mi señora integra otra y tiene también propiedades rurales. Entendía que la disposición no me alcanzaba. Consideré que era un problema análogo al que se planteó cuando se trató la Ley de Alquileres, en el cual todos o éramos propietarios o éramos inquilinos.

Pero yo deseo ajustar mi conducta a las más severas disciplinas, de manera que con mucho gusto, si la Cámara lo entendiera así, no sólo no intervendría en el debate, sino que también me retiraría de Sala.

SEÑOR GAMBA. — Entonces se acaba la legislación.

SEÑOR MANINI RIOS. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RIOS. — Señor Presidente: he seguido, aunque de lejos este proyecto de ley y no se me había ocurrido que se pudiera plantear este problema en el Senado. Sin embargo voy a agregar que si lo he seguido, es porque la mitad de las disposiciones me afectan o pueden afectarme, como pasa más o menos con la mitad de los legisladores o poco más porque, de acuerdo con el criterio sustentado por la propia ley en uno de sus artículos, parece que para este problema de los arrendamientos rurales alcanza la influencia de la misma hasta el segundo grado de parentesco por afinidad o consanguinidad y creo que debe haber cero senador que no tenga un pariente en segundo grado, por lo menos, afectado por las disposiciones de esta ley.

Por lo tanto, lo que corresponde es levantar la sesión y retirarnos los señores senadores de Sala, y esperar que el próximo mandato se elijan senadores no vinculados a la tierra y en consecuencia, para que puedan resolver el problema.

La verdad es que planteado en estos términos, cuando dos señores senadores han dicho que se van a abstener de intervenir, porque aquí no vamos a jugar a quién es más delicado que otro. Yo tampoco quiero intervenir y me retiro de Sala, y quiero ver con qué señores senadores se va a sancionar este proyecto de ley.

SEÑOR VIGNALE. — Pido la palabra.

Yo no tengo ningún pariente ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto grado, que sean propietarios de campo; pero digo una cosa, ¿no hay un precedente cuando tratamos la ley de alquileres? ¿No estábamos todos directa o indirectamente implicados? ¿No es esta una situación similar? Es lo que dejó planteado para que se responda.

SEÑOR PRESIDENTE. — Está en consideración la proposición formulada por el señor senador Guichón.

SEÑOR BATLLE PACHECO. — Si algún señor senador tiene algún interés en la ley, el Senado resuelve, según la naturaleza de esa ley, si puede o no intervenir en el debate y votar.

Cuando se trata de una ley general es casi indudable que todos tienen algún interés en la ley. Por ejemplo, si se tratara un asunto relativo a las Aguas Corrientes, ¿quién podría decir que no tiene agua corriente?, y se le podría sospechar a uno que está desconforme con el servicio que quiere que rebajen las tarifas.

De manera que cuando es una ley general, señor Presidente, y los señores senadores han denunciado la situación que tienen frente a esa ley general, me parece que el criterio, desde que el Senado existe, ha sido el de que pueden intervenir.

(Apoyados).

—No así, señor Presidente, cuando se trata de una ley que beneficia directamente a una persona o que no tiene un carácter general, que es un beneficio particular. Entonces, a veces el Senado ha considerado y ha aceptado la excusa para intervenir. Pero es este el caso de una ley de arrendamientos rurales para todo el país.

Creo que en esta clase de leyes, como podría ser una ley relativa a Aguas Corrientes, en la que todo el mundo puede estar involucrado directa o indirectamente, podríamos vernos todos de alguna manera relacionados con la ley.

Por eso, habiendo denunciado algunos señores senadores esa relación directa con la ley, me parece que lo que puede hacer el Senado es decidir que pueden votar e intervenir en el debate.

Hago moción en ese sentido.

(Apoyados).

SEÑORA VIDAL (Pinto de). — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA VIDAL (Pinto de). — Señor Presidente: declaro que estoy en las mismas circunstancias, aunque desde el punto de vista de la sociedad conyugal. Mi esposo arrienda una chacra y como ello ha ocurrido después del casamiento creo que también me encuentro en el caso que han denunciado otros señores senadores.

SEÑOR BARRIOS AMORIN. — Pido la palabra.

Señor Presidente: como parecería que hay que poner de manifiesto la situación de cada uno de los señores senadores yo, por mi parte, digo lo siguiente: el artículo 200 prohíbe votar pero no intervenir en la discusión a quienes pueden ser caracterizados como teniendo negocio propio que va a ser resuelto por el Senado de la República.

En primer lugar ha de ser discutible, controvertible o tema a estudiar, el de saber si una ley de carácter general puede ser definida como negocio propio y, en segundo lugar, también, parecería que puede ser discutible la característica de propio.

Hoy decía un señor senador que la ley del Instituto de Colonización hace alguna definición al respecto, declarando de comprendidos a quienes estén vinculados hasta en se-

segundo grado de parentesco por afinidad o consanguinidad. En el caso, debo declarar que si bien no soy ni arrendador ni arrendatario, mi padre posee algunos modestos bienes que ha dado en calidad de arrendador.

En consecuencia, el Senado resolverá si estoy o no implicado.

SEÑOR GAMBA. — Pido la palabra.

Esta exposición de escrúpulos personales, muy justificadas del punto de vista de cada uno, de los que forman parte de este Cuerpo, va a aniquilar al Senado si seguimos en este orden de consideraciones, puesto que quedaría reducido a dos personas, el señor senador Vignale y el que habla el cual manifestó que no tiene relación con nadie que tenga nada y yo estoy en las mismas condiciones. Ni en primero, ni en segundo grado de parentesco, ni directa ni colateralmente, tengo nada que ver con ningún arrendatario ni arrendador.

De manera que siguiendo por este camino la legislación sería imposible; el Senado se mutila a sí mismo, queda reducido a dos o tres personas. No sé qué opina la señora senadora Amestoy de Mochó, ya que hasta la señora senador Pinto de Vidal ha manifestado que por razones de su situación conyugal también cree de su deber exonerarse de intervenir en estas cuestiones.

SEÑORA MOCHO (Amestoy de). — ¿Me permite, señor Presidente?

Deseo hacer uso de la palabra para manifestar que me encuentro en la misma situación que los señores senadores implicados.

SEÑOR GAMBA. — Lo que ha dicho el señor senador Barrios Amerín me parece que es lo más justo y exacto por el momento. Claro que si se ha de estudiar largo y tendido el problema, allá los juristas darán las razones que tengan para seguir una u otra solución. Es difícil identificar una ley de carácter general con los negocios de una, dos o tres personas. Seguramente que una ley puede en algún momento, beneficiar a alguno de nosotros, a excepción del señor senador Vignale y el que habla, pues hay que tenerlo en cuenta en primer término. Pero puede ocurrir, señor Presidente, para todas las demás leyes de carácter general que han traído un beneficio económico a los habitantes de la República, nos beneficie a todos los que estamos aquí.

De manera que no es posible llegar a esa conclusión, porque tendríamos que levantar ahora mismo la sesión, pasar el asunto a la Comisión de Legislación o a una comisión especial y esperar que trajeran un veredicto que nos diga si podemos continuar en el debate.

Por estas razones, señor Presidente, adhiero a la moción formulada por el señor senador Batlle Pacheco, que me parece que resuelve en este momento la situación.

SEÑOR PRESIDENTE. — Está a consideración la moción formulada por el señor senador Guichón, en el sentido de que el Cuerpo declare que los señores senadores no están impedidos de intervenir en la discusión y votación de este proyecto de ley.

SEÑOR BAYLEY. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BAYLEY. — Antes de votar, señor Presidente, deseo hacer una pregunta relacionada con el asunto, que, en este momento, me parece más próximo pariente del que se está por tratar.

Me pregunto si cuando se votaron durante varios años prórrogas de plazos de desalojos de arrendamientos rurales, se produjo este floreo de sensibilidad, así colectiva e individual, y se trajo al redondeo, este manójo de escrúpulos que colocan, como decía el señor senador Gamba, un poco en trance al Senado —que tal vez fuera saludable para el país— de inminente liquidación.

(Hilaridad).

SEÑOR ESPALTER. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ESPALTER. — Se ha abusado, —y digo esto con perdón del señor senador Bayley— de la palabra susceptibilidad, porque planteé este asunto. Pero tengo otro antecedente ocurrido anoche para agregar al que había dado. A un señor diputado, cuando llegó el momento de la votación y del empate, 36 en 36, se le dijo: "Señor Presidente: usted no puede votar, está impedido por el Reglamento". Creo que este señor diputado que votaba en el problema de la lana, seguramente no era propietario en ese momento de una cantidad mayor de mil kilogramos de lana. Sin embargo, le fué planteado el asunto por otro señor representante. Siempre hay mal pensados, señor Presidente.

SEÑOR GAMBA. — ¿Qué ocurrió, señor senador?

SEÑOR MANINI RIOS. — Le borraron el voto.

SEÑOR BAYLEY. — Hay que aclarar que ese señor diputado votaba en contra de sus intereses.

SEÑOR ESPALTER. — No sé si votaba en contra o a favor. Sé que la susceptibilidad no era la de ese señor Representante que, como en este caso lo han manifestado varios señores senadores, no se consideraba implicado por tener un poco más de mil kilogramos de lana y concurría con su voto a la solución del problema. Sin embargo, la Cámara de Representantes le borró el voto.

De manera que, señor Presidente, no es cuestión de susceptibilidad. Lo que ocurre es que los que no están implicados, o parecería que lo están, abusan de la sensibilidad de los otros, para plantearles estos problemas, habiéndose llegado a la enormidad de borrar el voto de un Diputado que se encontraba en esas condiciones.

No quiero, señor Presidente, que a mí se me borre nunca el voto. Por eso es que planteo el asunto y no creo que le haga mal al Cuerpo, saber la situación en que está cada uno de los legisladores.

SEÑOR GAMBA. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ESPALTER. — Si es breve sí, señor senador.

SEÑOR GAMBA. — Muy breve.

SEÑOR ESPALTER. — Entonces, le concedo la interrupción.

SEÑOR GAMBA. — Si es cierto que le borraron el voto a ese señor representante, no olvide el señor senador que antes de que ocurriera esa circunstancia, la Cámara lo había resuelto en una sesión anterior.

SEÑOR MANINI RIOS. — La Cámara había resuelto que los que tenían 10 vellones —en realidad no puso límites— o cinco vellones, no podían votar en el asunto de la lana, lo cual es, a mi modo de ver, un soberano disparate.

SEÑOR ESPALTER. — Cinco vellones de lana, cuando se trata de buenas ovejas, son veinte kilogramos.

(Hilaridad).

—De manera que vea, señor senador Bayley, de que lado está la susceptibilidad.

Es necesario, entonces, y beneficioso para los Cuerpos legislativos, que cada uno denuncie su situación. Alguna vez estudiamos este problema de las implicancias y no es el caso de entrar ahora al tema, que seguramente el señor senador Bayley conoce demasiado bien.

Repito que no creo que los que digan en qué situación se encuentran pequeños de susceptibles, sino que están al diapason con la susceptibilidad de la hora. Que el Senado resuelva que pueden intervenir, así no nos exponemos a que en algún momento nos borren el voto por tener 20 kilogramos de lana.

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar la moción del señor senador Guichón.

SEÑOR ARRILLAGA SAFONS. — No hay número para votar, señor Presidente. Las personas habilitadas para hacerlo no llegan a formar quórum.

SEÑOR CUSANO. — Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CUSANO. — Creo que este asunto que se planteó un tanto en broma, ha tomado verdadera seriedad. Está involucrado un poco el prestigio del Parlamento, en esto que estamos discutiendo.

Tengo una profunda fe en la rectitud del Parlamento y es necesario que se concrete bien ahora, lo que se ha debatido para que mañana al divulgarse la versión no se desvirtúe su sentido.

Considero que lo importante es la eficacia y la justicia de las leyes que se votan. Lo que nos debe preocupar fundamentalmente, es que la ley que vamos a votar sea una ley ecuánime, amplia, para todos aquellos a quien se desea proteger y amparar y la situación personal mínima, ínfima, de un legislador o de varios legisladores, es demasiado pequeña para que pueda tomarse tan en cuenta, como para inhibirle de intervenir en el asunto.

Creo que si hay Parlamentos honrados, el del Uruguay es uno de ellos. Está muy bien incorporada al Reglamento de ambas Cámaras la cláusula que establece que cada legislador debe denunciar la situación personal que se le cree en determinado asunto pero considero también que no se debe ir más allá. Si con respecto a cada proyecto de ley se fuera a investigar con microscopio la situación personal de los legisladores, dejando de lado lo que representa la jerarquía del cargo, lo que representa la responsabilidad y su propio bagaje moral y el prestigio político que surge de ocupar una banca, —a la cual ha llegado por la voluntad del pueblo— estaríamos presuponiendo que se hallan impulsados por designios oscuros, pequeños, o interesados en su favor, lo que comprometería gratuitamente la limpieza de las leyes.

Lo importante es que las leyes sean justas y que se tenga la convicción de que se procede con justicia. Una vez denunciada la situación de cada legislador, lo que se debe hacer es declarar que todo el Cuerpo está en situación de votar.

Pido que se autorice a todos los legisladores a intervenir en este asunto. Así lo hemos hecho en infinidad de circunstancias; y hay decenas de precedentes. Cuando se consideró las leyes de alquileres relativas a la capital, todos, o casi todos, los legisladores, estaban involucrados, porque dentro de Montevideo, el que no es inquilino, es propietario y es muy difícil encontrar la tercera posición entre el propietario y el inquilino. Sin embargo han sido sancionadas esas leyes con el voto de todos los legisladores y no se presumió que ningún legislador fuera a tener en cuenta su situación de inquilino o propietario para dar su voto.

Lo realmente justo, señor Presidente, en este caso, es que se vote la moción del señor senador Guichón, que la vote todo el Senado y que ninguno se considere en el caso de no votar, porque se está haciendo en este caso distinciones de jerarquía entre los que tienen mejor situación económica y los que la tienen inferior. Aquí todos estamos en idéntica posición de interés hacia las cuestiones públicas. La fortuna de cada uno, pertenece a sus fueros privados. Nadie es más que nadie aquí dentro, aunque uno sea millonario y otro no tenga más que la dieta. Estamos todos en la misma situación. La diferencia comienza fuera del recinto...

Me parece hasta desagradable que se vengán a plantear estas cosas con criterio tan inútilmente radical. Algunas veces se habló de la ley cristal. No es el momento de dilucidar aquí ese problema. Estoy de acuerdo sobre la denuncia de bienes por los hombres públicos y mi Partido ha hecho cuestión fundamental de esta declaración estimando que ella debiera formularse al iniciarse el período gubernamental y legislativo. Pero no es posible que en cada problema que se plantee, cada legislador tenga que presentar todas las cuentas de su economía privada. Ello no viene al caso y no creo que acarree prestigio al Parlamento.

Por eso, señor Presidente, creo que lo prudente y lógico es votar la moción del señor senador Guichón habilitando a todos los señores senadores para intervenir en este asunto.

SEÑOR GAMBA. — ¿Y quién vota?

SEÑOR CUSANO. — Votamos todos, señor senador. Por favor, no haga más cuestión, porque entonces nadie va a votar.

SEÑOR BAYLEY. — ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BAYLEY. — Frente a esta especie de invitación al vals, debo decir yo también, que mi esposa —es una manera de hablar—, más dueña es el acreedor hipotecario que ella— tiene una pequeña chacra. Quiero, a pesar de que tengo el designio de ocuparme exclusivamente del aspecto técnico de la ley, denunciar también mi situación.

SEÑOR PRESIDENTE. — Si me permite el Senado, debo manifestar que el senador que preside, si no se había pronunciado en ningún sentido hasta este momento, es porque no se consideraba alcanzado por los preceptos del proyecto de ley que se va a considerar.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador Guichón.

Los señores por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Se vota: Afirmativa. — (9 en 16).)

SEÑOR CHIARINO. — Creo que convendría dejar constancia, para que no se interprete mal el acta, el día que se lea este resultado, que los votos negativos son abstenciones; que son de aquellos senadores que han creído, como yo, que no pueden ser juez y parte en el asunto.

SEÑOR GUICHÓN. — Que no han habido votos contrarios, sino abstenciones y votos afirmativos.

SEÑOR HAEDO. — Pido la palabra, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HAEDO. — Recién vuelvo a Sala. No conozco el proceso de este asunto, y por lo tanto si hay que hacer alguna declaración relacionada con él.

Mi señora, posee una propiedad rural sometida al régimen de arrendamiento. Personalmente, no tengo propiedades rurales.

Formulo la declaración del caso.

Esto no obsta para que considere que esta ley es una buena ley; y necesaria. Podrá tener imperfecciones; pero considero que, de una vez por todas, tenemos que dar al país un régimen estable en materia de arrendamientos.

No sé si los senadores que se hallan en mi situación pueden o no intervenir en la consideración de este asunto.

SEÑOR PRESIDENTE. — El Senado acaba de resolver que están habilitados todos los senadores para intervenir en el proyecto de ley en discusión.

Continúa la discusión general. Tiene la palabra el señor senador Bayley.

SEÑOR BAYLEY. — Declaro no haber podido concurrir, como era mi propósito, en el día de ayer, a la sesión de la Comisión de Fomento de la Producción porque, de haberlo hecho, seguramente podría ser mucho más breve la exposición que voy a hacer, y, también; de seguro, hubiera

superado las dificultades que me crea la interpretación o la comprensión del alcance exacto de algunas de las disposiciones del proyecto, y aún de las mejoras o de las reformas —reformas, porque no quiero decir si son mejoras por ahora— introducidas, precisamente, en esa sesión, a la que no pude concurrir, no obstante mis deseos.

Coincidió con lo que acaba de expresar el señor senador Haedo que se expresó en términos muy categóricos al considerarse, en la otra Cámara, el proyecto que, con algunas reformas, va a tratar el Senado en cuanto a considerar de estricta justicia encarar este proyecto de ley como no de los esfuerzos más serios de legislación orgánica y de legislación destinada —espero— a cierta permanencia, para regular intereses durante mucho tiempo considerados inconciliables y poner, en la regulación de esos intereses privados, una especie de permanente presencia del poder público, cuidando el interés social.

Ya al presentarse la primera iniciativa en la Cámara de Representantes se señalaba —con acierto, a mi juicio— como principios cardinales de esta legislación de fondo en materia de arrendamientos rurales, estos: primero, proteger al trabajador rural, protección que se concreta, en la iniciativa parlamentaria, fundamentalmente, en torno de estas direcciones: darle vocación legítima a su afán de radicación en la tierra por un mínimo de tiempo. Digo vocación legítima, para que se trate de diferenciar bien, en el tiempo, lo que puede ser simple aspiración anímica del trabajador, pero reducida al ámbito de su propio deseo, sin poderse concretar en una efectiva realización, y lo que pasaría a ser, a partir de esta legislación de fondo, si se aprobara, al permitirle concretar esa aspiración anímica, ese deseo esa volición de continuar radicado en la tierra que trabaja, por un lapso importante, con la seguridad, desde el comienzo de aplicar sus afanes a la tarea rural de que si se encariña con la tierra, si pone allí su familia y quiere quedar en ella, mientras le dure su fuerza de trabajo y ese amor a la tierra y ese afán de hacerla producir va a contar con la protección legal, no sólo para permanecer en ella largo tiempo a título de arrendatario, sino que la protección legal al trabajador rural irá más lejos, porque le va dando, durante el tiempo en que actúa como simple arrendatario o aparcerero, la posibilidad de transformarse en algo para él mucho más importante: en el propietario de esa tierra que amorosamente trabaja y hace producir.

Se concreta esto en la iniciativa a consideración del Senado, en lo que creo que se llama "derecho de prioridad a la adquisición de la tierra".

Además de ese primer carácter de la ley a estudio —protección legal al trabajador de la tierra— se advierte un cuidadoso empeño, un sostenido afán por parte del legislador, de buscar y encontrar el punto de equilibrio entre dos intereses generalmente considerados antagónicos: el del propietario y el del arrendatario, el del que da en aparcería y el del que toma en aparcería.

Esa preocupación por encontrar el justo punto de equilibrio —creo que son las palabras del informe, —se concreta, fundamentalmente, en estas cosas: en la casi diríamos, obsesión, persiguiendo que, a lo largo de toda la vinculación contractual, no se pague sino el precio justo por la tierra, el precio que pueda asegurar al trabajador rural un rendimiento razonable para su esfuerzo y dedicación, al mismo tiempo que le asegure al propietario un rendimiento también adecuado y normal para su tierra o para el capital que representa la tierra que da en arrendamiento o aparcería.

Además, proyecta sobre esta finalidad de la ley, lo que indicaba antes como signo de la efectiva protección del trabajador rural. Hablaba entonces, de radicación de la posibilidad de tener, por lo menos, una radicación mínima, —bastante dilatada, no obstante su carácter de mínima— en la tierra que trabaja pero ello se hace jugando o haciendo jugar el elemento plazo en la contratación de arrendamientos rurales. Y aquí la protección legal al trabajador y la evidencia de esa preocupación por encontrar el justo punto de equilibrio entre intereses hasta ahora considerados como irreduciblemente opuestos e inconciliables, se concreta en superponer, una vez más, en las relaciones del derecho contractual, a la voluntad de los particulares, la voluntad del Estado.

No es esto una innovación, no es esto para alarmar a nadie. En el articulado del proyecto a examen del Senado se habla de plazos mínimos forzosos. Esa expresión: "plazo mínimo forzoso" ya la tenía, entre otras, para no abundar en la búsqueda de antecedentes, la Ley de Arrendamientos del año 1927, precisamente en el artículo especialmente dirigido a resolver la situación de los arrendamientos para explotación agrícola o de granja, hubiera o no contrato escrito —creo que en el artículo 6.º de la ley.

Por último, planea por encima de estas dos finalidades, de la protección legal al trabajador rural, y esta búsqueda hasta lograr o encontrar el punto de equilibrio entre los intereses encontrados del arrendador y del arrendatario, la

que constituye, y le da, a mi modo de ver, más trascendencia económico-social a este impulso legislativo, la subordinación de todos esos intereses al interés nacional, que se concreta en asegurar en la explotación de la tierra, un grado, un modo de dedicación, una forma de explotación, que no la deje exhausta, que no la ponga totalmente al servicio del apetito del que la trabaja o la explota, dándola en arrendamiento o haciéndola trabajar por otro, sino que la tierra por sí misma se alza, diría yo, como el personaje principal de esta ley, por encima de arrendadores y arrendatarios, por encima de intereses particulares, de unos y de otros, —aunque el número de los arrendatarios nos los presente como una más próxima encarnación de los intereses colectivos o sociales—, porque, por encima de todos los órdenes de intereses privados, está el interés nacional.

La tierra, fuente principal de la riqueza del país, debe administrarse, debe explotarse, debe trabajarse, y debe cuidarse como un bien nacional, como el cimiento de la economía y de la felicidad y hasta de las posibilidades de ser, de vivir, de toda la nación.

Se concreta eso, con medidas precautorias, de vigilancia, con la imposición de obligaciones legales en número crecido, y tiene, desde el primer artículo del proyecto, esa valoración que supone encarar órdenes de individuos, órdenes de intereses alcanzados por un respeto inicial mínimo, que supera todos sus intereses directos: la tierra utilizada como instrumento de riqueza, como medio de producción, pero no para agotarla, sino para hacerla siempre útil, siempre provechosa, por encima del interés de quienes la trabajan o se sirven directamente de ella, para el interés de toda la nación.

Es natural que emprender una faena de esa importancia, debiendo mantener siempre vivo y siempre claro el espíritu del legislador, preocupado de no descuidar ninguna de esas tres finalidades esenciales, no es tarea fácil, no es tarea que se pueda hacer de un solo impulso, no es tarea que no presente a la crítica muchos puntos vulnerables; pero, si el legislador se obstinara en lograr la perfección en ésta y aún en materias mucho más simples, tendría que renunciar a producir, para verse libre de toda crítica. Y nada habría ganado. Las críticas serían, entonces, más numerosas y más justas, porque se le criticaría su inoperancia, su inercia y su impotencia para legislar.

No me voy a ocupar ahora, sino muy someramente, porque estamos en la discusión general, y aún, en esta clase de temas, no siempre al Senado se le hace fácil conservar el número y seguir con atención los debates, en el deseo de no contribuir, así, excesivamente a prolongarlo y dificultar la sanción de la ley, me voy a concretar a señalar los lineamientos generales del proyecto, dejando en algunos casos, para la discusión particular, la formulación de algunas observaciones.

El proyecto de ley a examen —lo decía recién el señor miembro informante— comienza con una especie de declaración, con una disposición puramente declarativa y no preceptiva. Creo que está bien, que es una disposición que, como se expresaba recién, contribuye a fijar cual es el espíritu o el pensamiento central dominante en el legislador. Tampoco es una innovación. Entre otras, se ha recordado comentando creo que este mismo artículo del proyecto, la ley sobre Consejo de Salarios, que comienza por una especie de definición doctrinaria de lo que es el trabajador, y la ley sobre Estatuto del Trabajador Rural, que también comienza con una definición.

Suele decirse que la definición no es propia de la ley, que es más propia de la doctrina; pero, cuando las definiciones se ponen al frente de la ley, para dar la sensación, desde que entramos en ella, desde las primeras palabras, de que hay un propósito de justicia social indudable del legislador, con espíritu levantado para tutelar al trabajador del campo, para asegurar el equilibrio de las relaciones económico-contractuales con el arrendador y para cuidar la tierra en bien de todos, bienvenidas sean las definiciones y las disposiciones legales puramente declarativas que van a servir, por lo menos, para sortear problemas de interpretación; y, si se plantean, llevar al intérprete por el buen camino, por el camino que el legislador quiso seguir, y no por el que se le podría atribuir si faltara la disposición del tipo declarativo a que me he referido.

Luego de esas declaraciones o disposiciones iniciales, el proyecto de ley a estudio del Senado, dedica una parte importante a la inscripción de los contratos de arrendamiento.

No quiero pensar que se pueda utilizar este proyecto de ley para presentarlo como una preocupación más del legislador para combatir el analfabetismo. Se quiere enseñar a escribir y a inscribir, pero no para combatir el analfabetismo, sino para defenderse de los demasiado expertos; para proteger a aquel que pueda ser analfabeto presunto o esté cerca de esa zona tan lamentable en la vida del espíritu.

Se acabarán los contratos verbales; y, aún los del pasado, con un mecanismo con el que no estoy muy de acuerdo, —pero, esto no tiene ahora mucha importancia—

hacen entrar en el molde de los contratos inscriptos, aunque no se hayan escrito.

Se realiza un poco el milagro de llevar a los registros, los contratos verbales, cosa que hasta ahora parecía —y a mí me sigue pareciendo— la negación de los registros y la modificación radical del concepto de lo que es un contrato verbal.

La verdad sea dicha, —en elogio de la Comisión—, no se ha caído en la aberración de inscribir los contratos verbales. Lo que se inscribe son "novelas" o narraciones, sobre las condiciones en que se habrían hecho los contratos verbales, que hay que suponer ajustadas a la realidad, aceptables, controladas y susceptibles de ser corregidas si no se ajustaran a la verdad.

Según mis recuerdos, en el proyecto inicial de la Cámara de Representantes, se ponía en juego una idea que me parecía o me parece más conveniente; el derecho del arrendatario vinculado por contrato verbal a compeler al arrendador a hacer el contrato escrito e inscribirlo dentro de un plazo perentorio. Pero esto puede no tener mucha importancia.

Señalo que voy a insistir sobre mi desacuerdo con el régimen de inscripción aceptado por la Comisión de Fomento, tanto con el inicialmente proyectado como con el, —a mi juicio menos feliz—, claro que me podrán convencer de mi error fácilmente porque no asistí a la reunión de la Comisión, incorporado por efecto de la reforma introducida al proyecto en la sesión de ayer de la Comisión. Creo que ninguno de los sistemas es conveniente.

Luego de lo relativo a la inscripción, hay disposiciones sobre procedimiento que puede parecer que no tienen mucha importancia. Señalo desde ahora mi extrañeza —no se si se ha modificado el texto primitivo— con la elección de una sola materia, —y sin ninguna razón visible o perceptible, al menos para mi espíritu—, de dos tipos de procedimiento sustancialmente distintos, según que se trate de fricciones producidas durante la vigencia del contrato, aún relacionadas con aspectos importantes del mismo, o que se trate de hacer efectivas las multas, —de las que voy a hablar—, con que se castiga al arrendador, en ciertas circunstancias.

Para algunos casos, la Comisión propicia un procedimiento sumario, expeditivo, breve; para otros, cuando parecen, la Comisión o el legislador, más enconados, con quien urde y pone en movimiento maniobras para defraudar la ley, para quebrantar la ley, y le aplican duras sanciones, desde el punto de vista económico. Bien: para que pueda hacerlas efectivas el arrendatario, despojado del campo, desposeído de su capital de trabajo o de la posibilidad de aplicarlo, se le arma de un juicio "ordinario" contra el arrendador, lo que nos puede colocar en trance de ver arrendatarios que son despachados o despedidos del campo que trabajan, arrendatarios que se ven dominados por la arteria del arrendador y la mañosidad de éste y a quien se le dice: "No se queje de esto; ésta es una ley de protección al trabajador rural. Usted se va; usted abandona todo, pero aquí tiene un papelito donde está copiado un artículo de la ley que le dice que tiene un juicio ordinario para perseguir el cobro de la multa". Y aún cuando pueda creer el que de "ordinario" quiere decir común, simple, de poca calidad, si acude a los técnicos éstos le dirán la vía crucis que tendrá que recorrer, o los años que tendrá que perder reclamando el pago de la multa.

En esto espero tener suerte con la Comisión en cuanto a que se cambien los procedimientos, manteniendo un tipo único de procedimiento: el procedimiento del juicio sumario o si se quiere el del juicio ordinario de menor cuantía, esto es el ordinario abreviado, como lo establecía la Cámara de Representantes, aunque aquí la cuantía no puede ser el elemento regulador, porque las multas son muy importantes o pueden llegar a serlo.

El tema de los plazos es, evidentemente, uno de los más importantes. Creo que, en general, debe votarse tal como viene proyectado, salvo pequeñas variantes.

El aumento de plazos, comparado con el de la ley de 1927, es muy relativo. Ya esta ley admitía cuatro años como plazo mínimo; a eso se sumaba un año para el desalojo. Estábamos prácticamente en el quinquenio.

La única novedad son las opciones, los años opcionales, uno, dos o tres más. Se llega así a los ocho años en lugar de los diez años proyectados inicialmente en Diputados, que fueron reducidos a ocho en la votación de esa Cámara, al final.

Sin embargo, observo, a propósito de los plazos, y me permito hacer de ello una consideración que estimo puede ser fundamental, lo siguiente: no sé si a la altura de la vida legislativa que tiene el país, después de haber sobresaturado los tomos de la colección legislativa, año a año, con dos, cuatro, seis, a veces diez leyes en materia

de desalojo, después de haber jerarquizado de ese modo el instituto del desalojo se puede, de una plumada, hacer desaparecer. No se si no repugnará o chocará tremendamente con las costumbres o hábitos o ideas de nuestros hombres de campo, el decirles en esta legislación de protección al trabajador rural, al día siguiente de cumplido su plazo legal o contractual u opcional, si hubiera hecho uso de esas opciones o prórrogas: "usted tiene que dejar la tierra, de inmediato".

No se, si desde el punto de vista propiamente técnico, la solución que se trae es objetable. Puede ser que esté bien dar más plazo legal, más plazo contractual y eliminar el desalojo. Lo que temo es que esta ley no se adapte al estado del ánimo público.

Es una verdad de la que se ha nutrido durante muchos años el habitante del país, que una cosa son los plazos del contrato, el plazo que la ley agregue a los contratos, y otra cosa son, en la relación de arrendamiento, los plazos para el desalojo.

Es difícil conjugar esas dos cosas. Se protege al trabajador rural dándole más posibilidades de radicación en la tierra que trabaja, por un lado; y, por el otro, se le dice que se acabaron los plazos para el desalojo. Es una noción que no creo que se pueda borrar de un solo golpe en el espíritu público, la de que, terminados los plazos legales o contractuales, no hay plazos de desalojo.

La solución del problema, si el Senado encontrara razonable estas observaciones, no es difícil; es, por el contrario, muy simple. Se la he adelantado al señor senador Guichón, los otros días en antesala: rebajar un año de los plazos y restablecer el año para el desalojo. No se trataría de agregar a los ocho años uno más para el desalojo, sino reducir los ocho años a siete y poner un año para el desalojo.

Tal importancia tradicional tiene la institución de desalojo —hablo de la tradición jurídica— que en el Código Civil, que no tendría porqué ocuparse del desalojo, que es materia típicamente procesal,— la trata expresamente el Código de Procedimiento que legisla sobre el juicio especial de desahucio o de desalojo.

El Código Civil, en la legislación de fondo sobre arrendamientos, siempre ha incluido disposiciones sobre el desalojo; y ello, porque la noción de plazo en el contrato de arrendamiento, se integra, con tres conceptos, correspondiendo cada uno de ellos a etapas diferentes: el plazo contractual o convencional; el plazo legal, en los casos en que, por simulación en el plazo convencional, se ve que se quiere eludir la aplicación de leyes protectoras del arrendatario; y el plazo para el desalojo, plazo para desalojo, que ha sido siempre de orden público, y al que, por ello, no se puede renunciar.

Ahora, sin decirlo expresamente, o sin advertirlo a texto expreso, se priva del derecho de gozar del plazo de desalojo; se saca de la ley toda la institución en una forma subrepticia o silenciosa.

Puede ser, —se dirá— que bastara con que el legislador "gritara" que no hay más plazos de desalojo. Yo preferiría que ese grito se lo ahorrara el legislador, y que la institución del desalojo fuera borrándose, si se estima, por la mayoría, conveniente, pero en forma paulatina o por etapas.

El elemento precio, que es muy importante, lo regula el proyecto, en función, principalmente, de lo que se llama "la rentabilidad económica normal del bien".

Señor Presidente: deploro que el señor senador Gamba me advierta que son las 20 y 30.

SEÑOR GAMBA. — Al señor senador no le hablaba. Fue una consideración formulada en voz baja.

SEÑOR BAYLEY. — Fue una consideración hecha en voz alta, para que el que habla la escuche.

No tengo la esperanza de que el Senado, no ya por la expresión de uno de sus integrantes, sino colectivamente, deje de mostrar su poco interés en lo que diga en mi exposición; pero creo de mi deber afrontar ese riesgo de que el Senado quede sin número, o de que se me haga llegar así, por vía indirecta o directa, el recuerdo de la hora en que vivimos y cumplo con mi deber de decir por lo menos aunque sea un poco desordenada o atropelladamente lo que tengo que decir sobre este tema tan importante.

SEÑOR CHIARINO. — Interesa mucho la exposición del señor senador Bayley; lo que, seguramente, se le señalaba, por algún señor senador, es la desgraciada dificultad del quórum, de lo que no somos culpables los que estamos oyéndolo con gran atención. Creo que si por cualquier circunstancia se interrumpiera este debate, es menester continuarlo. Leyes de esta naturaleza deben seguir el proceso natural de su intenso estudio; y cuando hombres de especialidad en el tema quieren explayarse a lo largo y a lo ancho, todos debemos oírlos, porque tenemos algo que recoger. Lástima que permanentemente estemos casi sin número. Yo reclamo la atención, no de los presentes, sino de los ausentes, que faltan a un deber primordial frente a un problema de esta naturaleza.

SEÑOR BAYLEY. — Con estas palabras de aliento no haré más que perseverar en mi deseo de hablar del tema, por lo menos en cuanto estime indispensable, aún corriendo el riesgo de que el Senado quede sin número.

SEÑOR MANINI RIOS. — No va a quedar sin número, porque ya está sin número.

SEÑOR BAYLEY. — Muy bien; que se levante la sesión, no estoy dispuesto a continuar hablando si no hay número.

9

SEÑOR PRESIDENTE. — El Senado ha quedado sin número; lo hay en la casa; se está llamando insistentemente para que los señores senadores pasen a Sala. No hay número para continuar sesionando. Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 20 y 30 minutos).

HECTOR BATLLE CORREA
Primer Vicepresidente

José Pastor Salvatierra. — Carlos María Penadés
Secretarios

Plinio Víctor Areco
Director del Cuerpo de Taquígrafos

DIARIO OFICIAL

SECCION AVISOS

TOMO 196

Montevideo, Martes 27 de Julio de 1954

Núm. 14284

TARIFAS

AVISOS

(Ley 16 de Octubre de 1950)

Edictos judiciales y avisos en general:

A) Hasta 1 publicación, cada 25 palabras, por día	\$ 0.80
Hasta 5 publicaciones, cada 25 palabras, por día	" 0.60
Por más de cinco publicaciones cada 25 palabras, por día	" 0.40
B) Avisos matrimoniales	" 2.00
C) Balances: por cada línea de columna chica o su equivalente	" 0.60

SUSCRIPCIONES

(Decreto 2 de Enero de 1953)

Retirando los ejemplares en la Oficina

Por semestre	\$ 9.60
Por año	" 19.20

Reparto a domicilio

Por semestre	\$ 14.40
Por año	" 28.80

(Incluye \$ 1.00 que se entrega mensualmente al repartidor por la distribución de los ejemplares).

Interior y Exterior

Por semestre	\$ 14.40
Por año	" 28.80

REGISTRO N. DE LEYES

(Editado por Diario Oficial)

1908	\$ 8.00	el tomo
1930 a 1937	" 8.00	"
1939 y 1940	" 8.00	"
1943	" 20.00	"
1945	" 8.00	"
1947	" 6.00	"
1948 a 1950	" 8.00	"
1951	" 10.00	"
1952	" 10.00	"

EJEMPLARES

(Resolución 8 de Junio de 1934)

Del día	\$ 0.10
Atrasados	" 0.20
De más de dos meses	" 0.60
De más de dos años	" 1.00

Los subscriptores deben reclamar los ejemplares que no se le entreguen dentro de las 24 horas de efectuado el reparto, presentando el recibo.

Los avisadores de la Capital deben observar cómo aparecen sus textos, correspondiendo que en el plazo de 24 horas indiquen los errores a subsanar. Para avisos del interior el plazo se amplía de acuerdo con la forma de realizarse el servicio de Correos. La demora en ordenar correcciones hace perder el derecho de reinsertión.

Los avisadores disponen hasta de 30 días, para retirar los números correspondientes a las primera y última publicaciones.

Las Oficinas Públicas que atrasen el pago de las suscripciones injustificadamente, serán privadas del servicio.

Dirijase la correspondencia comercial a la Administración, calle FLORIDA número 1178. Teléfonos: 8 - 83 - 71 y 9 - 59 - 25.

OFICIALES

INSPECCION GENERAL DE LA FUERZA AEREA

Licitaciones públicas

Nº 1/1954. — (Primer llamado). Una máquina batidora amasadora, para preparar la pasta de óxido de plomo y ácido sulfúrico para el empastado de las placas, 1 1/2 HP. potencia, capacidad aproximada de 20 litros.
Nº 2/1954. — (Primer llamado). Un torno de precisión (Relojero).
Nº 3/1954. — (Primer llamado). Un equipo de soldadura eléctrica.
Nº 4/1954. — (Primer llamado). Un equipo hidráulico para enderezar carrocerías y chasis.
Nº 5/1954. — (Primer llamado). Una sierra sin fin para cortar chapas de hierro acerado.
Nº 6/1954. — (Primer llamado). Una máquina minerva tipográfica automática.
Nº 7/1954. — (Primer llamado). Un equipo de limpieza a vapor.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados en la Sección Contraduría de esta Inspección General, (calle Y Nº 1491), donde pueden ser retirados todos los días hábiles de 13 y 30 a 18 y 30 y sábados de 8 a 12 horas. — El Inspector General de la Fuerza Aérea.
(Cuenta corriente) 10/pub. 32125 JI.26-v.ag.5.

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO Y LA MARINA

SECCION ADQUISICIONES

Licitación Pública Nº 74

Tercer llamado

Artículo: Refrigeradora a kerosene.
Los pliegos particulares de condiciones se encuentran a disposición de los interesados en la Sección Adquisiciones de este Servicio de Intendencia, todos los días hábiles de 14 a 18 horas. — Sábados de 8 a 12 horas.
Apertura: 31 de Julio de 1954, a las 10 horas.
— Montevideo, 22 de Julio de 1954.
(Cuenta corriente) 5/pub. 32120 JI.24-v.jl.29.

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO Y LA MARINA

SECCION ADQUISICIONES

Licitación Pública Nº 32

Sexto llamado

Artículo: Gabardina color verde oliva y gris claro.
Los pliegos particulares de condiciones se encuentran a disposición de los interesados todos los días hábiles de 14 a 18 horas en la Sección Adquisiciones de este Servicio (Guaraní Nº 1599). Sábados de 8 a 12 horas.
Apertura: 5 de Agosto de 1954, a las 15 horas.
— Montevideo, 21 de Julio de 1954.
(Cuenta corriente) 10/pub. 32121 JI.24-v.ag.4.

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO Y LA MARINA

SECCION ADQUISICIONES

Licitación pública Nº 5

Quinto llamado

Artículo: Lámparas eléctricas.
Los pliegos particulares de condiciones se encuentran a disposición de los interesados todos los días hábiles de 14 a 18 horas en la Sección Adquisiciones de este Servicio (Guaraní Nº 1599). — Sábados de 8 a 12 horas.
Apertura: 30 de Julio de 1954, a las 16 horas.
— Montevideo, 21 de Julio de 1954. — El Jefe de la Sección Adquisiciones.
(Cuenta corriente) 5/pub. 32110 JI.23-v.jl.28.

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO Y LA MARINA

SECCION ADQUISICIONES

Licitación pública Nº 89 — (1er. llamado)

Artículos: Brin marrón, gris, azul, blanco; entretela, percalina, bengalina, loneta, cheviot, popelina; cinta de hilera y de lana, botones, broches, vaqueta, cueros, remaches, hilo, chapas de identificación, camisas, cuellos, corbatas, espaldas, guantes, insignias, escarapelas impermeables, distintivos P G M.
Los pliegos particulares de condiciones se encuentran a disposición de los interesados los días hábiles de 14 a 18 horas en la Sección Adquisiciones de este Servicio (Guaraní Nº 1599). Sábados de 8 a 12 horas.
Apertura: 3 de Agosto de 1954, a las 15 horas.
— Montevideo, 19 de Julio de 1954.
(Cuenta corriente) 10/pub. 32094 JI.22-v.ag.2.

ESTATUTOS DE SOCIEDADES ANONIMAS

Tarifa según ley de 16 de Octubre de 1950

De \$	Con capital	Hasta \$	20.000.00	\$	50.00	la página
"	20.001.00	"	50.000.00	"	70.00	"
"	50.001.00	"	100.000.00	"	90.00	"
"	100.001.00	"	200.000.00	"	120.00	"
"	200.001.00	"	300.000.00	"	150.00	"
"	300.001.00	"	400.000.00	"	180.00	"
"	400.001.00	"	500.000.00	"	220.00	"
"	500.001.00	"	1.000.000.00	"	280.00	"
"	1.000.001.00	"	2.000.000.00	"	340.00	"
"	2.000.001.00	"	3.000.000.00	"	400.00	"
"	3.000.001.00	"	4.000.000.00	"	500.00	"
"	4.000.001.00	"	5.000.000.00	"	600.00	"
"	5.000.001.00	"	en adelante	"	700.00	"

Para las Cooperativas Rurales se hará el precio a mitad de tarifa.

El cálculo se realiza sobre la equivalencia del centímetro, esto es: contando 28 palabras.

ADMINISTRACION GENERAL DE LAS USINAS ELECTRICAS Y LOS TELEFONOS DEL ESTADO

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 1953

DEBITOS

Activo fijo:

	Total	Total General
Terrenos	\$ 16,183.992.58	
Muebles	" 288.997.06	
Edificios	" 24.867.149.80	
Maquinarias	" 36,426.620.44	
Redes y accesorios	" 40,191.018.20	
Embalses, represas y canales	" 19,603.140.25	
Caminos, vías férreas y puentes	" 2,056.272.87	
Planta general	" 4,151.993.93	
Medios de locomoción	" 485.312.90	
Gastos de instalación, estudios y proyectos	" 681.529.36	
Parque de Vacaciones U. T. E.	" 1,910.377.92	\$ 146,848,498.31

Activo circulante:

Materiales en almacenes	\$ 24,896.916.17	
Personal y suministros para trabajos en ejecución	" 6,549.965.49	
Subcom. Est. Aprovecham. Hid. del Río Negro	" 342.278.06	
Consal	" 4,855.773.62	
Talleres, trabajos en ejecución al 31 de Diciembre de 1952	" 1,690.502.53	
Geología y minas	" 1,856.678.67	
Ampliaciones	" 4,597.861.30	
Ampliación Central Batlle 2ª Unidad	" 454.238.75	
Plan de obras I. B. R. D.	" 29,863.026.45	" 75,107,241.04

Activo disponible:

Cajas	\$ 888.207.96	
Valores propiedad de la U. T. E. en custodia	" 2,827.19	
Bancos, cuentas corrientes	" 1,755.285.71	
Guaranty Trust Co New York, cuenta disponibilidad	" 331.84	
Banco República, fondos disponibles I. B. R. D.	" 185.838.85	" 2,832,491.55

Activo exigible y realizable:

Servicio de amortización de deudas	\$ 65.794.24	
Valores en custodia propiedad de terceros a n/orden en garantía	" 495.530.92	
Garantías, depósitos a n/orden	" 6,680.870.07	
Valores depositados, ex Rione	" 600.850.00	
Consignado para expropiaciones	" 600.249.93	
Consignaciones y adelantos ex Rione	" 133.370.89	
Tesorería General de la Nación, retenciones a n/orden	" 2,017.022.38	
Varios deudores particulares	" 6,172.615.56	
" " oficiales	" 8,636.933.82	
" " Intendencia Municipal	" 2,970.938.75	
" " cuentas especiales	" 66.095.49	
Cuotas anticipadas para materiales contratados	" 7,910.839.40	
Banco República, cuenta Intendencia Municipal	" 568.312.92	
Cuotas anticipadas I. B. R. D., por obras contratadas	" 6,388.076.32	
Materiales contratados en el exterior	" 18,488.831.63	" 59,497,332.32

Activo valores afectados:

Poder Ejecutivo. Activo consolidado al 31/12/1950. Decreto 25/4/1951	—	" 6,687,901.02
--	---	----------------

Activo nominal en suspenso:

Déficit en suspenso de usinas del interior	\$ 23,358.106.93	
Cambios contratados a disponer	" 2,493.241.91	
Diferencias a liquidar por cotización títulos de deudas	" 7,810.697.53	
Materiales recibidos	" 1,126.317.69	" 34,788,364.06

Cuenta de afectación de utilidades:

Intereses sobre pagos diferidos	\$ 8,078.94	
Servicio intereses de deudas	" 3,532.393.57	
Intereses sobre créditos suplementarios	" 14,255.72	
Ley 21 de Octubre de 1912	" 255,000.00	
Ley 28 de Abril de 1939	" 75,000.00	
Ley 5 de Abril de 1934. Subvenciones	" 21,450.00	
Ley del Presupuesto General de Gastos	" 13,425.00	
Compensaciones diferidas año 1952	" 555.21	
Servicio de amortización, deuda usina cuenta diferencia	" 7,279.50	
Decreto-ley 4 de Diciembre de 1942. Contribución Rentas Generales	" 487,500.00	" 4,414,937.94

Cuentas de explotación cargos e inversiones:

Gastos de ejercicio de usinas	\$ 33,694,327.49	
Gastos de ejercicio de teléfonos	" 6,880,277.39	" 40,574,604.88
		\$ 370,649,278.12

CREDITOS

Obligaciones generales:

	Total	Total General
Bancos, cuentas corrientes	\$ 705.183.00	
Retenciones sobre pagos a favor de Institutos varios	2.174.220.53	
Varios acreedores	5.575.856.73	
Ministerio de Salud Pública, ley 17/19/946	35.066.38	
Depósitos en garantía de contribución de terceros	430.227.79	
Varios acreedores, Siemens & Halske	261.475.03	
Garantías	3.541.470.43	
Letras a pagar	1.197.552.07	
Pagos adelantados por trabajos en ejecución	302.288.53	
Subsidios por fallecimiento	15.478.33	
Fondo de Fid. de Cob. y Enc. de usinas y teléfonos	92.626.92	
Poder Ejecutivo, Asignaciones Interventores de Hacienda	9.570.00	
Caja de Jubilaciones, ley 28 de Abril de 1939, artículo 49	275.000.00	
Contribución al Ministerio del Interior	58.333.34	
Rentas Generales, ley 4/12/942	1.787.500.00	
Rentas Generales, ley 9.341, Artículo 11	78.650.00	
Contribución al Presupuesto General de Gastos de la Nación	49.225.00	
Poder Ejecutivo, servicio amortización e intereses deudas	13.814.575.49	
Intendencia Municipal	568.312.92	
Intendencia Municipal, ley 21 de Octubre de 1912	141.666.63	\$ 35.194.279.26

Créditos a plazo fijo:

Créditos abiertos en el exterior I. B. R. D.	\$ 37054.512.54	
Créditos abiertos en el exterior	12.136.767.02	
Poder Ejecutivo, obligación consolidada al 31/12/950. Decreto 25/4/951 ..	18.092.911.90	\$ 33.234.191.46

Recursos legales a reintegrar:

Deuda Teléfonos del Estado en circulación	\$ 8.182.750.00	
Deuda Usinas Eléctricas en circulación	2.804.200.00	
Deuda Usinas y Teléfonos, ampliación capital (ley 12/4/950)	29.277.100.00	
I. B. R. D., cuenta préstamo, ley 18/5/951	21.107.674.18	
Deuda Obras Hidroeléctricas del Río Negro en circulación	70.925.600.00	
Export Import Bank, cuenta corriente	19.002.375.00	\$ 151.299.699.18

Pasivo nominal en suspenso:

Amortización Deuda O. Hid. del Río Negro efectuada por el Estado	\$ 2.561.001.66	
Arrendamientos plantel y equipos ex Rione	92.449.19	
Liquidación en suspenso de usinas de interior	23.358.106.93	
Letras a pagar por materiales recibidos	1.126.317.69	
Divisas contratadas	2.493.241.91	
Fondos destinados	109.612.43	
Ingresos por venta de equipos ex Rione	43.558.80	
Venta de materiales y herramientas ex Rione	111.092.65	
Depositantes de valores Parque de Vacaciones	22.562.40	
Diferencias de cambio deudas externas	6.055.812.07	\$ 35.973.755.78

Cuentas de explotación proventos:

Créditos de ejercicio de usinas	\$ 49.876.369.12	
Créditos de ejercicio de teléfonos	10.578.992.53	
Servicio de amortización Deuda O. Hid. Río Negro, cuenta diferencia	32.700.71	
Servicio de amortización Deuda Teléfonos, cuenta diferencia	12.586.83	\$ 60.500.649.19

Capital propio activo líquido:

Fondo de reserva	\$ 4.634.586.52	
Utilidades acumuladas	49.792.116.81	\$ 54.426.703.33
		\$ 370.649.278.12

Ing^o Alvaro Correa Moreno, Presidente. — Emilio C. Tacconi, Secretario General. — Cr. Pedro Rivero, Gerente Contable. — Cr. Alfredo Fressia, Contador General.

(Cuenta corriente). — 30699. — 1/pub.

MANUEL MARTINEZ REINA S. A. "EL TELAR"

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1953

ACTIVO

Activo disponible:

Caja	\$ 19.781.70
------------	--------------

Activo exigible:

Deudores varios	\$ 546.120.63	
Valores en depósito	59.50	
Caja de Jubilaciones, adelantos	4.530.00	\$ 551.247.20

Activo realizable:

Acciones y valores	\$	1.00	
Repuestos	"	44.813.88	
Mercaderías y materias primas	"	1.318.994.55	
La Papelera del Plata Ltda.	"	2.500.00	
Materias primas a recibir	"	101.101.56	" 1.467.410.99

Activo inmovilizado:

Muebles y útiles	\$	15.516.71	
Máquinas y herramientas	"	460.140.40	
Máquinas Sección Hilandería	"	955.75.96	
Terrenos y edificios	"	630.252.78	" 2.061.666.85

Activo transitorio:

Pagos adelantados	\$	1.513.33	
Intereses adelantados	"	24.104.17	" 25.617.50

Activo nominal:

Gastos de constitución	\$	4.491.17	
Marcas	"	16.155.80	

Pérdidas y ganancias:

Saldo anterior	\$	232.741.31	
Ejercicio 1953	"	1.192.725.11	" 1.425.466.92
			" 1.446.113.89
			\$ 5.571.818.06

Cuentas de orden:

Acciones	\$	1.295.300.00	
Acciones garantía Directorio	"	10.000.00	
Documentos descontados	"	21.990.55	" 1.327.290.55
			\$ 6.899.108.61

Aprobado por la asamblea general ordinaria del 23/4/1954

La Oficina de Recaudación del Impuesto a las Ganancias Elevadas deja constancia que el presente estado de situación, activo se halla transcrito a folios 18 del libro Copiador de Balances, rubricado el 24 de febrero de 1951, en el Juzgado Letrado de 6.º Turno.

PASIVO

Pasivo exigible:

Dividendo Ejercicio 1950	\$	60.00	
Dividendo Ejercicio 1951	"	715.00	
Banco República, préstamo industrial	"	750.000.00	
Banco, cuenta corriente	"	303.858.14	
Banco, cuenta vales	"	272.800.00	
Asignación familiar	"	57.777.67	
Caja de Compensación N.º 35	"	29.440.15	
Accionistas en cuenta corriente	"	55.10	
Impuestos internos	"	26.429.61	
Caja de Jubilaciones	"	109.199.08	
Cuentas a pagar	"	89.664.27	
Sueldos y jornales a pagar (retroactividad)	"	43.939.03	\$ 1.683.938.05

Patrimonio neto:

Capital integrado	\$	3.704.700.00	
Provisión especial	"	627.97	
Reserva estatutaria	"	53.601.90	
Reserva equipos productivos	"	39.636.00	
Provisión para amortizaciones	"	84.314.14	" 3.882.880.01

Cuentas de orden:

Depósito garantía Directores	\$	10.000.00	
Bancos, documentos descontados	"	21.990.55	
Capital a integrar	"	1.295.300.00	" 1.327.290.55
			\$ 6.899.108.61

Montevideo, Diciembre 31 de 1953.

Aprobado por la asamblea general ordinaria del 23/4/1954

La Oficina de Recaudación del Impuesto a las Ganancias Elevadas deja constancia que el presente estado de situación, pasivo, se halla transcrito a folios 19 del libro Copiador de Balances, rubricado el 24 de febrero de 1951, en el Juzgado Letrado de 6.º Turno.

RESULTADO DEL EJERCICIO 1953

PERDIDAS

Repuestos	\$	39.938.63
Seguros y patentes	\$	44.865.25

Gastos generales:

Sueldos y jornales	\$	596.567.35
Cargos fiscales	"	108.508.37
Cargas sociales	"	219.058.41
Fuerza y energía motriz	"	18.286.73
Transporte y acarreo	"	3.368.52
Aguas corrientes	"	1.201.64
Varios	"	54.626.53
		<u>1.001.615.55</u>

Descuentos	"	111.637.72
Comisiones	"	40.396.71
Intereses	"	69.604.69

Gastos de hilandería:

Sueldos y jornales	\$	185.480.97
Cargas sociales	"	7.183.68
Fuerza y energía motriz	"	35.132.53
Varios	"	240.71
		<u>226.037.89</u>

Acciones y valores	"	3.626.73
--------------------------	---	----------

Deudores varios:

Amortización por deudores incobrables	"	42.499.73
---	---	-----------

Amortizaciones:

Muebles y útiles	\$	1.551.67
Máquinas y herramientas	"	23.007.02
Máquinas hilandería de algodón	"	47.787.35
Marcas	"	1.615.53
Gastos de constitución	"	898.23
Terrenos y edificios	"	9.452.79
		<u>84.314.14</u>

\$ 1.664.537.09

GANANCIAS

Mercaderías	\$	464.258.79
Ajustes	"	6.140.34
Dividendos sobre títulos y acciones	"	1.412.85

\$ 471.811.98

Amortizaciones	\$	84.314.14
Déficit del Ejercicio	"	1.108.410.97

Pérdida neta al 31/12/1953

\$ 1.192.725.11

\$ 1.664.537.09

Montevideo, Diciembre 31 de 1953.

Aprobado por la asamblea general ordinaria del 23/4/1954

La Oficina de Recaudación del Impuesto a las Ganancias Elevadas deja constancia que el presente estado de pérdidas y ganancias, se halla transcrito a folios 20 del libro Copiador de Balances, rubricado el 24 de febrero de 1951, en el Juzgado Letrado de 6.º Turno.

\$ 207.00. 1º pub. — 6952.

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

PROYECTO DE BALANCE SEMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1954 A PRESENTARSE A LA 131.ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Casa Central, Agencias y Sucursales

ACTIVO

Disponible.

Encaje metálico:

Plata	\$	6.000.00
Vellón	\$	3.457.23
		<u>9.457.23</u>
Encaje fiduciario	"	1.904.000.09
		<u>\$ 1.913.457.32</u>

Exigible a la vista:

Banco de la República O. del Uruguay. — Cuenta corriente	\$ 225.708.80	
Banco de la República O. del Uruguay. — Cámara Compensadora	" 2.275.822.91	" 2.501.531.71

Realizable (Cobertura de Encaje):

Deuda Pública (valor nominal \$ \$51.700.00)	\$ 45.475.50	
Letras de Tesorería (valor nominal \$ 500.000.00)	" 500.000.00	" 545.475.50
Suma del Encaje		\$ 4.960.464.44

Realizable:

Acciones y valores	\$ 1.00	
Inmuebles	" 397.160.70	" 397.161.70

Exigible:

Cuentas corrientes	\$ 10.717.961.77	
Valores descontados	" 17.345.546.37	
Préstamos en moneda extranjera a clientes	" 3.857.217.59	
Hipotecas	" 199.476.59	
Inmuebles prometidos en venta	" 36.555.06	
Terrenos vendidos a plazo	" 181.986.56	
Deudores en gestión y trámite	" 78.660.90	
Deudores en gestión y mora	" 1.00	
Otras colocaciones	" 1.372.281.99	" 33.789.687.83

Cuentas en el exterior:

Corresponsales y operaciones pendientes		" 4.668.581.72
---	--	----------------

Inmovilizado:

Equipo mecánico, muebles y útiles	\$ 60.269.28	
Edificios para uso del Banco	" 704.964.45	" 765.233.73

Varias cuentas deudoras:

Saldos deudores no especificados		" 524.840.39
Total del Activo		\$ 45.105.969.81

Cuentas de orden:

Varias cuentas deudoras	\$ 35.128.231.49	
Valores depositados	" 23.866.542.37	" 58.994.773.86
		\$ 104.100.743.67

PASIVO

Patrimonial:

Capital realizado	\$ 3.493.117.00	
Reserva legal	" 1.602.701.75	\$ 5.095.818.75

Exigible a la vista:

Cuentas corrientes y otros depósitos a menos de 30 días		" 8.009.683.86
---	--	----------------

Exigible a plazo:

Caja de Ahorros y Alcantías (30 días de pre-aviso)	\$ 15.386.466.04	
Otros depósitos a plazo fijo o a más de 30 días	" 2.277.532.94	" 17.663.998.98

Cuentas en el exterior:

Corresponsales y operaciones pendientes	\$ 3.221.474.39	
Cuentas en moneda extranjera	" 3.662.093.68	" 6.883.568.07

Exigible:

Acreedores varios	\$ 5.105.636.46	
Dividendos a pagar	" 33.651.28	" 5.139.287.74

Varias cuentas acreedoras:

Utilidades a liquidar sobre terrenos vendidos a plazo	\$ 112.001.75	
Intereses a vencer	" 576.957.21	
Saldo acreedores no especificados	" 1.241.038.41	

Ganancias y pérdidas:

Utilidad del ejercicio	" 388.615.54	" 2.313.000.91
Total del Pasivo		\$ 45.105.969.81

Cuentas de orden:

Varias cuentas acreedoras	\$ 35.128.231.49	
Depositantes de valores	" 23.866.542.37	" 58.994.773.86
		\$ 104.100.743.67

PROYECTO DE CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1954 A PRESENTARSE A LA 131.a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

D E B E —

Gastos de administración, etc.	\$ 932.626.48
Impuestos varios	" 244.561.15
Caja de Jubilaciones	" 116.593.78
	<u>\$ 1.293.781.41</u>

Saldo:

Beneficio del semestre	" 383.615.54
	<u>\$ 1.677.396.95</u>

H A B E R —

Intereses, cambios, comisiones, alquileres, etc.	<u>\$ 1.677.396.95</u>
---	------------------------

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES AL 30 DE JUNIO DE 1954 A PRESENTARSE A LA 131.a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Para pago de dividendos y otros según artículo 49 de los Estatutos	\$ 208.717.69
A reserva legal	" 52.863.25
Aporte extra a reserva legal	" 70.000.00
Aporte para obligaciones de carácter social	" 40.000.00
Al nuevo ejercicio	" 12.534.60
	<u>\$ 383.615.54</u>

Alberto Vitelli, Presidente. — Luis Alberto Garayalde, Director - Gerente General. — Roberto Fernández, Contador.

\$ 165.60. — 8611. — 1 pub.

CAJA POPULAR DE LASCANO**BALANCE CORRESPONDIENTE AL 6 DE JULIO DE 1954****DEBITO — (ACTIVO)**

Disponibles:	
Encaje metálico:	
Plata	\$ 151.20
Vellón	" 45.63
	<u>\$ 196.83</u>
Encaje fiduciario	" 42.384.00
	<u>\$ 42.580.83</u>
Exigible a la vista:	
Banco de la República Oriental del Uruguay. — Cuenta corriente	" 80.059.50
Realizable (Cobertura de Encaje):	
Deuda Pública	" 19.700.00
	<u>\$ 23.840.33</u>
Realizable:	
Acciones y valores	\$ 940.00
Inmuebles	" 10.500.00
	<u>\$ 11.440.00</u>
Exigible:	
Cuentas corrientes	\$ 86.877.10
Valores descontados	" 636.587.55
	<u>\$ 723.464.65</u>
Inmovilizado:	
Muebles y útiles	" 6.1131.09
Varías cuentas deudoras:	
Saldo deudores no especificados	" 41.146.95
	<u>\$ 874.523.02</u>
Cuentas de orden:	
Valores depositados	" 207.052.00
	<u>\$ 1.081.575.01</u>

CREDITO — (PASIVO)

Patrimonial:	
Capital realizado	\$ 122.500.00
Fondo de reserva	" 10.279.44
	<u>\$ 132.779.44</u>
Exigible a la vista:	
Cuentas corrientes y otros depósitos a menos de 30 días	" 44.440.97
Exigible a plazo:	
Caja de Ahorros y Alcantías (30 días de preaviso) ..	\$ 452.924.86
Otros depósitos a plazo fijo o a más de 30 días	" 147.505.70
	<u>\$ 600.430.56</u>
Exigible:	
Varios acreedores	" 15.497.44
Varías cuentas acreedoras:	
Saldo acreedores no especificados	" 81.374.61
	<u>\$ 874.523.02</u>
Cuentas de orden:	
Depositantes de valores	" 207.052.00
	<u>\$ 1.081.575.02</u>

Lascano, Julio 8 de 1954.

Inspección General de Hacienda. — Sección Bancos.
— Autorízase su publicación en el Diario Oficial.
— José P. Bustos, Inspector.

\$ 79.20. — 8699. — 1 pub.

CAMBIO MESSINA S. A.

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 1953

ACTIVO

Disponibles:			
Caja	\$	22.868.33	
Bancos	"	100.00	\$ 22.968.33
Exigible:			
Cuentas a cobrar	\$	4.561.33	
Documentos a cobrar	"	25.076.56	" 29.637.89
Realizable:			
Números de lotería	\$	7.656.00	
Moneda extranjera	"	14.664.18	
Títulos de deuda	"	10.804.68	" 33.124.86
Inmovilizado:			
Muebles y útiles	"	8.500.00	
Transitorio:			
Pagos adelantados	"	153.64	
Nominal:			
Llave	"	3.000.00	
	\$	97.384.71	
Cuentas de orden::			
Valores en garantía	\$	11.500.00	
Acciones a mitir	"	71.900.00	" 83.400.00
	\$	180.784.71	

PASIVO

Patrimonio neto:			
Capital autorizado	\$	150.000.00	
Capital autorizado a subscribir	"	71.900.00	
Capital integrado	\$	78.100.00	
Reserva estatutaria	"	503.24	
Reserva especial	"	2.611.83	
Utilidad líquida a distribuir	"	1.336.46	\$ 82.551.53
Exigible:			
Cuentas corrientes	\$	12.428.57	
Cuentas a pagar	"	1.183.76	
Impuestos a pagar	"	1.120.85	
Retención en garantía	"	100.00	" 14.833.18
	\$	97.384.71	
Cuentas de orden:			
Depositorios de valores	\$	11.500.00	
Capital autorizado a subscribir	"	71.900.00	" 83.400.00
	\$	180.784.71	

Este Balance fué aprobado por la Asamblea General de Accionistas realizada el 30 de Octubre de 1953.

La Oficina de Recaudación del Impuesto a las Ganancias Elevadas deja constancia que el presente Balance General se halla transcrito a folios 2 del libro Copiador, rubricado el 28 de Junio de 1952 en el Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Civil de 6.º Turno.

BALANCE DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 1953

Utilidades brutas por comisiones, utilidades de cambios y venta de loterías y quinielas	\$	60.042.93
Saldo del ejercicio anterior	"	103.82
	\$	60.146.76

A deducir:

Sueldos	\$	25.940.00
Alquileres y man. local	"	8.143.29
Propaganda	"	5.004.10
Comisiones	"	4.190.50
Aguinaldos	"	602.50
Impuestos	"	1.312.99
Leyes sociales	"	2.787.44
Gastos generales	"	4.329.48
	\$	52.310.30

Amortizaciones:

Llave	\$	5.000.00
Muebles y útiles	"	1.500.00
	"	6.500.00
Utilidad neta. (Utilidad que pasa al próximo ejercicio)	\$	1.336.46

El Balance de Resultados fué aprobado por la Asamblea General de Accionistas realizada el 30 de Octubre de 1953.

La Oficina de Recaudación del Impuesto a las Ganancias Elevadas deja constancia que el presente Estado de Pérdidas y Ganancias se halla transcrito a folios 5 del libro Copiador, rubricado el 28 de Junio de 1952 en el Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Civil de 6.º Turno.

\$ 95.40. — 7357. — 1 pub.

MUY IMPORTANTE. — Lo avisadores de la Capital deben observar cómo aparecen sus textos, indicando dentro de las 24 horas de circular aquéllos los errores a subsanar. Para avisos del interior el plazo se amplía de acuerdo con la forma de realizarse el servicio de Correos. La demora en ordenar correcciones hace perder el derecho a reinserción.